FACTA NON VERBA

Revista de Derecho y Ciencias Sociales

Vol. 3 • N.º 5 • Diciembre 2024



editorial UNIMETA
Fundada en 1983

[FACTA NON VERBA]

Revista de Derecho y Ciencias Sociales

Vol. 3 • N.º 5 • Diciembre 2024

Nancy Espinel Riveros
Presidenta Sala General

Leonor Mojica Sánchez
Rectora

Leonor Mojica Sánchez
Sergio Andrés Alfaro Marenco
Editores

Sergio Andrés Alfaro Marenco
Corrección de estilo

Proceditor - proceditor@yahoo.es
Corrección de estilo, diseño gráfico editorial, armada electrónica e impresión

Cristian Julián Díaz Álvarez
Vicerrector Académico, Investigaciones y Proyección Social

Hebandreyna González García
Directora de Investigaciones

Maria Alejandra Cárdenas Moreno
Decana de la Escuela de Derecho

Jairo Alberto Merlo Pinzón
Jefe del Centro de Investigaciones
Jorge Eliecer Gaitán

Editorial
Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA
Carrera 32 N.º 34B-26, Campus San Fernando
Villavicencio, Meta (Colombia)
Teléfono: +57 (608) 662 1825 Ext. 130
Fax: 662 1827

www.unimeta.edu.co

Copyright©, 2026
Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA

ISSN: 2805-7643 (en línea)
ISSN: 3028-3302 (impreso)

Enero de 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducirse, almacenarse en un sistema recuperable o transmitirse en ninguna forma por medios electrónicos, mecánicos, fotocopias, grabaciones u otros, así como su utilización para el entrenamiento o desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, sin la previa autorización por escrito de la Editorial Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA y de los autores. Los conceptos expresados en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente corresponden con los de la Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA , que da cumplimiento al Depósito Legal según lo establecido en la Ley 44 de 1993; los decretos 460 de 1995, el 2150 de 1995, y el 358 de 2000, y la Ley 1379 de 2010.

Contenido

5 Editorial
José Joaquín Castro Rojas

6 Adam Smith y la moral tributaria
Leidy Viviana Pizza Piza

14 Espacios de aprendizaje inmersivos en realidad virtual: el destino de los programas de Derecho
María Alejandra Cárdenas Moreno

22 Infancia protegida: contraste jurídico entre Colombia y España
Laura Camila Barrios Molano, Darlyn Paola Peñuela Díaz

36 Maternidad subrogada en Colombia: ¿un procedimiento con fines lucrativos?
Daniela Vanessa López Sepúlveda, Angie Valentina Rojas Gil

50 Propiedad, posesión y tenencia de tierras para extranjeros: perspectivas para la reflexión
Jairo Alberto Merlo Pinzón, Jorge Gustavo Munévar Mora

62 Territorializar el discurso contemporáneo: el impacto de la inteligencia artificial en la construcción del territorio y el Estado
José Luis Farelo Guerra

68 Sociedades comerciales de hecho: abordaje jurisprudencial con énfasis en sociedad de hecho derivada de la relación en concubinato
Juan Sebastián Cubides Salazar, Jorge Gustavo Munévar

82 Francisco José de Caldas y la tecnociencia en la colonialidad neogranadina
Jairo Alberto Merlo Pinzón

92 Del desprecio al reconocimiento: fundamentos normativos en la teoría social de Axel Honneth
Sergio Andrés Alfaro Marenco

Editorial

La publicación de este nuevo volumen de *Facta Non Verba*, revista de la Escuela de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta, reafirma nuestro compromiso con la divulgación de un pensamiento jurídico crítico, innovador y socialmente pertinente. Esta edición reúne una serie de investigaciones que, en su conjunto, trazan un mapa de los desafíos más apremiantes que definen nuestro tiempo, demostrando la capacidad del derecho para dialogar con la tecnología, la historia, la moral y la complejidad de las relaciones humanas.

El eje central de esta compilación gravita en torno a la tensión entre los fundamentos normativos y las realidades sociales en constante transformación. Los trabajos aquí congregados no se limitan a un análisis técnico de la norma; por el contrario, exploran el derecho como un espacio vivo de disputa, adaptación y construcción de sentido. Desde esta perspectiva, se articulan tres grandes dimensiones de reflexión:

En primer lugar, se establece un diálogo entre la economía, la moral y los fundamentos de la teoría social. El examen de la filosofía moral de Adam Smith en el contexto tributario nos invita a repensar los valores que sustentan nuestras obligaciones fiscales. Este diálogo se proyecta hacia una reflexión más amplia sobre los fundamentos normativos de la vida social, que culmina con un estudio sobre la teoría de Axel Honneth, en el cual el reconocimiento y la lucha contra el desprecio se plantean como pilares de una teoría social crítica, ofreciendo un marco fundamental para evaluar la calidad moral de nuestras instituciones.

En segundo término, se aborda el impacto de la tecnología y la ciencia en las estructuras jurídicas, educativas y sociales. La realidad virtual emerge como una herramienta disruptiva para los métodos de aprendizaje en la formación jurídica, mientras que la inteligencia artificial redefine conceptos fundacionales como territorio y soberanía, obligando al derecho a repensar sus categorías tradicionales. Esta reflexión se complementa con una mirada histórica que rastrea el papel de la tecnociencia en el contexto colonial, recordándonos que la relación entre conocimiento, poder y derecho es una constante que demanda una vigilancia crítica permanente.

Finalmente, se profundiza en la capacidad del derecho para responder a conflictos sociales complejos y a nuevas realidades normativas. El análisis de la protección de la infancia desde una perspectiva comparada, la maternidad subrogada en Colombia, la tenencia de la tierra por extranjeros y el régimen patrimonial de las sociedades comerciales de hecho derivadas del concubinato evidencia cómo el ordenamiento jurídico debe interpretar y regular fenómenos que se sitúan en la intersección entre lo económico, lo familiar y lo social.

Más allá de la diversidad de sus objetos de estudio, los artículos de este volumen convergen en un propósito común: interrogar las bases sobre las cuales se construyen la justicia, la equidad y la dignidad en nuestras sociedades. Como decano de la Escuela de Derecho, es un honor presentar esta compilación, que es testimonio del rigor y la vocación de impacto de nuestra comunidad académica. Invitamos a los lectores a recorrer estas páginas con espíritu crítico, con la convicción de que el conocimiento, cuando se asume con responsabilidad, se convierte en el primer paso para la acción transformadora.

Facta Non Verba: 'más que palabras, hechos'.

José Joaquín Castro Rojas
Decano Escuela de Derecho

Adam Smith y la moral tributaria

Leidy Viviana Pizza Piza*

* Contadora y Magíster en Finanzas, Especialista en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo; Líder de Contratación de Gestión Preventiva.
Insurance Procurement
AXA Colpatria
leivivip@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-7851-5569

Resumen

El propósito de este estudio es explorar los vínculos entre la moral tributaria y las concepciones religiosas presentes en la obra clave de Adam Smith, *La teoría de los sentimientos morales* (1759/2013). A través de este examen, se busca mostrar cómo la religiosidad de los individuos influye en la manera en que perciben y cumplen sus deberes fiscales, partiendo de la hipótesis de que una mayor inclinación religiosa puede favorecer al Estado tanto en la recaudación como en la construcción de cohesión social. Smith plantea que la religión no debe entenderse únicamente como un conjunto de normas dogmáticas, sino como un sistema que se entrelaza con principios sociales orientados al bienestar general. Desde esta perspectiva, la moral tributaria adquiere un papel central, pues es en ella donde la virtud y la benevolencia se presentan como motores que impulsan a las personas a anteponer el interés colectivo a los impulsos egoístas. Al cierre del análisis, se resaltará cómo los planteamientos de Smith continúan aportando elementos valiosos para las discusiones actuales sobre la tributación, en la medida en que permiten incluir factores no tradicionales en la comprensión de la conducta de los contribuyentes y de la ética que guía sus decisiones fiscales. Este enfoque no solo ilumina la influencia de la religión en la configuración de la moral tributaria, sino que también invita a reflexionar con mayor profundidad sobre sus efectos sociales y económicos en la esfera pública.

Palabras clave: Estado, impuestos, moral, tributación, religión.

> La religión y la virtud legitiman al Estado, fortalecen la moral tributaria y promueven responsabilidad colectiva hacia el bien común.

Abstract

The purpose of this study is to explore the links between tax morality and the religious conceptions present in Adam Smith's key work: *The Theory of Moral Sentiments* (1759/2013). This examination shows how individuals' religiosity influences their perceptions and fulfillment of tax duties, based on the hypothesis that a greater religious inclination can benefit the State both in tax collection and in building social cohesion. Smith proposes that religion should not be understood solely as a set of dogmatic norms but as a system intertwined with social principles oriented towards general well-being. From this perspective, tax morality plays a significant role, as it presents virtue and benevolence as driving forces that impel people to prioritize collective interest over selfish impulses. At the end of the analysis, we will highlight how Smith's approaches continue to contribute valuable elements to current discussions on taxation: they allow for the inclusion of non-traditional factors in understanding taxpayer behavior and the ethics that guide their tax decisions. This approach not only illuminates the influence of religion in shaping tax morality but also invites deeper reflection on its social and economic effects in the public sphere.

Keywords: State, taxes, taxation, morality, religion.

Introducción

Adam Smith, reconocido como una de las figuras fundacionales de la economía clásica, dejó una huella profunda en la construcción de esta disciplina, con repercusiones que siguen vigentes hasta nuestros días. Sus obras más influyentes, *La teoría de los sentimientos morales* (1759/2013) y *La riqueza de las naciones* (1776), no solo establecieron los cimientos del pensamiento económico moderno, sino que también ejercieron un fuerte impacto en la filosofía moral. En ellas, Smith sostiene que la acción ética no se apoya en normas rígidas ni en dogmas nacionales, sino en sentimientos universales compartidos por todos los seres humanos. Este planteamiento, estrechamente vinculado con su admiración por el estoicismo, revela su interés por comprender los principios que regulan la conducta y su influencia en la organización social.

El propósito de este artículo es analizar las ideas de Smith en torno a la moral tributaria, con especial atención al peso que tienen las creencias religiosas en la manera en que se perciben y legitiman los impuestos. En este sentido, *La teoría de los sentimientos morales* (1759/2013) resulta clave, pues constituye una de las primeras reflexiones sistemáticas sobre los juicios morales, entendidos como producto de la interacción humana y moldeados por el contexto social. Así, la religión adquiere relevancia como un factor determinante en la vida colectiva y en el rol del Estado, llamado a garantizar el bien común.

La reflexión sobre la moral tributaria en la obra de Smith puede organizarse en tres ejes: moral, religión y Estado. En relación con la moral, la virtud se presenta como el núcleo de la vida ética y se asocia con rasgos admirables, como la prudencia, la rectitud y la benevolencia. Tales cualidades, próximas a lo divino, favorecen la compasión y el bienestar de los demás.

En cuanto a la religión, Smith la concibe como un componente decisivo de la conducta individual y como un aliado del Estado en la consolidación de la cohesión social y la legitimación de la carga tributaria. La religiosidad, según esta visión, puede moldear la actitud de los ciudadanos frente a los impuestos, vinculando su cumplimiento no solo a deberes terrenales, sino también a la salvación espiritual y al perdón de los pecados. De esta manera, se genera un círculo virtuoso en el que la fe fortalece la disposición a contribuir y el Estado se beneficia de una ciudadanía más dispuesta a apoyar el bien común.

Por último, el papel del Estado, entendido como la instancia responsable de garantizar el bienestar colectivo, se aborda a la luz de la concepción utilitarista de John Stuart Mill, quien, en *Utilitarismo* (1891), definió su misión como la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Esta perspectiva permite pensar cómo la falta de transparencia o legitimidad en las acciones estatales puede erosionar la confianza ciudadana y, en consecuencia, debilitar la moral tributaria. En este punto, la religión aparece nuevamente como un elemento que puede mitigar la desconfianza, sosteniendo la disposición a contribuir incluso en contextos de incertidumbre.

El análisis de la obra de Smith, aplicado al ámbito de la tributación, no solo enriquece la comprensión histórica de su pensamiento, sino que también ofrece herramientas conceptuales para reflexionar sobre la relación entre economía, moralidad y responsabilidad cívica en la actualidad. Examinar estos vínculos permite reconocer la vigencia de su legado y abrir un diálogo sobre cómo los principios morales y religiosos continúan influyendo en las prácticas fiscales y en la vida social contemporánea.

La función de la moral en lo tributario

La relación entre moralidad y tributación ocupa un lugar central en el pensamiento de Adam Smith, quien introduce la noción de *moral tributaria*. Este concepto, retomado posteriormente por autores como Andreoni (1990) o Erard y Feinstein (1994; como se cita en Barth *et al.*, 2022), hace referencia a las normas sociales que orientan la conducta ciudadana en torno a los impuestos, distinguiendo lo que se considera correcto o incorrecto más allá de la mera obligación legal. En esta línea, la tributación no se limita a un mandato jurídico, sino que adquiere un carácter ético

al ser entendida como un compromiso con la justicia social y el bienestar común.

La moral, en este marco, está estrechamente vinculada con la formación personal y con los principios inculcados desde la infancia. El entorno familiar, las creencias y la educación transmiten los valores que sostienen la convivencia. En *La teoría de los sentimientos morales* (1759/2013), Smith sostiene que los individuos poseen una inclinación natural a respetar normas de conducta, movidos por la idea de una divinidad que observa y juzga sus actos. De esta manera, los preceptos morales se conciben como mandatos superiores: recompensan a quienes actúan rectamente y sancionan a quienes los transgreden[1]. Así, la moral se convierte en un marco de referencia para las decisiones humanas, incluidas aquellas relacionadas con el pago de tributos.

No obstante, Smith advierte que los sentimientos morales son vulnerables a la corrupción, sobre todo en sociedades marcadas por la desigualdad. La tendencia a venerar a los ricos y despreciar a los pobres, según él, distorsiona nuestra percepción de la justicia y debilita la disposición a cumplir con las obligaciones fiscales. La inequidad en la distribución de cargas impositivas genera desconfianza en el sistema y puede derivar en actitudes de resistencia frente al pago de impuestos, alimentando un círculo de injusticia y desafección social.

Aun así, Smith subraya que las malas prácticas de unos pocos no deben justificar la desobediencia individual. La sociedad debe guiarse por principios generales como el amor, la gratitud y el respeto mutuo, pilares indispensables de la vida colectiva. Bajo esta lógica, la moral tributaria se transforma en un factor de cohesión, ya que el cumplimiento fiscal se asume como un acto de solidaridad hacia la comunidad en su conjunto.

En su reflexión sobre la virtud, Smith identifica tres principios esenciales: la corrección, la prudencia y la benevolencia. La corrección consiste en moderar las pasiones para actuar con rectitud; la prudencia, en orientar de forma razonada la búsqueda de la propia felicidad, evitando que el interés individual afecte negativamente al colectivo; y la benevolencia, en priorizar la felicidad de los demás, lo que fortalece la vida comunitaria. De los tres, la benevolencia ocupa un lugar privilegiado, pues asegura que las acciones individuales estén encaminadas al bienestar general, convirtiéndose así en la base de la moral tributaria.

Smith afirma que la benevolencia es la virtud suprema, la más cercana a lo divino, porque de ella brota la excelencia moral. En este sentido, un contribuyente benevolente no solo obedece la ley, sino que ve en el pago de tributos un acto de justicia y de servicio a la colectividad. Cuando este principio guía el comportamiento, el cumplimiento fiscal trasciende lo jurídico para convertirse en una expresión ética que refuerza el tejido social[2].

1 Del análisis que Adam Smith realiza sobre el principio de aprobación puede desprenderse que la moralidad no surge como un constructo meramente lógico, sino como una vivencia profundamente enraizada en nuestras emociones y sentimientos. Esta visión invita a replantear el modo en que concebimos la ética en el mundo actual, al mostrar que las decisiones morales no deberían entenderse únicamente desde un marco racional o utilitario, sino también como el resultado de nuestras interacciones afectivas con los demás. En una sociedad donde la racionalidad tiende a ocupar el centro del debate ético, Smith subraya la importancia de incorporar la empatía y la sensibilidad emocional como bases esenciales para orientar la conducta. Hay que reconocer que nuestras intuiciones sobre lo justo y lo injusto nacen de la relación emocional que establecemos con otros seres humanos, lo que [...] nos abre la posibilidad de construir comunidades más solidarias y compasivas. Así, la moralidad deja de ser un simple catálogo de normas dictadas por la razón para convertirse en una manifestación de la humanidad compartida. Este enfoque, además, otorga legitimidad a la pluralidad de experiencias que marcan la vida social y favorece una ética más inclusiva, capaz de reconocer el papel decisivo de las emociones en la configuración de nuestras decisiones y valores morales (Alean, 2014).

2 La célebre noción de la "mano invisible" propuesta por Adam Smith se ha consolidado como uno de los pilares en la defensa del libre mercado y la autonomía económica, al sostener que el Estado no debería intervenir de manera directa en los intercambios comerciales. Para Smith, el propio mercado cuenta con mecanismos internos que le permiten autorregularse, de modo que las dinámicas del comercio libre tienden, por sí solas, hacia el equilibrio y la eficiencia, sin necesidad de una planificación centralizada. No obstante, la propuesta de Smith no puede reducirse únicamente a un planteamiento económico. En su pensamiento, el funcionamiento saludable del mercado exige estar acompañado por un marco ético sólido. Principios como la justicia, la equidad y la benevolencia son, para él, indispensables no solo para garantizar el correcto desempeño de la economía, sino también para afianzar la cohesión social. De esta forma, aunque la "mano invisible" describe la capacidad del mercado de operar de manera autónoma, Smith advierte que el verdadero progreso de una comunidad depende de que los individuos actúen dentro de un horizonte moral que estimule conductas responsables y virtuosas. Solo así, la búsqueda del beneficio personal puede transformarse en un aporte efectivo al bienestar colectivo.

La ausencia de benevolencia, por el contrario, se traduce en conductas egoístas y dañinas que debilitan la solidaridad y dificultan la convivencia. En cambio, cultivar la preocupación genuina por el bienestar ajeno fortalece tanto la moral individual como el compromiso comunitario. Así, la moral tributaria no aparece únicamente como un deber legal, sino como un imperativo ético, indispensable para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que cada persona reconoce que su aporte sostiene el bienestar de todos.

La influencia de la religión en la tributación

La religión aparece como un factor decisivo en la manera en que los individuos asumen sus compromisos fiscales. Para comprender el concepto de *moral tributaria*, es necesario entenderlo como la disposición que tienen las personas para cumplir con sus obligaciones impositivas. Esta inclinación no depende únicamente del miedo a las sanciones legales, sino que también se ve influida por convicciones profundas, entre ellas las religiosas. Como señala Torgler (2006), la fe puede actuar como un regulador interno que orienta la conciencia moral, impulsando un sentido de deber que trasciende lo meramente normativo. En ese sentido, la religión se convierte en un aliado del Estado al fomentar una cultura de responsabilidad y de respeto hacia el cumplimiento fiscal.

Para Adam Smith, la virtud —expresada en la compasión y la benevolencia hacia los demás— constituye el núcleo de la moral individual. La religión, en su visión, ofrece el marco en el que estas virtudes se cultivan y fortalecen. Las doctrinas religiosas suelen resaltar la importancia del bien común, lo que incluye la obligación de contribuir mediante los impuestos. En palabras del propio Smith, "la religión proporciona motivos tan vigorosos para el ejercicio de la virtud y nos protege de las tentaciones del vicio con frenos tan poderosos que muchos supusieron que los principios religiosos eran las únicas motivaciones laudables de la conducta" (Smith, 1759/2013, p. 302). Así, se establece un vínculo recíproco entre fe y fiscalidad, en el que la religión legitima la acción estatal y refuerza la idea de una responsabilidad compartida entre los ciudadanos (Torgler, 2006; Coşgel y Miceli, 2009).

The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity (Torgler, 2006)[3] ofrece respaldo empírico a esta relación. Basado en los datos de la Encuesta Mundial de Valores (1995-1997), el autor muestra que las personas con una fuerte identidad religiosa tienden a percibir el pago de impuestos no solo como una obligación legal, sino como un acto de justicia social coherente con su fe. Esta conclusión coincide con la observación de Smith de que la religiosidad refuerza el sentido natural del deber y genera confianza en la honestidad de quienes viven de acuerdo con principios espirituales (Smith, 1759/2013, p. 301).

El vínculo entre Estado y religión es, en este marco, una dimensión clave para entender la moral tributaria. Históricamente, las instituciones religiosas han desempeñado un papel de mediación entre la autoridad política y la población. Cuando la religión respalda al Estado, la aceptación de las políticas fiscales se ve facilitada (Coşgel y Miceli, 2009)[4]. En contextos donde la fe

3 Traducción en español: 'La importancia de la fe: moral tributaria y religiosidad'.

4 La relación entre el Estado colombiano y las iglesias ha atravesado transformaciones profundas, especialmente a partir de la Constitución de 1991, que introdujo un marco jurídico sólido para garantizar la libertad religiosa en el país. En el artículo 19 de la Carta Política se consagra expresamente el derecho de toda persona a profesar, practicar y difundir su fe, tanto en el ámbito privado como en el colectivo, y se establece que todas las confesiones religiosas gozan de igual reconocimiento ante la ley. Este cambio significó una ruptura con la tradición anterior, en la que el catolicismo era la religión oficial y gozaba de un estatus privilegiado frente a otras creencias. Durante buena parte de la historia republicana, el Concordato de 1886 había consolidado al catolicismo como religión oficial del Estado, lo que restringía la práctica de otras confesiones. Con la llegada de la Constitución de 1991, esa exclusividad fue eliminada, dando paso a un escenario plural en el que la diversidad religiosa empezó a ser reconocida y protegida. En este proceso, la Ley 133 de 1994 desempeñó un papel fundamental al reglamentar el derecho a la libertad de cultos y establecer que ninguna iglesia tendría carácter oficial, sin que ello implicara que el Estado se declarara ateo o ajeno a las convicciones religiosas de la ciudadanía. Actualmente, la regulación en esta materia se complementa con decretos y disposiciones específicas. Un ejemplo es el Decreto 1079 de 2016, mediante el cual se instituyó el 4 de julio como el Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, con el propósito de fomentar el diálogo y la coordinación entre el Gobierno y las distintas confesiones presentes en el país. A su vez, corresponde al Ministerio del Interior gestionar los trámites de reconocimiento legal de las iglesias y comunidades religiosas, a través de la expedición e inscripción de la personería jurídica que les permite desarrollar sus actividades de manera formal.

tiene un peso central en la vida social, los ciudadanos suelen percibir los tributos como un deber moral al servicio del bienestar colectivo, lo que incrementa la disposición para el cumplimiento.

Sin embargo, la religiosidad por sí sola no garantiza altos niveles de moral tributaria. La falta de transparencia, el abuso de poder o la corrupción pueden erosionar la confianza ciudadana en el Estado, debilitando su compromiso con el pago de impuestos. Como advierte Torgler (2006), la legitimidad estatal y la percepción de que los recursos se utilizan para el bien común resultan tan importantes como los principios religiosos para sostener una cultura de cumplimiento. En este sentido, el equilibrio entre un marco religioso fuerte y un gobierno honesto parece ser la fórmula más eficaz para fomentar la cooperación social en materia fiscal.

La relación entre fe, moralidad y tributación es compleja porque articula valores espirituales, instituciones políticas y principios de convivencia social. Smith ofrece un marco teórico en el que la religión actúa como un motor de virtud que impulsa el cumplimiento de los deberes fiscales, mientras que los estudios empíricos contemporáneos, como los de Torgler, demuestran que la religiosidad se correlaciona con una mayor disposición a pagar impuestos. En consecuencia, la religión no solo funciona como un sistema de creencias, sino también como un soporte cultural que ayuda a consolidar sociedades donde la tributación se entiende como un deber ético compartido.

En la actualidad, la pluralidad de credos y la separación cada vez más marcada entre Iglesia y Estado han transformado esta dinámica. Sin embargo, el deseo de obrar conforme a principios morales y la búsqueda de sentido trascendente siguen influyendo en el comportamiento tributario. La religión continúa ofreciendo un marco de referencia que refuerza la disposición a cumplir con las normas fiscales, trascendiendo los límites de la legalidad estricta. No obstante, son aún escasos los estudios que profundizan en esta relación, en comparación con los abundantes análisis sobre evasión, recaudación o distribución de recursos.

Metin Coşgel y Thomas J. Miceli, en su investigación *State and Religion* (2009), examinan precisamente esta conexión, mostrando cómo la religión ha servido históricamente para legitimar la autoridad del Estado en la recaudación de tributos. Inspirados en el modelo de Brennan y Buchanan (1980; como se citó en Coşgel y Miceli, 2009), explican que los fieles han visto en los impuestos no solo una obligación terrenal, sino también un camino hacia la salvación y la redención espiritual. De este modo, la religión no solo respalda la legitimidad del Estado, sino que también actúa como un vehículo de cooperación entre los ciudadanos.

Analizar la moral tributaria desde la perspectiva religiosa abre nuevas vías para entender las motivaciones de los contribuyentes. La combinación de creencias internas y de legitimación institucional sugiere que la tributación no es únicamente un cumplimiento mecánico de normas, sino una práctica enraizada en valores y convicciones. En este sentido, la interacción entre religión y fiscalidad se convierte en un tema esencial para comprender por qué algunos grupos muestran mayor compromiso con el pago de impuestos que otros.

La función del Estado en la tributación

Adam Smith consideraba que el respeto y la obediencia al Estado eran condiciones indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. En sus reflexiones, sostiene que el verdadero patriotismo se sustenta en dos principios fundamentales: por un lado, la fidelidad a la Constitución y, por otro, el compromiso con la seguridad y la felicidad de los ciudadanos. De este modo, ubica el bien común como el eje que da sentido tanto a la existencia del Estado como a su marco jurídico.

En su pensamiento, no había cabida para imaginar ciudadanos indiferentes a las leyes o desafiando la autoridad estatal. Ser miembro de la comunidad política, según Smith, implica reconocer la validez de las normas y trabajar activamente por el bienestar colectivo. De hecho, afirma con contundencia: “Quien no está dispuesto a respetar las leyes y a obedecer al magistrado, no es un ciudadano” (Smith, 1759/2013, p. 404). Desde esta perspectiva, las leyes dejan de ser

simples mandatos y se convierten en los instrumentos que hacen posible la cohesión y la estabilidad social, mientras que los individuos tienen el deber de sostener y proteger dicho orden.

Ahora bien, Smith no negaba que el Estado pudiera fallar en el cumplimiento de sus fines. En tales casos, reconocía la posibilidad de reformas, aunque advertía que estas debían ser valoradas con cautela, ya que tanto la Constitución como el sistema de gobierno representaban bases que, históricamente, habían garantizado paz y seguridad. Cualquier transformación debía, por tanto, nacer de un examen crítico sobre la eficacia de las instituciones y su capacidad para responder al interés general.

El tema del castigo ocupa también un lugar importante en su obra. Aunque advierte que debe aplicarse con moderación, lo concibe como un recurso imprescindible para preservar el orden y sostener la justicia. Como señala: "Pero siempre debemos ser remisos a castigar, y hacerlo más por un sentido de la corrección del castigo" (Smith, 1759/2013, p. 304). Esta observación revela que la sanción, más que una simple medida represiva, debía tener un carácter correctivo y pedagógico, orientado a fortalecer en la comunidad la conciencia sobre la necesidad de respetar las normas.

En esta misma línea, Smith amplía el rol del Estado más allá de la estricta aplicación de la ley. Considera que su intervención debe incluir la protección de los más vulnerables, la provisión de seguridad y la construcción de condiciones que promuevan la cooperación social. El incumplimiento de las reglas no debía ser respondido únicamente con sanciones, sino con medidas que reforzaran el compromiso ciudadano con el bien común.

Bajo esta lógica, la tributación adquiere una relevancia especial. Si se entiende que el Estado existe para administrar la vida en sociedad y que su propósito último es asegurar el bienestar colectivo, como lo planteaba Smith, entonces la confianza en sus instituciones se convierte en un elemento clave para disminuir la evasión fiscal. Cuanto mayor sea la certeza de que los recursos públicos se gestionan en beneficio de todos, mayor será también la disposición de los ciudadanos a cumplir con sus deberes tributarios[5]. En consecuencia, el respeto a la ley y la conciencia del bien común aparecen como condiciones esenciales para construir una cultura de responsabilidad fiscal y de solidaridad social que fortalezca a la comunidad en su conjunto.

Conclusiones

Del análisis realizado se desprende que tanto la religión como la virtud desempeñan un papel decisivo en la legitimación del Estado y en la formación de la moral tributaria. La religión, al constituirse en fundamento de la moral, incide directamente en la conducta de los contribuyentes al asociar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la idea de salvación y redención de los pecados. Este vínculo no solo fortalece la legitimidad del Estado, sino que también convierte las normas religiosas en referentes sociales, promoviendo un sentido de responsabilidad colectiva orientado al bien común.

La virtud, entendida como la capacidad de superar el egoísmo y atender al bienestar de los demás, se configura como un pilar en la construcción de una sociedad más justa. Para Adam Smith, esta virtud supone obediencia a principios superiores que favorecen la estabilidad del Estado, en la medida en que las normas sociales deben armonizarse con los valores promovidos por la religión.

5 Uno de los elementos más relevantes en la función tributaria del Estado es su capacidad para configurar un sistema impositivo que responda a las necesidades colectivas y a las prioridades del país. Mediante la potestad tributaria, el Estado no solo asegura los ingresos necesarios para su sostenimiento, sino que también puede diseñar políticas que impulsen el crecimiento económico y promuevan el bienestar social. Un ejemplo claro es la aplicación de un esquema progresivo de impuestos, que grava con mayor intensidad a quienes cuentan con mayores recursos, permitiendo así redistribuir la riqueza y financiar programas destinados a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Asimismo, el Estado cumple un rol regulador del comportamiento económico a través de la tributación. Por medio de estímulos e incentivos fiscales, es posible orientar la actividad empresarial y ciudadana hacia objetivos estratégicos, como la inversión en energías limpias o el fortalecimiento de la investigación y la innovación tecnológica. En este sentido, los impuestos dejan de ser concebidos únicamente como un mecanismo de recaudación y se convierten en una herramienta de política pública capaz de encauzar las dinámicas económicas hacia metas que favorezcan a la sociedad en su conjunto.

En la actualidad, marcada por altos niveles de evasión fiscal y una creciente desconfianza hacia las instituciones públicas, resulta pertinente reflexionar sobre cómo la religión y la virtud pueden convertirse en herramientas que fortalezcan el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. La percepción de que los tributos no se destinan al bien común suele erosionar la disposición a cumplir con ellos. Por ello, abrir un debate en torno a la importancia de la moral tributaria, apoyada en principios éticos y religiosos, podría contribuir a restaurar la confianza en las instituciones y a reforzar la responsabilidad cívica.

De cara a investigaciones futuras, sería valioso profundizar en el estudio de *La riqueza de las naciones*, donde Smith propone cuatro máximas fundamentales para la tributación: justicia, certidumbre, comodidad y economía. Examinar cómo estas orientaciones pueden adaptarse al contexto contemporáneo ofrecería nuevas perspectivas sobre la relación entre ética y obligaciones fiscales.

Asimismo, explorar la influencia que ejercen distintas tradiciones religiosas sobre la conducta tributaria en sociedades actuales abriría un campo de análisis significativo. Siguiendo metodologías empíricas como las de Torgler, podrían aplicarse encuestas que permitan identificar en qué medida la religiosidad y las creencias impactan en la disposición a contribuir al erario. Este tipo de estudios no solo enriquecería la literatura sobre fiscalidad, sino que también orientaría estrategias pedagógicas y de concienciación que favorezcan un mayor cumplimiento.

En definitiva, la intersección entre religión, virtud y tributación constituye un terreno fértil tanto para la reflexión académica como para la práctica política. Integrar estos elementos en el debate sobre fiscalidad abre la posibilidad de avanzar hacia sociedades más justas y responsables, donde pagar impuestos se reconozca no solo como un deber legal, sino también como un acto virtuoso de compromiso con el bienestar colectivo.

Referencias

Andreoni, J. (1990). Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving. *The Economic Journal*, *100*(401), 464-477. https://doi.org/10.2307/2234133

Aleán Pico, A. (2014). Sentimiento moral y razón: La noción de justicia en Adam Smith y Amartya Sen. *Cuadernos de Economía, 33*(63), 359-379. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v33n63.45337

Coşgel, M. y Miceli, T. J. (2009). State and religion. *Journal of Comparative Economics*, *37*(3), 402-416. https://doi.org/10.1016/j.jce.2009.04.004

Barth, J. R., Cebula, R. J. y Ni, Y. (2022). A Theoretical Note on Tax Evasion: The Case of the American FairTax Plan. *Theoretical Economics Letters*, *12*(02), 392-399. https://doi.org/10.4236/tel.2022.122020

Mill, J. S. (2014). *El utilitarismo* (R. Castilla, Trad.). Alianza.

Smith, A. (2013). *La teoría de los sentimientos morales*. Alianza Editorial. (libro originalmente publicado en 1759)

Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, *61*(1), 81-109. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007.

Espacios de aprendizaje inmersivos en realidad virtual: el destino de los programas de Derecho

María Alejandra Cárdenas Moreno*

* Abogada y magíster en Gestión Urbana; secretaria general de la Corporación Universitaria del Meta (UNIMETA)
macmoreno1@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6061-398X

Resumen

La educación superior se encuentra en medio de una profunda transformación impulsada por la irrupción de tecnologías digitales, situación que muchos consideran una crisis. Así pues, la incorporación de la realidad virtual y la inteligencia artificial está redefiniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo experiencias más inmersivas y personalizadas. Estas innovaciones están reconfigurando los métodos pedagógicos, especialmente en programas académicos como Derecho, donde la simulación de escenarios reales ofrece a los estudiantes una formación práctica y contextualizada. Para responder a las demandas de las nuevas generaciones y los desafíos del mundo digital, es crucial que la educación evolucione de manera continua. Aquellos sistemas educativos que no logren adaptarse a esta nueva realidad corren el riesgo de volverse obsoletos; por tanto, la innovación y la capacidad de adaptación de las universidades se convierten en características esenciales para asegurar la relevancia y el éxito de la educación en el futuro. Dicho lo anterior, es fundamental que las instituciones de educación superior integren estas tecnologías de manera efectiva, garantizando que sus estudiantes desarrollen las competencias necesarias para enfrentar un entorno profesional permeado por la tecnología.

Palabras clave: educación, transformación digital, realidad virtual, inteligencia artificial.

> La realidad virtual emerge como una herramienta de gran potencial, especialmente en la enseñanza del derecho.

Abstract

Higher education is in the midst of a profound transformation driven by the emergence of digital technologies, a situation that many consider a crisis. Thus, the incorporation of virtual reality and artificial intelligence is redefining teaching and learning processes, allowing for more immersive and personalized experiences. These innovations are reconfiguring pedagogical methods, especially in academic programs such as Law, where the simulation of real scenarios offers students practical and contextualized training. To respond to the demands of new generations and the challenges of the digital world, it is crucial that education evolves continuously. Those educational systems that fail to adapt to this new reality run the risk of becoming obsolete; therefore, innovation and adaptability in universities become essential characteristics to ensure the relevance and success of education in the future. However, it is essential that higher education institutions integrate these technologies effectively, ensuring that their students develop the necessary skills to face a technology-permeated professional environment.

Keywords: education, digital transformation, virtual reality, artificial intelligence.

Introducción

A lo largo de la historia, las crisis en el ámbito educativo han actuado como motores de cambio, impulsando transformaciones constantes en los contenidos y las metodologías de enseñanza. Cada época ha exigido adaptaciones que han llevado a dejar de lado conocimientos obsoletos y a integrar nuevos saberes. Ejemplo de ello es el tránsito de la taquigrafía a la mecanografía y, más tarde, a la enseñanza de la informática. Hoy, la formación en sistemas no se limita a la ofimática, sino que incluye áreas más complejas, como la programación. Este proceso ha tenido un impacto especial en los programas de Derecho, donde la introducción de herramientas digitales y plataformas de educación virtual ha abierto nuevas posibilidades pedagógicas, aunque no sin generar retos importantes para garantizar aprendizajes sólidos. Al igual que la máquina de escribir marcó una revolución en el siglo XIX, el computador es hoy el símbolo del siglo XXI.

La transformación no se limita a los contenidos; también ha cambiado la manera de enseñar. De un modelo centrado en la memorización, con el docente como figura autoritaria, se ha pasado a enfoques orientados al desarrollo de competencias: conocimientos, habilidades y actitudes que permiten enfrentar problemas de forma crítica y eficaz (González-Cancelas *et al*., 2021). A esto se suma la diversificación de los escenarios formativos: de las aulas tradicionales a entornos digitales, donde la interacción presencial ya no es indispensable. Hoy resulta posible cursar una carrera completa de Derecho sin asistir físicamente a clases, gracias a la flexibilidad de la educación virtual (Castells, 2021).

Sin embargo, la enseñanza en línea en el campo jurídico enfrenta limitaciones. La ausencia de interacción cara a cara puede dificultar el desarrollo de competencias clave, como la argumentación, la deliberación y la negociación, que históricamente se han fortalecido en espacios de debate colectivo. Además, la adaptación de los contenidos a formatos digitales conlleva el riesgo de simplificar materias complejas, comprometiendo la profundidad de la formación. La evaluación es otro desafío, pues las pruebas virtuales no siempre logran medir de manera adecuada las habilidades prácticas requeridas en el ejercicio profesional.

Paralelamente, la educación ha comenzado a dar mayor importancia a la formación ética y emocional. Las universidades, antes marcadas por una fuerte influencia religiosa, hoy apuestan por competencias blandas —o, como se les llama más recientemente, habilidades de poder— y por programas que buscan potenciar el bienestar integral del estudiante. Iniciativas pedagógicas innovadoras, como la propuesta sobre la educación para la felicidad, destacan la necesidad de formar profesionales equilibrados, no solo técnicamente competentes. En este sentido, la ética cobra especial relevancia en carreras como Derecho, donde la falta de rectitud profesional y los problemas de corrupción han deteriorado la confianza social (Rubio y Heredia, 2023).

La noción de "educación tradicional" resulta difícil de fijar en un periodo concreto, pues desde el siglo XVII ha sido invocada como contrapunto para justificar innovaciones pedagógicas. Cada crisis educativa, entonces, no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo histórico en el que la necesidad de responder a las demandas de la sociedad impulsa cambios permanentes (Rubio y Heredia, 2023). La educación aparece así como un fenómeno atravesado por tensiones entre el pasado y el presente, reflejando tanto sus límites como su capacidad de renovación.

En este proceso, la innovación no se reduce a la adopción de nuevas tecnologías, sino que implica una reflexión crítica sobre los objetivos y sentidos de la educación. La tradición puede aportar valor, pero, en un mundo cambiante, resulta indispensable la capacidad de reinvención para garantizar una formación pertinente y crítica. La clave está en que la educación logre equilibrar la herencia de prácticas consolidadas con la necesidad de preparar ciudadanos para realidades nuevas.

En definitiva, aunque la educación virtual amplía el acceso y ofrece flexibilidad sin precedentes, también plantea retos profundos que no pueden ser ignorados. La relevancia de los programas de Derecho en el futuro dependerá de su capacidad para integrar de

manera equilibrada las tecnologías digitales con los elementos prácticos y humanos que caracterizan la profesión jurídica.

Coyuntura y tecnología educativa

La tecnología ha sido, a lo largo de la historia, un factor determinante en la evolución de la educación, pero su incidencia alcanzó un punto sin precedentes durante la pandemia de COVID-19. La emergencia sanitaria mundial, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 30 de enero de 2020 hasta el 5 de mayo de 2023, obligó a los sistemas educativos a adaptarse con rapidez a un nuevo escenario. En ese contexto, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dejaron de ser un recurso complementario y se convirtieron en una necesidad urgente para asegurar la continuidad del aprendizaje. Aunque estas herramientas ya estaban disponibles, la crisis dejó en evidencia que nunca habían sido tan esenciales como en aquel momento.

El VI Estudio Global sobre el Uso de la Tecnología en la Educación en España (RealInfluencers, 2023) puso de relieve las limitaciones que todavía persisten en la incorporación de las TIC en la enseñanza. Si bien la pandemia aceleró el uso de plataformas digitales, también mostró la falta de preparación del profesorado en competencias digitales y las dificultades para adaptar los contenidos a nuevos formatos pedagógicos. El estudio reveló una paradoja: aunque se considera a los jóvenes como nativos digitales, los sistemas educativos no han logrado canalizar de manera efectiva ese potencial. A menudo, los estudiantes usan la tecnología principalmente con fines recreativos, sin haber desarrollado las habilidades necesarias para aprovecharla plenamente en procesos de aprendizaje[1] (Helsper y Eynon, 2013; DiMaggio y Hargittai, 2001).

Con la reapertura tras la cuarentena, la educación virtual no retrocedió; por el contrario, siguió expandiéndose en Colombia. Los informes recientes muestran un crecimiento significativo en la matrícula de programas en línea, tanto de pregrado como de posgrado, evidenciando una tendencia hacia la digitalización educativa (Romero Alonso y Anzola Vera, 2022). En 2023 se estimó que una proporción creciente de estudiantes universitarios optó por esta modalidad, reflejando no solo las demandas de las nuevas generaciones, sino también la necesidad de las instituciones de innovar frente a un mercado laboral cada vez más dinámico. La Corporación Universitaria Iberoamericana (2023) reporta que, en la actualidad, cerca de dos de cada diez estudiantes de educación superior en Colombia cursan estudios virtuales, lo que representa aproximadamente el 16 % de una población universitaria que supera los 2,3 millones de personas.

El ámbito jurídico no ha sido ajeno a esta transformación. En 2021, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) lanzó el primer programa virtual de Derecho en el país, y desde entonces otras seis instituciones han seguido el mismo camino. La digitalización del sector se ha visto reforzada por la Ley 2213 de 2022, que introdujo cambios trascendentales en procedimientos como la

1 La pandemia y las medidas de confinamiento evidenciaron múltiples factores que alteraron de manera significativa tanto la salud mental como los procesos de aprendizaje de los estudiantes, afectando directamente sus capacidades cognitivas, metacognitivas y motivacionales. Esta situación hace evidente la urgencia de atender dichos problemas de manera diferenciada, considerando la edad y el nivel educativo de cada alumno. En este contexto, la autorregulación del aprendizaje se convierte en una herramienta clave, pues articula procesos cognitivos, motivacionales y conductuales orientados al logro de objetivos académicos. Los estudiantes que desarrollan competencias de autorregulación suelen alcanzar mejores resultados y muestran un compromiso más sólido con sus estudios, mientras que aquellos que carecen de estas habilidades enfrentan, con frecuencia, dificultades que se traducen en bajo rendimiento, repitencia escolar y poca constancia en sus actividades. El paso de la enseñanza presencial a la educación en el hogar intensificó esta necesidad, ya que la falta de supervisión continua, sumada a la sobreexposición a información digital, puede entorpecer el aprendizaje si no se gestiona de forma adecuada. Investigaciones recientes (Acevedo Tarazona *et al*., 2021) han demostrado que quienes emplean estrategias de autorregulación logran un aprendizaje autónomo más eficaz, reduciendo la percepción de dificultad frente a las tareas y aumentando el disfrute que estas les producen (Castellanos-Páez *et al*., 2022). En consecuencia, es fundamental que los distintos actores del sistema educativo —docentes, familias e instituciones— colaboren para ofrecer los recursos y el acompañamiento necesarios que permitan a los estudiantes fortalecer estas competencias. De este modo, no solo se favorece su desempeño académico inmediato, sino que también se les dota de herramientas valiosas para su vida futura. En este nuevo escenario educativo, garantizar el acceso a la información ya no es suficiente; resulta igualmente prioritario promover la capacidad de los estudiantes para gestionar su aprendizaje de manera autónoma, flexible y significativa. Un enfoque de este tipo no solo enriquecerá su experiencia educativa, sino que los preparará mejor para afrontar los desafíos que se presenten a lo largo de su trayectoria formativa y personal.

presentación de poderes, la realización de audiencias y la gestión de expedientes judiciales. A la par, el auge del LegalTech (Benfeld, 2020) ha impulsado la creación de programas especializados, como la Maestría en Innovación en Derecho Digital y LegalTech ofrecida por la Universidad Sergio Arboleda. Este panorama evidencia que la virtualización de la educación jurídica no solo es inevitable, sino que requiere una atención especial para garantizar su calidad. Uno de los retos más importantes consiste en promover experiencias de aprendizaje que reproduzcan, en lo posible, la riqueza de la presencialidad. En este sentido, la realidad virtual ofrece un enorme potencial: permite la exploración de entornos tridimensionales, la manipulación de objetos y el análisis detallado de casos o situaciones propias del derecho, enriqueciendo la dimensión pedagógica (Verdu Sanmartin y Niemi, 2023). Su valor principal radica en hacer que la interacción con los contenidos sea más intuitiva, ayudando a los estudiantes a asimilar conocimientos de forma natural y eficaz (Żammit, 2023).

La coyuntura que vivimos deja una lección clara: la tecnología no solo es un recurso, sino un componente estructural en la educación contemporánea. La pandemia actuó como catalizador, mostrando tanto las oportunidades como las debilidades de los sistemas educativos frente a la digitalización. El desafío ahora es avanzar hacia una integración más profunda y estratégica de las TIC, complementadas con innovaciones como la realidad virtual, de manera que los estudiantes no solo tengan acceso a contenidos, sino que también desarrollen competencias digitales críticas para el futuro. Esto exige un compromiso activo de las instituciones y de los educadores, que deben preparar a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo donde la alfabetización digital será indispensable para el ejercicio profesional y ciudadano.

La realidad virtual para educar

La realidad virtual está modificando de manera profunda el panorama de la educación superior. Proyectos como Maroon de la Universidad de Graz —un laboratorio de física inmersivo— y LLOG de la Politécnica de Valencia —orientado a la gestión logística— demuestran el alcance de esta tecnología en disciplinas muy diversas. De igual modo, plataformas como INMERSE están cambiando la enseñanza de idiomas al ofrecer experiencias personalizadas de inmersión lingüística (Mounkoro, 2024). En esta misma línea, la Universidad de Stanford ha marcado la pauta al impartir una asignatura que forma a los estudiantes en el diseño de dispositivos de realidad virtual. A través de proyectos prácticos, los participantes desarrollan competencias tanto en hardware como en software, lo que les permite crear experiencias adaptadas a distintos contextos (Stanford University, 2024). Sin embargo, esta innovación también evidencia una brecha digital cada vez más amplia: mientras algunos acceden a laboratorios virtuales y proyectos de vanguardia, otros estudiantes carecen de los medios básicos para aproximarse a estas tecnologías.

En el ámbito jurídico, el poder judicial colombiano ha asumido un papel pionero. El 15 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena celebró lo que se considera la primera audiencia judicial en el metaverso en el país. La magistrada María Victoria Quiñones, en entrevista con *Portafolio*, explicó que el uso de estas herramientas busca hacer más efectivas las dinámicas procesales contemporáneas. Según ella, la posibilidad de reunir a las partes en un mismo espacio virtual, aunque físicamente distantes, constituye un avance que respeta tanto las garantías procesales como los principios de la justicia digital (Guerrero Álvarez, 2023).

La audiencia marcó un precedente al incorporar la realidad virtual junto con la inteligencia artificial: se utilizó ChatGPT para verificar la identidad de los asistentes. Este experimento se adelantó a la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció el valor de la inteligencia artificial (IA) como apoyo en la administración de justicia, aunque subrayó la necesidad de mantener la centralidad de la labor humana en el ejercicio jurisdiccional. Como consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12243 de 2024, mediante el cual se establecen directrices para un uso responsable, seguro y ético de la IA en la Rama Judicial.

En este contexto surge la pregunta: ¿cómo se está ajustando la enseñanza del derecho a estas transformaciones tecnológicas? Un ejemplo lo ofrece la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, donde los estudiantes de Derecho utilizan gafas de realidad virtual para participar en simulaciones de audiencias. En estos ejercicios, que se transmiten en tiempo real por Zoom, los estudiantes asumen roles de jueces, abogados o partes procesales, fortaleciendo sus habilidades prácticas y su comprensión de los procedimientos judiciales.

La sala virtual de audiencias de UNIMETA se distingue por su realismo y flexibilidad. Mediante tótems informativos, se explica de forma clara la función de cada participante, lo que permite adaptar las simulaciones a casos de distinta complejidad. Así, los estudiantes pueden aproximarse a la práctica judicial en un entorno seguro y dinámico, preparándose para enfrentar situaciones reales con mayor confianza.

La innovación también alcanza áreas más tradicionales de la formación jurídica. La enseñanza del derecho romano, por ejemplo, se proyecta en UNIMETA hacia una experiencia completamente distinta: los estudiantes podrán recorrer escenarios de la antigua Roma y conocer a los jurisconsultos que marcaron la historia del derecho. Este enfoque busca superar las limitaciones habituales de esta asignatura, como la falta de especialistas o la dificultad para motivar a los alumnos. La combinación de teoría con experiencias inmersivas convierte este curso en una herramienta pedagógica novedosa y atractiva.

La incorporación de la IA y la realidad virtual en la educación jurídica representa un desafío, pero también una oportunidad. Solo aquellos programas que adopten estas tecnologías de manera estratégica estarán preparados para responder a las demandas de un entorno cada vez más digitalizado. Las nuevas generaciones, caracterizadas por ser nativos digitales, multitarea y habituados a interactuar con información de manera audiovisual y no lineal, requieren metodologías que capten su interés y conecten con su forma de aprender. El reto para el sector educativo, por tanto, es asumir un papel de liderazgo que no solo garantice la formación técnica, sino que también despierte nuevamente la curiosidad por el conocimiento científico.

Conclusiones

La transformación del sistema educativo en Colombia ha acompañado los cambios sociales, culturales y tecnológicos que atraviesa el país. Dentro de este panorama, la realidad virtual emerge como una herramienta de gran potencial, especialmente en la enseñanza del derecho. La posibilidad de crear espacios inmersivos de aprendizaje facilita la comprensión de contenidos teóricos y el desarrollo de habilidades prácticas en escenarios simulados, acercando a los estudiantes a los retos propios del ejercicio profesional en un entorno cada vez más digitalizado.

Cada crisis educativa ha actuado históricamente como un motor de cambio y renovación. La sustitución de la taquigrafía por la mecanografía y, más adelante, por la informática muestra cómo las exigencias del mundo laboral han reconfigurado constantemente los contenidos académicos. Hoy ocurre algo similar en el ámbito jurídico colombiano: la necesidad de contar con abogados capaces de desenvolverse en un entorno dominado por lo digital ha impulsado la integración de la realidad virtual en los programas de Derecho. Gracias a esta tecnología, los estudiantes pueden intervenir en simulaciones de audiencias, juicios o negociaciones, lo que les permite consolidar su aprendizaje de manera más activa e interactiva, además de favorecer la comprensión de nociones complejas a través de experiencias cercanas a la práctica real.

No obstante, el uso de estas herramientas también plantea desafíos que requieren atención. La calidad de la enseñanza en entornos virtuales depende en gran medida de la formación de los docentes en el manejo de estas tecnologías y de la creación de contenidos pedagógicos que saquen provecho de sus posibilidades (Verdu Sanmartin y Niemi, 2023). La tecnología, en este sentido, no debe convertirse en un fin en sí misma, sino en un recurso que potencie aprendizajes significativos y contextualizados. Para lograrlo, resulta indispensable invertir en la capacitación permanente

del profesorado, de manera que pueda integrar estas herramientas en su práctica educativa con solvencia técnica y pedagógica.

A la vez, el diseño de experiencias inmersivas debe contemplar la diversidad estudiantil y sus diferentes estilos de aprendizaje. La realidad virtual ofrece la ventaja de ajustarse a los ritmos y necesidades particulares de cada estudiante, lo que puede incrementar la motivación y el compromiso académico. Este enfoque más personalizado resulta especialmente útil en la formación jurídica, donde el desarrollo de competencias prácticas y reflexivas es esencial.

La adopción de programas de Derecho que incorporen la realidad virtual no responde únicamente a las demandas actuales del mercado, sino que también constituye una oportunidad para repensar el proceso de enseñanza en este campo. Al interactuar en escenarios simulados, los estudiantes logran una experiencia más dinámica y cercana a la práctica profesional, lo que fortalece tanto su preparación académica como su capacidad de adaptación a un entorno legal cada vez más digital.

En esta línea, los espacios inmersivos de realidad virtual están llamados a convertirse en un eje fundamental de la educación jurídica en Colombia. El reto para las instituciones consiste en superar las limitaciones actuales y aprovechar las posibilidades que estas metodologías ofrecen, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

La formación jurídica del siglo XXI debe, por tanto, responder a las necesidades del presente y anticipar las exigencias del futuro. Integrar la innovación tecnológica con una sólida base ética permitirá preparar profesionales capaces de desenvolverse en un sistema legal más eficiente y accesible. De esta manera, la justicia y el derecho podrán consolidarse como garantías efectivas para toda la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia.

Referencias

Acevedo Tarazona, Á., Valencia Aguirre, A. C. y Ortega Rey, A. D. (2021). Educación en tiempos de pandemia: Perspectivas del modelo de enseñanza remota de emergencia en Colombia. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, *23*(37), 93-112. https://doi.org/10.19053/01227238.12704

Benfeld, J. S. (2020). Profesión legal y tecnologías de la información y las comunicaciones: *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, *9*(2), 5-31. https://doi.org/10.5354/0719-2584.2020.53309

Castellanos-Páez, V., Abello-Correa, R., Gutiérrez-Romero, M., Ochoa-Angrino, S., Rojas, T. y Taborda-Osorio, H. (2022). Impacto de la pandemia en el aprendizaje: Reflexiones desde la psicología educativa. *Praxis & Saber*, *13*(34), preprint e14532. https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n34.2022.14532

Castells, M. (2021). *La sociedad red: Una visión global*. Alianza.

DiMaggio, P. y Hargittai, E. (2001). *From the "Digital Divide" to "Digital Inequality": Studying Internet Use as Penetration Increases*. Princeton University, School of Public and International Affairs, Center for Arts and Cultural Policy Studies.

Guerrero Álvarez, M. (2023, febrero 16). Chat GPT: ¿Cómo hicieron la primera audiencia en el metaverso en Colombia? *Portafolio*. https://www.portafolio.co/innovacion/chat-gpt-como-hicieron-la-primera-audiencia-en-el-metaverso-en-colombia-578575

Helsper, E. J. y Eynon, R. (2010). Digital natives: Where is the evidence? *British Educational Research Journal*, *36*(3), 503-520. https://doi.org/10.1080/01411920902989227

Mounkoro, I. (2024). Revolucionando el aprendizaje de idiomas: El impacto transformador de las aplicaciones móviles. *Apertura*, *16*(2), 22-35. https://doi.org/10.32870/Ap.v16n2.2528

RealInfluencers. (2023, junio 29). *VI Estudio sobre el uso de la tecnología en la educación de BlinkLearning*. BlinkLearning. https://www.realinfluencers.es/2021/08/26/vi-estudio-sobre-el-uso-de-la-tecnologia-en-la-educacion-de-blinklearning/

Romero Alonso, R. E. y Anzola Vera, J. J. (2022). Modelo para la progresión académica de estudiantes online en Educación Superior. *Cuadernos de Investigación Educativa*, *13*(1). https://doi.org/10.18861/cied.2022.13.1.3181

Rubio, D. y Heredia, M. (2023). ¿En qué consiste la crisis de la educación? *Praxis & Saber*, *14*(38), art. e15105. https://doi.org/10.19053/22160159.v14.n38.2023.15105

Stanford University. (2024). *EE267: Virtual Reality*. https://web.stanford.edu/class/ee267/

Universidad del Rosario. (2023, noviembre 28). *Nuevos horizontes: La educación virtual en Colombia y su impacto en el presente*. Nova et Vetera. https://urosario.edu.co/periodico-nova-et-vetera/nuestra-u/nuevos-horizontes-la-educacion-virtual-en-colombia-y-su-impacto-en-el-presente

Verdu Sanmartin, A. y Niemi, J. (2023). Virtual reality in legal education. Challenges and possibilities to transform normative knowledge. En J. Lubacha, B. Mäihäniemi y R. Wisła (Eds.), *The European Digital Economy: Drivers of Digital Transition and Economic Recovery* (1.ª ed., pp. 120-140). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003450160-10

Żammit, J. (2023). Exploring the effectiveness of Virtual Reality in teaching Maltese. *Computers & Education: X Reality*, *3*, 100035. https://doi.org/10.1016/j.cexr.2023.100035

Infancia protegida: contraste jurídico entre Colombia y España

Laura Camila Barrios Molano*
Darlyn Paola Peñuela Díaz **

* Estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
https://orcid.org/0009-0001-8631-3504
laura.barriosmolano@academia.unimeta.edu.co

** Estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
https://orcid.org/0009-0004-1172-0211
paola.penuela@academia.unimeta.edu.co

> La protección infantil contra el abuso sexual requiere prevención y cultura social, más allá del castigo penal.

Resumen

El abuso sexual infantil es un hecho histórico, social y cultural latente que constituye una inminente violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en Colombia como en España. En los últimos años, este flagelo ha presentado un incremento alarmante en los ataques registrados, lo que revela una deficiencia en el marco normativo y en las políticas públicas dirigidas a este tipo de casos. En este sentido, el presente artículo pretende efectuar un análisis comparativo entre los marcos normativos de ambos países, con el objetivo de identificar las diferencias y similitudes respecto a la definición del delito, la imposición de penas, los mecanismos de protección y la prescripción del delito, con el fin de determinar si el enfoque y las medidas implementadas en España pueden reforzar la prevención y protección de los infantes y adolescentes en Colombia. La metodología se basa en la revisión y análisis de la normatividad y políticas públicas, haciendo especial énfasis en la Ley Orgánica 8/2021 de España, que ha introducido reformas significativas para la prevención y protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia. En lo que respecta a Colombia, se analizarán las disposiciones del Código Penal y otras leyes complementarias. En conclusión, el análisis busca contribuir al debate jurídico y social sobre la necesidad de adaptar la legislación colombiana con el objetivo de lograr una tutela eficaz de los derechos de los menores.

Palabras clave: abuso sexual infantil, normatividad, protección de la infancia.

Abstract

Child sexual abuse is a latent historical, social, and cultural phenomenon that is an imminent violation of the rights of children and adolescents, both in Colombia and in Spain. In recent years, this scourge has seen an alarming increase in reported attacks, revealing deficiencies in the regulatory framework and public policies aimed at addressing such cases. In this regard, this article aims to conduct a comparative analysis of the regulatory frameworks of both countries. Its objective is to identify the differences and similarities in the definition of crime, the imposition of penalties, protection mechanisms, and the statute of limitations for the crime; it also seeks to determine whether the approaches and measures implemented in Spain can strengthen the prevention and protection of children and adolescents in Colombia. The methodology is based on the review and analysis of regulations and public policies, with special emphasis on Spain's Organic Law 8/2021, which has introduced significant reforms for the prevention and comprehensive protection of children and adolescents against violence. Regarding Colombia, the provisions of the criminal code and other complementary laws will be analyzed. In conclusion, the analysis seeks to contribute to the legal and social debate on the need to adapt Colombian legislation with the aim of achieving effective protection of the rights of minors.

Keywords: child sexual abuse, regulations, child protection.

Introducción

El lazo histórico compartido entre España y Colombia tiene sus inicios desde la época colonial y se perpetuó cuando el legado jurídico español dejó sus huellas imborrables en el sistema jurídico del Nuevo Reino de Granada. En la actualidad, España y Colombia aún comparten un fundamento legal e histórico que explica tanto similitudes como contradicciones al momento de abordar la protección de la infancia. Este pasado en común presenta discrepancias en cuanto a trayectorias políticas y sociales, ya que España ha avanzado en las últimas décadas hacia la ratificación de modelos de protección social y reformas estructuradas dentro del marco de sus políticas de protección. Por su parte, Colombia enfrenta desafíos propios que se derivan de conflictos armados internos, desigualdades territoriales y dinámicas sociales que disminuyen la eficacia de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bajo este contexto histórico, nace la necesidad de enmarcar el fenómeno del abuso sexual infantil, no solo como una cuestión penal, sino también como un problema sistemático y sociocultural que precisa respuestas integrales y coordinadas.

El abuso sexual infantil debe entenderse como un hecho de múltiples aristas que afecta derechos humanos fundamentales, repercute en la salud pública y deja entrever fallas en los sistemas de prevención, detección y reparación. Quiere decir esto que no basta solo con castigar, sino que resulta menester hacer un análisis sobre la conceptualización del delito, qué instrumentos procesales existen para proteger a las víctimas, cómo se integran las penas con las medidas de prevención, el modo en que las normas contemplan las características propias de cada etapa de desarrollo y el enfoque de los derechos tutelados. Desde esta perspectiva, se puede ampliar la visión netamente punitiva y considerar la importancia de prevenir, proteger y restituir el derecho.

En el marco de esta situación, este artículo propone un análisis comparativo entre la normatividad colombiana y la española, haciendo especial énfasis en las reformas recientes, como la Ley Orgánica 8/2021 de España, que han llegado con el objetivo de reforzar el marco normativo aplicable a la protección de niños, niñas y adolescentes. Este estudio comparativo se basa en cuatro líneas principales:

- la definición legal del abuso sexual infantil y sus figuras afines;
- el régimen sancionador de cada uno de los sistemas judiciales;
- los mecanismos de protección y atención integral a las víctimas;
- las normas sobre prescripción y de acceso a la justicia.

El propósito es identificar las diferencias formales entre estos dos marcos jurídicos, así como visualizar las consecuencias positivas o negativas de su aplicación sobre la prevención y protección de la infancia.

Por tanto, este trabajo académico tiene como objetivo ir más allá de la sola descripción y busca convertirse en un recurso de análisis crítico y comparativo que exponga de forma razonada las fortalezas y las falencias de cada modelo legislativo. Se busca contribuir al debate jurídico y social sobre la necesidad de adaptar la normatividad colombiana. La intención final es señalar la relevancia de un sistema de protección que no esté enfocado solo en sancionar, sino que también busque tomar acción en la educación, prevención y reparación, garantizando la tutela eficiente y amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Definición de abuso sexual infantil

El abuso sexual infantil es considerado una de las formas de violencia más graves que aquejan hoy a la sociedad, ya que afecta a gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, dejando consecuencias o daños irreparables, ya sea física, emocional o psicológicamente. Las organizaciones internacionales han sido clave para definir los estándares de protección frente al abuso sexual infantil y han servido de marco de referencia para que los diferentes países establezcan una legislación en esta materia. Asimismo, la Organización Mundial de

la Salud (OMS) define el abuso sexual infantil como "la participación de un niño en actividades sexuales que no comprende plenamente, a las que no puede dar un consentimiento informado o que violan las leyes o tabúes sociales". La OMS insiste en que el impacto es tanto físico como psicológico (trauma, depresión, conductas de riesgo, suicidio, problemas de salud sexual) (Organización Mundial de la Salud, 2004).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que el abuso sexual infantil es una de las violaciones más graves a los derechos humanos de la niñez y destaca que en muchos países existe subregistro por miedo, estigmatización o desconfianza institucional. El abuso sexual infantil hace referencia a cualquier conducta en la que un adulto o una persona con mayor poder o autoridad involucra a un menor en actividades de índole sexual con el fin de obtener satisfacción propia o de terceros. Estas conductas pueden incluir contacto físico, como tocamientos, caricias o penetración, así como la exposición a material pornográfico o la realización de actos sexuales frente al menor. Además, existen formas de abuso que no requieren contacto físico directo, como el abuso sexual en línea, el *grooming* (acoso y manipulación digital con fines sexuales) o la explotación sexual a través de medios digitales. Todas estas vertientes constituyen abuso sexual infantil; es decir, no siempre es necesario que exista contacto físico para que se considere que la conducta es abuso sexual infantil (Te Protejo México, 2025).

En términos legales, el abuso sexual infantil tiene variaciones de acuerdo con el país donde se aplique la ley o suceda el acto; aun así, la mayoría de estos coinciden en algunos aspectos clave:

- **Consentimiento:** en casos de abuso sexual infantil (ASI), el consentimiento es irrelevante, pues se está hablando de niños y niñas que no cuentan con la capacidad de emitirlo; es decir, estos no están preparados para consentir actos sexuales como sí lo están los adultos.

- **La violencia física no es requisito:** muchos países, en su legislación y jurisprudencia, concuerdan en que no en todos los casos de ASI la violencia es indispensable, pues existen otros factores de coacción, como la manipulación psicológica a la víctima.

- **Constituye un delito:** se considera un delito grave, ya que se habla de sujetos protegidos de manera especial por la ley. Debido a esto, las sanciones penales que acarrea dicho acto son severas en la mayoría de los países.

Definición de abuso sexual infantil en Colombia

De acuerdo con la Ley 1146 de 2007, en Colombia se entiende como violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor (Ley 1146, 2007).

En términos penales, el Código Penal colombiano (Ley 599, 2000) tipifica conductas específicas como acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208), actos sexuales distintos al acceso carnal con menores de 14 años (art. 209), acoso sexual agravado si la víctima es menor (211-A). La edad de consentimiento sexual en Colombia es 14 años, es decir, cualquier acto sexual con menor de esta edad se considera no autorizado y penalizado, independientemente de la supuesta voluntad del menor. Sin que esto implique que, si el adolescente es mayor de 14 años, el consentimiento emitido sea válido, como en los casos de las personas con discapacidad para resistir o en casos donde se presenta superioridad por parte del agresor.

Definición de abuso sexual infantil en España

En España, antes de la reforma de 2022, el Código Penal español distinguía entre agresión sexual, actos sexuales sin consentimiento que incluyen violencia o intimidación (arts. 178-179 CP), y abuso sexual, actos

de contenido sexual no consentidos sin violencia o intimidación (arts. 181-182 CP). Aquí la edad de consentimiento aumenta, es decir, que es de 16 años; por debajo de esa edad, cualquier acto se considera ilícito, aun siendo consentido por el menor.

Con la nueva reforma, la Ley Orgánica "Solo sí es sí" (2022) eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, unificando todos los actos sexuales sin consentimiento bajo el concepto de agresión sexual. Por otra parte, la Ley Orgánica 8 (2021) —de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia— no modifica directamente el Código Penal, pero refuerza la protección contra el ASI desde un enfoque preventivo e integral, definiendo la violencia contra niños, niñas y adolescentes como "toda acción, omisión o trato negligente que priva a una persona menor de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social".

Régimen sancionador

El Código Penal colombiano regula los delitos sexuales en el Título IV, señalando delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Aquí se encuentran disposiciones específicas para la protección de menores de edad de manera especial, ya que los menores de 14 años se consideran particularmente vulnerables o sujetos de especial protección constitucional.

Los principales tipos penales son acceso carnal abusivo (artículo 208) y actos sexuales con menor de 14 años (artículo 209), entre otros. Las penas establecidas para el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, y gracias a la reforma 1236 de 2008, se encuentran graduadas entre 12 y 20 años de prisión, en comparación con los actos sexuales con menor de 14 años, cuya sanción puede situarse entre los 9 y 13 años de prisión. Estas disposiciones buscan proteger la formación sexual de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se prevén agravantes cuando concurren circunstancias como el vínculo de autoridad, el uso de violencia o la producción de un daño grave (Ley 599, 2000, art. 11).

El Estado colombiano ha adoptado protocolos para garantizar la protección integral de los menores que han sido víctimas de este flagelo, como la ruta de atención integral en casos de violencia sexual (Ley 1146, 2007) y el protocolo de investigación de los delitos sexuales contra menores de la Fiscalía General de la Nación. Con estas medidas procesales y administrativas se complementa la sanción penal y se busca asegurar acompañamiento psicosocial y preservación de pruebas. Por su parte, en España, los delitos sexuales están regulados en el Título VIII del Código Penal; la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 trajo consigo un cambio sustancial, pues se elevó la edad de consentimiento sexual a 16 años, es decir, que cualquier acto sexual realizado con un menor de 16 años se presume delictivo, exceptuando aquellas situaciones limitadas cuando existe una relación de proximidad en edad y grado de desarrollo.

La protección penal se complementa con políticas públicas, como la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Ley Orgánica 8, 2021), que establece medidas de prevención, detección temprana, asistencia integral y formación especializada adicional. El sistema español aplica medidas cautelares y de protección, como órdenes de alejamiento, restricciones de comunicación y programas de asistencia psicológica.

Si bien ambos países prevén penas privativas de la libertad severas frente al ASI, su aplicación práctica es diferente, ya que en Colombia las penas parten desde los nueve años para actos sexuales con menores de 14, con grabaciones que podrían superar los 20 años en casos de acceso carnal, y en España la suma de penas en casos de pluralidad de delitos puede arrojar condenas teóricas muy elevadas de 40 o 50 años, aunque la ejecución efectiva se ve limitada por los topes legales establecidos en el Código Penal.

Además de las disposiciones ya mencionadas en Colombia y España, es importante revisar elementos importantes que influyen en el régimen sancionador, como lo son las agravantes, la edad de consentimiento, las reformas recientes y la eficacia práctica de las

penas; todos estos factores determinan cómo la ley se aplica en la cotidianidad y no solo lo que el régimen normativo establece.

Circunstancias que agravan la pena

En Colombia, además de los delitos tipificados como acceso carnal abusivo (art. 208) y actos sexuales con menor de catorce años (art. 209), al igual que acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de resistir (art. 210); todos establecidos en la Ley 1236 de 2008, que modificó el Código Penal para endurecer las penas y agravantes en los delitos de libertad, integridad y formación sexual, estos agravantes se aplican para aumentar la pena entre una tercera parte y la mitad del mínimo o máximo de la pena base cuando concurren hechos como

- la existencia de autoridad, cargo, parentesco o relación de confianza con la víctima;
- la victimización de una persona menor de catorce años;
- el uso de violencia o intimidación.

Del mismo modo, la Ley 1719 de 2014 prevé penas más altas en casos de violencia sexual ocurrida con ocasión del conflicto armado, especialmente cuando las víctimas son menores de edad, dada su situación de sujetos de especial protección constitucional.

Por su parte, España, con la Ley Orgánica 8/2021, conocida como Ley Rhodes, reforzó los agravantes, especialmente en lo que se refiere a la posición de confianza o autoridad, el abuso de vulnerabilidad, el uso del engaño y la comisión de actos sexuales a través de medios tecnológicos.

Además, bajo el Código Penal español reformado, los artículos relativos a los delitos de abuso y agresión sexual establecen que la pena aumenta en casos en los que se presenta, o el delito es cometido bajo condiciones de violencia, intimidación o incapacidad de resistencia, así como cuando el acto incluye penetración o introducción de objetos (Ley Orgánica 10, 2022).

Edad de consentimiento

Una diferencia clave en el régimen sancionador comparado es la edad de consentimiento sexual, pues se determina que, cuando ocurra cualquier actividad sexual con un menor, se considerará automáticamente punible.

En Colombia, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la edad de consentimiento legal es de 14 años, por lo que cualquier actividad sexual con menores de esa edad constituye delito, independientemente de la voluntad o consentimiento de la víctima. Pero no quiere esto decir que, si el delito es cometido en contra de un menor entre 14 y 18 años, no será considerado una agravante (Ley 1236, 2008).

Por su parte, en España, la Ley Orgánica 1/2015 elevó la edad de consentimiento a 16 años, lo que quiere decir que cualquier acto sexual con un menor de 16 años se presume delictivo, salvo en casos de cercanía en edad o grado de madurez entre los involucrados. Este cambio surgió de la necesidad de adaptarse a la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra los abusos y la explotación sexual de los menores, lo que amplía el rango de protección penal y limita el uso del consentimiento como defensa por parte del perpetrador.

El ordenamiento jurídico español sancionó la Ley Rhodes (Ley Orgánica 8, 2021); esta integró la directiva europea y estableció un marco legal que pretende fortalecer la protección de los menores frente a la violencia y la explotación sexual. Entre sus aportes más destacados se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, detección temprana y asistencia integral; la adaptación procesal con medidas de protección cautelar, atención psicológica y preservación de pruebas; así como la creación y supervisión de entornos seguros en instituciones educativas y deportivas.

Asimismo, la reforma conocida como "Solo sí es sí" (Ley Orgánica 10, 2022) llegó para complementar la Ley Rhodes y redefinió los delitos sexuales bajo el principio del consentimiento explícito, lo que trajo consigo la eliminación de la distinción entre abuso y agresión

sexual, es decir, que se unificó la respuesta penal frente a cualquier acto sexual sin consentimiento (Ley 15, 2022).

Al observar un poco ambos sistemas, es evidente que España ofrece mayor protección legal, ya que su rango de protección en edad es más alto (hasta los 16 años); por su parte, Colombia mantiene penas más severas para los delitos cometidos contra menores de 14 años, sin que esto quiera decir en ninguna circunstancia que los delitos sexuales cometidos contra menores de 14 a 18 no sean castigados o no constituyan agravación de la pena.

Ambos países concuerdan en que uno de los retos comunes es la necesidad de que las agravantes se apliquen efectivamente en las sentencias y que los protocolos no queden solo en el papel, sino que es menester y urgente que se amplíe el acceso a la justicia y el acompañamiento psicológico para las víctimas de este flagelo.

Los mecanismos de protección y atención integral a las víctimas

En Colombia, la respuesta institucional frente al ASI se basa en un sistema interinstitucional liderado por el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Salud y otras entidades, como la Policía Nacional y los entes territoriales competentes. Este sistema busca garantizar una atención integral que incluye desde la intervención médica inmediata hasta apoyo psicológico, jurídico y social, con especial énfasis en evitar la revictimización de las personas afectadas a través de protocolos detallados y formación especializada del personal a cargo.

Una iniciativa importante en este marco es el proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de Agresores Sexuales de Menores, el cual establece un registro detallado de personas condenadas por delitos sexuales contra menores, así como un seguimiento exhaustivo para prevenir la reincidencia. Este sistema contempla medidas como la prohibición de acercarse a lugares con presencia masiva de niños, el monitoreo remoto mediante dispositivos electrónicos y el acompañamiento psicosocial para lograr la resocialización, bajo un enfoque de derechos humanos integral (Cámara de Representantes, 2024).

Además, la normativa colombiana ha incluido reformas como la Ley 2375 de 2024, la cual tiene a su cargo la asistencia primaria, la cobertura total de las víctimas con un enfoque de género y derechos humanos, así como prevención y asistencia integral. Sin embargo, a diario, el país enfrenta diversos desafíos territoriales, como la constante falta de replanteamiento en la atención, particularmente en lo relacionado con la sensibilidad institucional, lo que limita el fortalecimiento de la calidad de la respuesta frente a estos casos.

En el caso de España, el sistema para la protección de víctimas de ASI está previsto en la Ley Orgánica 8 (2021), que proporciona un amplio marco legal para garantizar una atención coordinada, especializada y subdividida. La ley establece la creación de servicios de intervención en crisis las 24 horas, asistencia psicológica y legal, así como medidas preventivas para proteger a las víctimas y potenciales víctimas de la revictimización y la reaparición del delito. También promueve la desinstitucionalización, mejorando la reintegración comunitaria y familiar, y el desarrollo holístico del niño. La colaboración interadministrativa y de entidades especializadas es un pilar del sistema, junto con iniciativas específicas contra la explotación infantil impulsadas por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Además, España promueve campañas de concienciación pública y educación comunitaria porque, por un lado, la vigilancia y la acción preventiva del público sobre problemas sociales como el abuso infantil son importantes de abordar. La formación continua para profesionales en salud, justicia y trabajo social es esencial para proporcionar una atención adecuada, respetuosa y centrada en la víctima, lo que a su vez evita más daños.

Unicef (2021, 2024) subraya que ambos países necesitan fortalecer sistemas de protección para los niños que sean integrados, completos, disponibles y ajustados a las realidades sociales, culturales y geográficas de los países. Se sugiere establecer protocolos claros, formación permanente de equipos multidisciplinarios, acción coordinada y empoderamiento activo de las víctimas, así como educación dirigida a comunidades y familias para proporcionar entornos protectores que bloqueen eficazmente el ASI.

Esta articulación interinstitucional, junto con el uso de sistemas tecnológicos sofisticados para monitorear a los perpetradores y la defensa proactiva de enfoques integrales y de derechos humanos, tiene como objetivo no solo el cuidado de las víctimas, sino también prevenir y reparar el daño de una manera completamente sostenible, que debe estar disponible tanto a nivel nacional como internacional.

En Colombia, los avances recientes han incluido la creación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, que tiene como objetivo identificar y responder rápidamente a los actos de violencia sexual contra niños y adolescentes. Como señala la Procuraduría General de la Nación (2025), el sistema es esencial para estructurar la respuesta interinstitucional del ICBF, la Fiscalía y el Ministerio de Salud a cada caso reportado, agilizando e integrando el esfuerzo en todos los aspectos del caso. Por otro lado, la Procuraduría también advierte sobre el gran volumen de delitos reportados, lo que subraya la urgente necesidad de mejorar la respuesta dentro del sistema de detección y control y aumentar la capacitación continua de los operadores del sistema para evitar la revictimización.

En España, la estrategia de protección abarca una red de servicios especializados que integra la provisión de asistencia psicológica, legal y social, con programas educativos y de formación para el público en general y los profesionales pertinentes. Una parte crucial de la estrategia es el énfasis en la desinstitucionalización, con el objetivo de permitir que los niños crezcan en entornos familiares, seguros y de apoyo. Según el Plan Estratégico para la Prevención de la Explotación Sexual y la Violencia contra la Infancia, la coordinación interinstitucional, la formación permanente y la participación de la sociedad son elementos fundamentales para que el sistema de protección funcione de manera integral y efectiva (Ministerio de la Igualdad, 2025).

Para resumir, los mecanismos para la protección y atención integral de las víctimas de ASI en Colombia y España muestran considerables intentos en la efectiva protección legal y de derechos de los niños y adolescentes. Ambos países han formulado marcos legales y protocolos que brindan asistencia médica, psicológica, legal y social, mientras intentan prevenir la revictimización y fomentar la restauración. Sin embargo, persisten las limitaciones en la cobertura geográfica, la falta de formación primaria continua adecuada, así como la débil coordinación y colaboración interinstitucional. Estas brechas deben cerrarse para fortalecer la respuesta institucional.

La mejora de la efectividad de los mecanismos de protección requiere la colaboración de entidades públicas y organizaciones internacionales, así como la promoción de políticas públicas fundamentadas en la defensa de los derechos humanos. Igualmente, resulta urgente fortalecer las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, con el fin de superar la inercia profesional que persiste y que limita la construcción de entornos seguros y protectores para los niños. Estos enfoques integrales y multidisciplinarios permiten garantizar que las víctimas de abuso accedan a la asistencia necesaria y logren, a largo plazo, la superación de su trauma (Acuña Navas, 2014).

Con relación a Colombia, la Ley 2081 de 2021 es una muestra de avance, ya que amplía el término de la prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. También es cierto que la efectividad de esta ley está condicionada a la capacidad de las administraciones encargadas de suprimir y castigar a las personas para actuar de manera ágil y sin retrasos indebidos, que, tortuosa y de manera revictimizante, afectan a las personas involucradas. Junto con esto, es importante asegurarse de que las unidades administrativas locales cuenten con los recursos financieros, tecnológicos y humanos adecuados para implementar las disposiciones legales de manera no discriminatoria a nivel nacional.

En comparación, España ha cambiado a una posición más avanzada con la Ley Orgánica 8/2021, que incorpora un enfoque integral para la protección de los niños contra todas las formas de violencia. Esta norma no solo prevé mecanismos para la respuesta inmediata, sino que también incorpora medidas de protección a nivel educativo y social en la prevención primaria. Sin embargo,

la efectividad sustantiva de la norma se ve socavada por la necesidad de lograr una articulación suficiente y equilibrada entre las comunidades autónomas y el Estado central, en particular en lo que respecta a la provisión de servicios especializados.

Un área de coincidencia para ambos países es la necesidad de mejorar la capacitación del personal que trata con víctimas de ASI. La educación, la ley y las habilidades de intervención psicosocial son críticas para la implementación de servicios de apoyo desprovistos de prejuicio y revictimización. En este contexto, se pone énfasis en la formación continua de jueces, fiscales, policías, psicólogos, médicos y trabajadores sociales como un área clave que aún sufre graves deficiencias.

Asimismo, la campaña y los proyectos de prevención y sensibilización dirigidos al público en general son fundamentales para reducir la incidencia de estos delitos. En Colombia y en España, estos marcos para el cambio comunitario han demostrado que los programas escolares, las familias y las comunidades son esenciales para la detección temprana y el empoderamiento de los niños para reconocer el abuso y los comportamientos abusivos. La creación y el mantenimiento de tales entornos protectores requieren un esfuerzo pedagógico sostenido que va más allá de la simple sanción.

Inicia y Unicef, junto a Save the Children, han reconocido a nivel global la necesidad de un enfoque sui géneris en la construcción y aplicación de políticas públicas de protección de niños y adolescentes. Esto sostiene que niños y adolescentes son sujetos que deben ser escuchados. Por eso mismo, deben ser escuchados en los distintos niveles de la administración y la judicatura, y la atención debe ser activa en todos los niveles. Esta escucha es elemental en el desarrollo de su capacidad de resiliencia. En conclusión, el enfoque de la lucha contra el ASI necesita ser multidimensional, en el sentido de que contemple punitividad, reparación y prevención integral. Esto abarca el cambio de algunas leyes; sin embargo, el eje de cambio deben ser los distintos aspectos de la sociedad que sostienen el silencio y el tabú que rodean la victimización. El esfuerzo cooperativo binacional y multinacional, en sí mismo, puede ser un marco válido para el intercambio, junto a la complementación de buenas prácticas, apuntando a fortalecer la respuesta que España y Colombia ofrecen a la infracción que hace daño a los niños, de la cual la integridad y el desarrollo esenciales de su vida se ven afectados.

Prescripción del delito de abuso sexual infantil

En Colombia, la Ley 2081 de 2021 modificó el artículo 83 del Código Penal (Ley 599, 2000), estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de los menores de edad. Esto significa que los procedimientos judiciales pueden iniciarse en cualquier momento, independientemente del periodo que haya transcurrido desde el momento en que se cometió el crimen, lo cual es fundamental para asegurar que las víctimas puedan reivindicarse incluso después de alcanzar la mayoría de edad.

Este es un avance fundamental hacia la urgente necesidad de abordar el problema de la impunidad, teniendo en cuenta los problemas únicos que enfrentan los niños, adolescentes y mujeres al reportar casos de manera oportuna. Esta reforma legal se centra en la necesidad de eliminar los atrasos indebidos que, en el pasado, han allanado el camino para la negación de justicia a las víctimas de ASI, ya que en numerosas ocasiones existe un síndrome de prevención de denuncia debido al miedo, al control por parte del abusador y al trauma emocional. De esta manera, la imprescriptibilidad de estos delitos fortalece el compromiso del Estado para ofrecer una tutela jurídica permanente. Además, busca disminuir la impunidad, crear un efecto disuasorio contra los agresores y asegurar que la reparación y atención integral a las víctimas pueda extenderse en el tiempo sin estar condicionada a plazos limitados (Consultorio Jurídico de la Universidad Ibagué, 2023).

En España, la regulación del plazo para perseguir delitos sexuales está establecida en el artículo 131 del Código Penal, que prescribe plazos de distinta duración

para los diferentes grados del delito y la correspondiente pena. La prescripción consiste en una limitación legal que propone un plazo dentro del cual se puede actuar, intentando encontrar un equilibrio entre la protección de la comunidad y los derechos al debido proceso del acusado. Para los delitos sexuales que se consideran más graves, que tienen una pena de prisión de más de 15 años, el plazo establecido es de 20 años. Estos incluyen, por ejemplo, violaciones agravadas o de naturaleza especialmente grave cuando se cometen contra menores.

Este periodo de 20 años se cuenta desde la fecha de comisión del delito o desde la fecha en que la víctima alcanza la mayoría de edad, reconociendo la situación particular de vulnerabilidad de los menores. Para los delitos con una pena de prisión máxima de entre 10 y 15 años, el plazo se establece en 15 años. Esto incluye delitos sexuales graves, pero con un menor grado de factores o circunstancias agravantes, que se consideran menores, pero que aún tienen un impacto significativo en las víctimas. Los delitos sexuales con penas entre 5 y 10 años prescriben a los 10 años. Este tipo de delitos incluye algunas formas de agresión sexual y abuso, que se consideran dentro de un marco penal de protección, pero con penas moderadas.

En contraste, los delitos con pena máxima inferior a cinco años prescriben mucho más rápido, en un plazo de cinco años. Estos comprenden delitos básicos de agresión sexual, acoso, exhibicionismo, provocación sexual y delitos relacionados con la prostitución y pornografía cuando afectan a menores mayores de 16 años. El cómputo de los plazos suele comenzar al momento de la comisión del delito o, en su defecto, desde que la víctima alcanza la mayoría de edad. Esto reconoce que, en muchas ocasiones, por la edad o el trauma, la víctima puede tardar años en denunciar, por lo que el sistema jurídico español busca ofrecer un tiempo adecuado para la acción judicial.

Sin embargo, los plazos establecidos han sido objeto de críticas por parte de expertos y organismos internacionales, que argumentan que los tiempos para la prescripción en delitos sexuales son insuficientes, dada la naturaleza del trauma, el miedo y el estigma que imposibilitan una denuncia oportuna. En respuesta a estas críticas, en España, la Ley Orgánica 8/2021 modificó el cómputo de los términos de prescripción para los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y otros delitos graves. Ahora, el plazo de prescripción se computará desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años, cuando la victimización derive de un delito de tentativa, de homicidio, de lesiones agravadas, de maltrato habitual o de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. Esta modificación tiene como única finalidad ofrecer una mayor protección a las víctimas (Torres Rosel, 2022).

Unicef, entre otros organismos internacionales, recomienda la extensión de los plazos o la eliminación total de la prescripción para estos delitos, basándose en la complejidad que el abuso sexual infantil genera en la posibilidad de denuncia y búsqueda de justicia. Las propuestas legislativas también buscan aumentar la capacitación de los operadores judiciales, mejorar la atención integral a las víctimas y garantizar procesos judiciales sensibles al contexto de abuso y trauma que sufren las víctimas. La reforma no solo tiene impacto en los tiempos judiciales, sino también en las políticas públicas orientadas a la prevención, atención y rehabilitación de las víctimas, reforzando así un sistema integral de protección.

En síntesis, España mantiene un sistema con plazos amplios de prescripción que reflejan una consideración de la gravedad de los delitos sexuales contra menores, pero enfrenta un proceso de actualización legal orientado a maximizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas y a adecuarse a estándares internacionales contemporáneos. Este proceso refleja una evolución jurídica consciente de la realidad social, psicosocial y legal del ASI, complementando esfuerzos normativos con programas educativos y preventivos para la erradicación definitiva del ASI.

En conclusión, la falta de reglas de prescripción para la persecución de la violencia sexual contra niños y adolescentes en Colombia constituye la eliminación de una limitación temporal para la persecución de la violencia sexual contra niños en Colombia, lo cual es un

avance notable en la protección de los niños. Este avance asegura el cumplimiento de las políticas públicas para niños, adolescentes y mujeres al proporcionarles justicia y fortalecer las políticas de prevención y reparación. Por supuesto, la eliminación de la limitación requeriría la detención y la plena aplicación de la normativa en la práctica, así como políticas injustamente flexibles que serían necesarias para organizar programas preestablecidos en el sistema penal dentro de un marco de políticas modulares flexibles.

En contraste, España opera bajo un sistema que aún establece, en relación con otros tipos de delitos, plazos más flexibles para la prescripción de la persecución de la violencia sexual contra niños y adolescentes. Aunque reconoce la importancia de la violencia sexual contra niños y la necesidad de proporcionar una protección especial a esta población, España está en proceso de ampliar la eliminación de periodos. Estas reformas en curso tienen como objetivo abordar la realidad del trauma social y los retrasos sistémicos en la persecución penal —que ocurren por el trauma social y esos retrasos en la persecución penal—, en alineación con las recomendaciones internacionales que piden la eliminación de los periodos de prescripción o la ampliación de estos. Colectivamente, estos dos países muestran un progreso legislativo que apunta a armonizar la protección de las víctimas con las garantías legales (El País, 2024).

Análisis de enfoques: sanción y reparación

La comparación de los modelos regulatorios sobre ASI entre Colombia y España revela una diferencia filosófica fundamental, con cuerpos sancionadores donde la persecución de delitos sexuales infantiles está centrada (Colombia), mientras que un modelo de protección integral y prevención (España) pretende reglas opuestas. Esta diferencia, imperceptible a simple vista en términos de penas, se cristaliza en los pilares que cada país ha adoptado para liderar su lucha contra este flagelo.

El sistema colombiano ha centrado su propuesta de protección en el poder represivo del Estado, dando preferencia a la justicia retributiva sobre la prevención primaria. Los dos hitos legislativos-normativos más recientes en este sentido son el establecimiento de la prisión perpetua revisable (Acto Legislativo 01, 2020) y la imprescriptibilidad de la acción penal para estos delitos (Ley 2081, 2021).

Esta tendencia puede ubicarse dentro de la criminología del populismo punitivo, que caracteriza aquellos periodos de aumento de penas judiciales como una respuesta política que se incurre inmediatamente ante la alarma social, con el objetivo de recuperar la confianza pública a través de su máxima severidad, reflejada en la idea de que "La creencia en que el aumento de penas es la solución al tratamiento jurídico del delito sexual contra NNA [niños, niñas y adolescentes] la encontramos en el órgano legislativo colombiano" (Tirado Acero *et al*., 2021). Autores como estos argumentan que la tradición legal colombiana ha recurrido repetidamente al eje de la severidad de la pena, apostando por la efectividad de las medidas como algo más simbólico y mediático que real en términos de prevención estructural. Bajo tal modelo, la retórica de un castigo severo y una persecución a largo plazo ha sido el énfasis en el discurso público, llevando al Estado a concentrar sus esfuerzos en la judicialización posterior al delito más que hacia su prevención.

Por el contrario, España ha optado por un enfoque de derechos humanos integral y multidisciplinario, a través de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, sobre la protección integral de la infancia y adolescencia contra la violencia (LOPIVI). La filosofía de la LOPIVI no es solo sancionar, sino prevenir la victimización en todas sus áreas (educativa, familiar, social) y garantizar una reparación de manera sostenible. La legislación española entendió que la problemática requería una solución estructural con una respuesta institucional que incluyera herramientas preventivas como la detección temprana, asistencia especializada y coordinada, así como una reducción de la victimización secundaria mediante pruebas preconstituidas (Torres Rosel, 2022). Incluso en el ámbito punitivo, la reciente reforma de la prescripción —ampliando su cómputo desde que la víctima cumple los 35 años— se entiende también como una medida en términos de protección a la víctima, pero no exclusivamente como el eje central de la lucha

contra el abuso (Torres Rosel, 2022). De esta manera, el sistema español actúa de forma preventiva e integral para generar entornos seguros.

La diferencia más notable radica en que, aunque ambos países buscan proteger a los menores, Colombia ha optado por un enfoque de justicia punitiva que tiende a ser cada vez más severo, incluso antes de que se agote el plazo establecido por el estatuto de limitaciones (Ley 2081, 2021). En contraste, España ha implementado un nuevo sistema de justicia penal y restaurativa, así como programas de prevención del delito (Ley Orgánica 8, 2020), que combinan sanciones con trabajo social, iniciativas educativas y programas de salud. El desafío para Colombia no se limita a mantener los regímenes de castigo existentes, sino a trascender el populismo penal (Tirado Acero *et al*., 2021) e integrar de manera eficaz y especializada estructuras de prevención y asistencia que sean tan integrales y abarquen todas las edades como la desarrollada en el marco español, para poder asegurar así la plena protección de los derechos de la infancia.

Conclusión

La comparación entre los marcos jurídicos de Colombia y España sobre el ASI muestra dos modelos diferentes de protección que buscan defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero desde estructuras normativas y estructurales diferentes. En Colombia, la reacción estatal ha sido principalmente punitiva, con un agravamiento de penas y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Sin embargo, España ha apostado por un modelo de protección integral, preventivo y restaurativo, considerando al menor como sujeto de derechos y no como objeto de un delito.

Ambos países han dado pasos importantes en el reconocimiento de la magnitud del ASI como un problema estructural que va más allá de lo legal y se sitúa en lo social, educativo y cultural. Pero el contraste muestra que, mientras España ha desarrollado un marco sistémico, articulado y transversal a las políticas públicas, Colombia aún tiene grandes desafíos en términos de coordinación interinstitucional, cobertura territorial y especialización de operadores judiciales y sociales. Sin embargo, este desequilibrio no significa falta de avances; por el contrario, requiere trascender una normatividad reactiva hacia una política pública integral, continua y pedagógica.

Tal como lo evidencia la aplicación de la Ley Orgánica española (Ley Orgánica 8, 2021), la prevención de la violencia sexual infantil necesita un marco legal que no solo castigue, sino que integre educación, salud, justicia y familia. Su modelo aboga por la capacitación permanente de los profesionales que trabajan en casos de violencia, la creación de entornos seguros en instituciones educativas y deportivas, y la participación del niño en los procesos judiciales y administrativos que le conciernen. Estos componentes pueden ser modelos para mejorar la legislación colombiana, especialmente en el diseño de programas de detección temprana, acompañamiento integral y reparación del daño, previniendo la revictimización que aún caracteriza muchos procesos judiciales en Colombia.

Colombia ha logrado avances como la Ley 2081 de 2021 —que declara imprescriptible el delito de abuso sexual en menores— y la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de Agresores Sexuales para prevenir la reincidencia, pero la eficacia de tales medidas depende de su aplicación práctica y del fortalecimiento institucional. La agravación de la pena por sí sola no asegura justicia ni reduce la criminalidad, si no se implementan políticas públicas de prevención, educación sexual integral, fortalecimiento familiar y atención psicológica especializada. En ello, el reto colombiano consiste en superar el populismo punitivo y construir un sistema de justicia protector, restaurativo y humanizado.

La prescripción del delito es otro aspecto importante por considerar. La imprescriptibilidad en Colombia es un progreso innegable en la lucha contra la impunidad, aunque debe ir acompañada de una disminución de los obstáculos probatorios, el aceleramiento de los trámites y la concienciación de los funcionarios judiciales. A pesar de que España mantiene plazos de prescripción, ha extendido considerablemente los márgenes temporales y admite la complejidad psicológica del trauma

infantil, posibilitando el comienzo de procesos incluso años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Los dos modelos pueden combinarse: el modelo colombiano proporciona solidez en la sanción, mientras que el español brinda un balance entre justicia y reparación emocional.

El contexto internacional, respaldado por organizaciones como Save the Children y Unicef, indica que la batalla contra el abuso sexual a niños no puede ser exclusivamente judicial. Es fundamental fomentar la participación de la comunidad y de los niños, establecer entornos seguros y asegurar que las políticas públicas vayan más allá de las transiciones gubernamentales. Para construir una cultura de prevención, es necesario incorporar los principios de equidad, respeto y empatía en las redes educativas y comunicativas, luchando contra el silencio, la naturalización y la estigmatización de la violencia sexual.

En síntesis, la verdadera protección de la infancia exige trascender los límites del derecho penal y consolidar una cultura social comprometida con la prevención, la escucha activa y el respeto. Tanto en Colombia como en España, la legislación constituye solo un punto de partida: la erradicación del ASI dependerá de la capacidad de las instituciones, las comunidades y las familias para construir entornos seguros, empáticos y libres de silencio. La niñez no solo necesita ser protegida, sino reconocida como protagonista en la transformación de las estructuras que históricamente la han vulnerado. Apostar por su bienestar no es únicamente una obligación jurídica, sino un imperativo ético y humano que define el tipo de sociedad que aspiramos a ser.

Referencias

Acto Legislativo 01. (2020). Congreso de Colombia. https://www.funcionpublica.g.ov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=136391

Acuña Navas, M. J. (2014). Abuso sexual en menores de edad: Generalidades, consecuencias y prevención. *Medicina Legal de Costa Rica*, *31*(1), 57-69. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152014000100006

Consultorio Jurídico de la Universidad de Ibagué. (2023). *Imprescriptibilidad, ¿la solución para los delitos sexuales?* https://derechoypolitica.unibague.edu.co/noticias-consultorio-juridico/116-imprescriptibilidad-la-solucion-para-los-delitos-sexuales

Domínguez Álvarez, J. L. (2021). Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. *Ars Iuris Salmanticensis*, *9*, 284-341. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347

El País. (2024, noviembre 12). El Congreso estudiará un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra menores no prescriban. https://elpais.com/sociedad/2024-11-12/el-congreso-estudiara-un-cambio-legislativo-para-que-los-delitos-sexuales-graves-contra-menores-no-prescriban.html

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). *Estrategia de protección de la infancia (2021-2030)*. Organización de las Naciones Unidas. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/media/105001/file/Child-Protection-Strategy-Spanish-2021.pdf

Ley 1146 de 2007. (2021, 18 de diciembre). Congreso de Colombia. Diario Oficial N.º 46685. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25669

Ley 1236. (2008, 23 de julio). Congreso de Colombia. Diario Oficial N.º 47.059. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31612

Ley 15. (2022, 12 de julio). Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589

Ley 2081. (2021). Congreso de Colombia. Diario Oficial N.º 51577. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=157592

Ley 599. (2000, 24 de julio). Congreso de Colombia. Diario Oficial N.º 44097. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388

Ley Orgánica 10. (2022, 6 de septiembre). Jefatura del Estado. Boletín Oficial del Estado N.º 215. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630

Ley Orgánica 8. (2021, 4 de junio). Las Cortes Generales de España. Boletín Oficial del Estado N.º 134. https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf

Ministerio de la Igualdad. (2025). *Plan Estratégico para la Prevención de la Explotación Sexual de la Infancia*. Gobierno de España.

Organización Mundial de la Salud. (2004). *Abuso sexual infantil: Una emergencia sanitaria silenciosa: Informe del Director Regional*. Organización de las Naciones Unidas. https://web.archive.org/web/20231018053740/https://iris.who.int/handle/10665/1878

Procuraduría General de la Nación. (2025). *Informe sobre violencia sexual infantil en Colombia*. https://savethechildren.org.co/la-violencia-sexual-contra-la-ninez-en-conflictos-armados-aumenta-un-50-en-cinco-anos-alcanzando-su-nivel-mas-alto-registrado/

Proyecto de ley 413. (2024). Cámara de Representantes. https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-del-cual-se-crea-el-sistema-nacional-de-monitoreo-de-agresores-sexuales-de-menores-de-edad-y-se-dictan-otras-disposiciones-registro-de-agresores-sexuales/14277/

Te Protejo México. (2025, marzo 13). *¿Qué es el abuso sexual infantil y cómo se define legalmente?* Te Protejo México. https://teprotejomexico.org/2025/03/13/que-es-el-abuso-sexual-infantil-y-como-se-define-legalmente/

Tirado Acero, M., Cáceres Tovar, V. M. y Velandia Montes, R. (2021). Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes frente al populismo mediático y punitivo. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, *16*(1). https://doi.org/10.15332/19090528.6483

Torres Rosel, N. (2022). Menores víctimas y prescripción del delito: Análisis jurídico y político-criminal de la reforma legal en España (LO 8/2021, de 4 de junio). *Política Criminal*, *17*(34), 538-566. https://doi.org/10.4067/S0718-33992022000200538

Unicef y Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. (2024). *Abuso sexual en niños, niñas y adolescentes: Orientaciones para su abordaje y prevención*. Organización de las Naciones Unidas. https://www.unicef.org/uruguay/media/10326/file/Folleto%20SIPIAV%20abuso%20sexual%202024.pdf.pdf

Maternidad subrogada en Colombia: ¿un procedimiento con fines lucrativos?

Daniela Vanessa López Sepúlveda*
Angie Valentina Rojas Gil**

* Estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
https://orcid.org/0009-0006-2819-008X

** Estudiante del programa de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
https://orcid.org/0009-0001-1693-6909

Resumen

En este artículo se expone la maternidad subrogada como método y alternativa para las parejas que no logran tener hijos; para mujeres que tienen alguna condición médica que hace peligroso el embarazo y, en consecuencia, pone en peligro su vida y la vida del bebé, o para parejas del mismo sexo que se encuentran en una total limitación frente a la conformación de una familia. Considerando esta práctica como un proceso en beneficio de la pareja solicitante y no de la mujer gestante, se hará un análisis para comprender la motivación económica detrás de la decisión de esta mujer de someterse a este procedimiento. Se examinará cómo el costo inherente al proceso, el sustento y cuidado de la mujer durante el embarazo, el apoyo a su familia y la compensación otorgada por la pareja que busca cumplir su deseo de tener un hijo se entrelazan y pueden enmascarar una finalidad lucrativa.

Palabras clave: maternidad subrogada, madre gestante, lucro, legalidad.

> La gestación subrogada en Colombia, sin regulación legal, profundiza desigualdades y vulnera derechos, lo que exige un marco normativo integral que proteja la dignidad de las mujeres gestantes y los niños.

Abstract

This article explores surrogacy as an alternative for couples unable to have children, for women with medical conditions that pose significant health risks during pregnancy to themselves or the fetus, and for same-sex couples facing barriers to traditional family formation. Viewing this practice as a process that primarily benefits the commissioning couple rather than the gestational surrogate, we will analyze the financial incentives for which these women undergo this procedure. We will also examine how these incentives are often obscured by the stated expenses of the process itself; the maintenance and care provided not only to the woman during gestation, but also to her family, and the compensation granted by the couples to the women who enable them to satisfy their desire for a child.

Keywords: surrogacy, expectant mother, profit, legality.

Introducción

La maternidad subrogada es una técnica de reproducción asistida que, como su nombre indica, ayuda y asiste a las personas que, por alguna razón, no pueden tener o concebir hijos.

Esta técnica se realiza mediante una mujer, que es la que gesta al embrión hasta su nacimiento. En esta práctica, generalmente el óvulo de la madre contratante se une al espermatozoide del padre contratante antes de ser introducido en el vientre de la mujer gestante. Una vez nacido el niño, la persona o pareja contratante será la que se hará cargo de él (Cervino *et al*., 2019).

Es cierto que este método abre un nuevo panorama y da esperanza a las personas que tienen opciones muy limitadas para ser padres; asimismo, existen otros métodos de reproducción asistida, como la inseminación artificial, la congelación de embriones y la fecundación *in vitro* (FIV), que conforman el conjunto de procedimientos médicos empleados para ayudar o hacer posible la procreación humana y resolver problemas de esterilidad de las parejas (Montes Guevara, 2004).

La accesibilidad a esta práctica, como dijo Arteta Acosta (2011), está basada en la decisión libre de adultos que ejercen sus derechos (p. 94). En Colombia se han presentado varios proyectos de ley para la regulación de la maternidad subrogada, siendo archivados cada uno de ellos. En la actualidad, en aquellos países en los que la maternidad por subrogación es aceptada legalmente, se la tiende a considerar como un contrato entre las partes (Aparisi Miralles *et al*., 2017).

Ahora bien, este *boom* de la gestación subrogada como técnica de reproducción asistida también se ha sentido en Colombia. Al respecto, Beetar Bechara (2019) afirma que para 2016 existían alrededor de 25 centros de reproducción asistida en Colombia que ofrecían el tratamiento de gestación subrogada (p. 137). Ahora bien, no existe información precisa sobre la cantidad de procedimientos de gestación subrogada que se están realizando en Colombia; sin embargo, algunos apuntan que, en el país, en los últimos años, este negocio ha proliferado (Álvarez y Castrellón, 2023). El punto álgido de esta práctica en el país se puede explicar por la ausencia regulatoria y la oportunidad de negocio que esto significa para los intermediarios (Reyes Barrera y Arregoces Bello, 2024).

Como se indicó, el vacío normativo sobre la gestación subrogada ha permitido la proliferación de este tipo de contratos en el país, sobre todo en contextos en los que las madres gestantes se encuentran en situaciones manifiestas de vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, este fenómeno afecta desproporcionadamente a las mujeres de menor nivel socioeconómico, quienes a menudo celebran contratos de gestación subrogada simplemente por dificultades económicas. Por tanto, este trabajo analizará la gestación subrogada en el contexto de una práctica lucrativa que genera explotación reproductiva, destacando los desafíos éticos y los dilemas legales que se presentan. En este contexto, el presente artículo propone una revisión crítica de la gestación subrogada en Colombia, con base en su desarrollo histórico, estatus legal, debates éticos y jurídicos desde una perspectiva sociojurídica.

Finalmente, Gamboa-Bernal (2023) afirmó que, debido a la disparidad de la legislación global, que sigue siendo desigual en los distintos países, los padres o personas contratantes están en inferioridad de condiciones por el desconocimiento que pueden tener de los temas jurídicos y se exponen al incumplimiento de los términos del contrato (p. 8).

Una mirada a través de la historia

Es bien sabido que la maternidad subrogada es una técnica de reproducción humana asistida por medio de la cual una mujer se presta a gestar el hijo de otros, renunciando al parto y, consigo, a cualquier tipo de relación jurídica o filiación sobre él. La discusión provocada por el gran debate intelectual acerca de sus implicaciones, tanto éticas como jurídicas, no es, ni mucho menos, novedosa o propia de nuestra era; la realidad es que estas técnicas de reproducción humana asistida se remontan al Antiguo Testamento: en la época precristiana ya se podían observar referencias a ciertas prácticas que podrían asimilarse a la maternidad subrogada en los

relatos sobre la infertilidad de Sara y Raquel (Génesis 16: 1-4).

Sara era la mujer de Abraham. Después de diez años de convivencia, no había quedado embarazada aún y, apesadumbrada por ello, le ofreció a su marido la posibilidad de dormir con su esclava Agar para que tuvieran descendencia a través de ella. Fruto de esa unión nació Ismael, cuando Abraham contaba ya con ochenta y seis años. El caso de Raquel es muy parecido: ella estaba casada con Jacob, pero aún no habían tenido hijos. Al quedar la hermana de Raquel embarazada, siente envidia y le propone a Jacob concebir un hijo a través de su esclava Bilá (Génesis 30: 1-3). De esa unión nació un niño al que llamaron Dan. Eleonor Lamm, en un extenso estudio sobre la gestación por sustitución publicado en 2012, se refiere al hecho de que estas prácticas se encuentran recogidas en el Antiguo Testamento como una especie de visto bueno ético. Esto se desarrollaba con el objetivo de conservación del linaje, que era una preocupación en los tiempos de escasez de trabajo.

Mucho tiempo después, se habla de que hay otras historias parecidas en el Génesis, de las que no puede deducirse la legitimidad de las madres subrogadas, aunque es indiscutible que el recurso de embarazo en otras mujeres para tener un hijo, aprovechando las malas condiciones de estas, ha existido siempre (Leonsegui Guillot, 1994).

Luego surgieron los primeros casos de gestación por sustitución y se hicieron públicos en Estados Unidos en la década de los años setenta, donde se reconoció el primer acuerdo entre los comitentes y la gestante, dando paso a este tipo de contratos, cuyo número llegó a los 600 entre 1976 y 1988. Sin embargo, no fue hasta 1986 cuando el tema generó una gran polémica a raíz del famoso caso Baby M, cuando la Corte Suprema estadounidense, por primera vez, tuvo que fallar acerca de la custodia de una bebé nacida de un contrato de gestación por sustitución, concediéndosela finalmente a los comitentes. A partir de entonces, el mercado de gestación por sustitución empezó a crecer en algunos estados de Estados Unidos, donde se determinó legislar acerca de la cuestión a partir de los años noventa. Al mismo tiempo, el mercado de subrogación se expandió a los países en vías de desarrollo, como India o Ucrania, debido a los bajos costos relacionados con la ejecución del contrato (Mohapatra, 2012).

En ese sentido, la rápida expansión de la gestación subrogada comercial en todo el mundo, sobre todo en países en desarrollo como Colombia, agudiza las preocupaciones éticas en torno al trabajo reproductivo, la mercantilización del cuerpo de la mujer y la desigualdad transnacional. En concreto, la expansión de la gestación subrogada en países como Colombia se ha producido debido a los bajos costos de la práctica en comparación con otros países. Gamboa-Bernal (2023) afirma que en Estados Unidos el costo del procedimiento de gestación subrogada tiene un valor de alrededor de 140 000 dólares americanos (p. 4). En cambio, en Colombia estos procedimientos tienen un valor de alrededor de 17 a 19 millones de pesos colombianos (Muñoz, 2023). Es decir, en Colombia el procedimiento es al menos 30 veces más económico que en países como Estados Unidos.

Problemas éticos y jurídicos

En cuanto a la regulación de la maternidad subrogada, en la actualidad ningún instrumento internacional jurídicamente vinculante regula específicamente la gestación subrogada. Sin embargo, varios tratados de naturaleza de derechos humanos, así como instrumentos de derecho indicativo, proporcionan una importante orientación normativa al enfoque pertinente para su regulación. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de la ONU, en su artículo 3, ha establecido el principio del interés superior del niño, según el cual dicho criterio debe ser parte integral de cualquier proceso de toma de decisiones a nivel legal o de políticas. Ya en el campo del *soft law*, recientemente, en 2023, tuvo lugar la Declaración de Casablanca con el objetivo de buscar la abolición de la gestación subrogada (Gamboa-Bernal, 2023, p. 2).

En Colombia, actualmente no existe una ley o marco normativo positivo que regule la gestación subrogada, a pesar de los numerosos intentos de

proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso con este objetivo. Esta falta de regulación ha generado una situación marcada por la incertidumbre y la fragmentación jurídica, lo que ha llevado a los jueces, en particular a los de la Corte Constitucional, a asumir un papel proactivo en relación con la gestación subrogada y la resolución de conflictos legales que se derivan de esta técnica de reproducción asistida. Por ejemplo, la Corte Constitucional (Sentencia T-968 de 2009) expuso que la doctrina jurídica ha comenzado a reconocer la maternidad subrogada como una alternativa viable para enfrentar los desafíos que supone la infertilidad en muchas parejas. Sin embargo, también ha resaltado la necesidad urgente de establecer una regulación clara que prevenga posibles abusos o vacíos legales. Entre las principales preocupaciones se encuentran la intermediación con fines lucrativos entre quienes participan en estos acuerdos, la falta de garantías para proteger los derechos y el bienestar del recién nacido, la posibilidad de que se realicen actos contrarios a la ley sobre el propio cuerpo y los complejos conflictos legales y éticos que pueden surgir cuando las partes no logran mantener los términos del convenio.

Cabe precisar que, desde un punto de vista sociojurídico, lo conflictivo del asunto es que, al no existir prohibición o regulación, se permite el abuso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues no son ellas las que reciben la mayoría de los réditos generados por alquilar su vientre; en realidad, reciben ínfimas sumas de dinero por prestar algo tan preciado como su capacidad reproductiva. Para ejemplificar, tenemos el caso de Aidé Vanegas, una mujer de 40 años, madre soltera de 4 niños, que ha "alquilado su vientre" para sostener su hogar, recibiendo mensualidades de tan solo dos millones de pesos colombianos (Rojas, 2017).

Debido a los desafíos jurídicos que genera la maternidad subrogada, Beetar Bechara (2019) afirma que, en todo el mundo, se han dado tres enfoques regulatorios: proscripción total en países como España, Francia, Suiza, Italia y Suecia; admisión regulada con fines exclusivamente altruistas en Estados como Inglaterra, Canadá y Australia, y admisión tolerada debido a ausencia regulatoria en países como India, Rusia, Ucrania y Colombia.

Así las cosas, los desafíos relacionados con la maternidad subrogada no son solamente jurídicos, sino también éticos, especialmente porque, de manera frecuente, la decisión de las madres subrogantes está ligada a situaciones de pobreza, vulnerabilidad y asimetría económica. La problemática recae, entonces, en que la gestación subrogada se está empleando con fines lucrativos y no con fines altruistas, y que la contractualización del embarazo en términos de mercado prioriza las relaciones asimétricas de poder normalizadas entre los padres comitentes, en su mayoría de entornos socioeconómicos privilegiados, y las gestantes, que pertenecen a las clases económicamente marginadas.

En ese orden de ideas, la gestación subrogada comercial plantea complejas cuestiones éticas, en particular con respecto a los principios de justicia y dignidad humana. Se puede considerar que, por el acto de pagar a una mujer para gestar, se convierte esta experiencia profundamente íntima y biológicamente única en una transacción de mercado. Esto, por tanto, plantea la cuestión de si las mujeres se utilizan como instrumentos, especialmente si su principal razón para alquilar su vientre se debe a circunstancias económicas. La cuestión ética, entonces, se agudiza cuando la gestante se encuentra en una posición de vulnerabilidad socioeconómica; en tales casos, el consentimiento puede estar sesgado. Puede parecer que a la madre gestante la compensación económica la empodera; pero, en realidad, esta compensación también puede enmascarar dinámicas coercitivas donde tiene pocas opciones.

Debates y propuestas de reglamentación

Desde la perspectiva de que las parejas en situación de infertilidad tienen otra posibilidad de formar una familia, puede parecer un acto loable alquilar su vientre; sin embargo, la realidad es diferente, ya que muchas de estas ofertas esconden un propósito principalmente lucrativo, al que solo pueden acceder las personas que

tienen suficientes recursos económicos para cubrir el costo de las intervenciones científicas y pagar la renta del vientre. En contraposición, solo suelen ofrecer su vientre en alquiler mujeres de escasos recursos (Díaz Fernández, 2015).

Frente a este tema, la doctrina tiene una marcada división; por una parte, se ha visto la gestación subrogada como un mecanismo positivo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas y, a partir de ello, se destaca la urgente necesidad de abordar el asunto para evitar que se centre solo en el lucro.

El legislador colombiano ha presentado varios proyectos de ley que regulan los mecanismos de reproducción humana asistida y gestación subrogada, sin obtener una aprobación satisfactoria, por tratarse de un tema muy sensible, tanto legal como moralmente, en el que deben intervenir todos los grupos sociales en una visión concertada para el logro de esta realidad, que actualmente puede parecer, para muchos, opuesta a la moral pública.

Entre las distintas iniciativas legislativas se puede hacer énfasis en el Proyecto de Ley 037 de 2009, el cual pretendía establecer los procedimientos que permitieran esta práctica a nivel nacional; no obstante, no surtió efectos por falta de trámite. Siete años después, el Proyecto de Ley 202 de 2016 retomó este tema, aunque, *contrario sensu*, se pretendía prohibir esta práctica al ser categorizada como trata de personas y explotación de la mujer con fines reproductivos. Pero esta iniciativa fue archivada por vencimiento de términos y, con ello, se esfumaron las oportunidades de legislar sobre el tema, debido a la falta de estudios y análisis rigurosos para poder cubrir este vacío normativo.

Cabe destacar que, de una forma u otra, se tiene que llenar ese vacío legal, ya que, a pesar de su carencia de regulación, en la práctica, este fenómeno se presenta y, aunque la jurisprudencia estableció un precedente, no es ninguna excusa para que el legislador no actúe. La necesidad de la legislación al respecto se debe a que el derecho se adecúe a las realidades y necesidades del mundo contemporáneo, sin dejar de lado la protección de derechos tradicionales como la familia, los derechos reproductivos y los derechos de los niños y la mujer gestante.

Finalmente, a pesar de tratarse de una cuestión que requiere claras reflexiones éticas y bioéticas, se debe plantear un cambio en el paradigma jurídico colombiano mediante la implementación de una normativa fundada en la sana crítica y, mediante la ayuda de otras disciplinas como la medicina y la psicología, ya sea prohibiendo o regulando esta práctica, donde se dé respuesta a cuestiones como: ¿Dónde queda el principio de identidad biológica? ¿Qué pasaría si, dentro del lapso de la gestación, fallece la madre contratante? ¿De prohibirlo, se afecta el derecho a la familia y la libertad de determinación sobre el cuerpo femenino?, entre otras.

El problema de la desigualdad y las vulnerabilidades de las mujeres pobres

Estos procedimientos tienen unos costos que varían de un país a otro, y su regulación legal también es distinta y desigual; por ejemplo, la subrogación y la donación de óvulos son ilegales en Alemania, donde solo se permiten técnicas de reproducción asistida (TRA) estándar con esperma donado, nunca óvulos (se realizan unos 110 000 ciclos al año), lo que ocasiona que muchas personas o parejas interesadas busquen en el extranjero cómo cumplir el sueño de tener un hijo biológico.

Usualmente son mujeres que atraviesan condiciones socioeconómicas adversas, a las que se reduce a una incubadora, a un envase, instrumentalizándolas, encontrándose el cuerpo humano fuera del comercio, menoscabando su dignidad, transformándola en un medio para alcanzar un fin, sin detenerse en su persona de manera íntegra. ¿Qué sucede entre la madre subrogante y el concebido durante los nueve meses de gestación? Se soslaya la conexión entre la madre subrogante y el nasciturus, a pesar de que existen teorías que sostienen que el embrión establece con la madre, en este caso subrogante, una comunicación bioquímica, inmunológica y genética. Resulta interesante la mención que hizo el Dr. Di Pietro en el Manual de Derecho Romano, en el que señala que "mientras el concebido esté en el vientre de

la madre, se lo considera no como una individualidad, sino como una parte de la mujer".

Por otra parte, la globalización de los servicios reproductivos ha propiciado el surgimiento de un mercado transnacional de gestación subrogada, en el que personas de países desarrollados y otros centros urbanos contratan a mujeres en situación económica precaria. Se estima que en 2023 el mercado transnacional de gestación subrogada movió alrededor de 17 000 millones de dólares y, por su expansión, se prevé que para 2032 este mercado alcance cifras cercanas a los 130 000 millones de dólares.

Cabe señalar que, si bien los contratos de gestación subrogada suelen presentarse como mutuamente beneficiosos para las partes, de manera subyacente sirven para reproducir desigualdades estructurales basadas en la clase social, el género y la geografía. Pues, en entornos donde la educación, la atención médica y las oportunidades laborales son limitadas, la gestación subrogada se convierte en uno de los pocos medios potenciales de supervivencia financiera para las madres gestantes. Así, Zurriaráin (2019) afirma que "la maternidad por subrogación o gestación de alquiler es, inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a su dignidad, al usar su cuerpo, y por tanto su persona, como un objeto negociable" (p. 1234).

En función de lo expuesto, la principal tensión ética en la gestación subrogada reside en el conflicto entre la protección contra la explotación y el respeto a la autonomía de la madre gestante. Si bien la preocupación por la mercantilización es legítima, es igualmente importante reconocer que las mujeres tienen capacidad moral y la capacidad de tomar decisiones racionales con respecto a sus cuerpos. Clasificar todos los contratos de gestación subrogada como actos necesariamente explotadores refuerza el paternalismo, socavando la capacidad de las mujeres para decidir libre y voluntariamente sobre sus cuerpos. El verdadero desafío ético no reside en prohibir la gestación subrogada, sino en garantizar las condiciones para que la decisión de ser gestante se pueda tomar libremente y con plena información, en virtud de la autodeterminación reproductiva como elemento de la dignidad humana.

Conflictos contra el derecho a la libertad y los derechos sexuales y reproductivos

Las personas que recurren a los métodos de reproducción asistida, como la gestación por sustitución, lo hacen desde el uso pleno de los derechos reproductivos que todo ciudadano tiene bajo el cobijo de un Estado que le garantiza ciertas libertades, derechos y obligaciones. En cierto modo, hablar de derechos reproductivos hoy en día supone una expresión más acabada de la dignidad humana, ya que se toma como un elemento significativo para el libre desarrollo de la personalidad de todo individuo; en otras palabras, ahora el bienestar de cada ciudadano es importante para el Estado y, por esa razón, posibilita las herramientas (materiales y formales) para que se perfilen conforme a un bienestar común.

La maternidad subrogada resulta ser un tema de especial problemática que produce respuestas diferentes sobre el derecho a la libertad y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a ser padres, entre otros, además de posiciones legislativas a nivel internacional divergentes, encontrándose Estados donde es una práctica legal, en otros prohibida y en otros condicionada a motivos altruistas. Sin embargo, en muchos casos, el vacío jurídico ha recaído sobre el ámbito civil y ha abierto la posibilidad de su práctica (Valero Heredia, 2019).

Debido a lo mencionado anteriormente respecto a que el vacío legal causa que recaiga sobre el ámbito civil, los contratos de gestación subrogada generan una paradoja al interior de la concepción liberal de la libertad. Por un lado, se afirma que la gestante ha aceptado gestar a favor de otro, fundada en su derecho a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo; sin embargo, si su decisión está influenciada por falta de alternativas económicas o desinformación, su voluntariedad, en realidad, se encuentra socavada. La verdadera libertad reproductiva implica que la decisión de utilizar la capacidad reproductiva o no sea libre de toda coerción o desinformación.

De esta manera, se tiene que la prestación de servicios reproductivos, como el de la gestación subrogada, genera una tensión entre la justicia reproductiva y la lógica del mercado. La justicia reproductiva, como tal, implica el derecho a un acceso equitativo a las oportunidades relacionadas con la reproducción, y la gestación subrogada, dentro de un sistema de mercado, suele relegar el bienestar de la madre gestante a un segundo plano, priorizando la eficiencia y la rentabilidad del procedimiento. El paradigma del alquiler suprime o ignora los aspectos afectivos y relacionales inherentes al embarazo, lo que trivializa el papel de la gestante subrogada, ignorando la existencia de un vínculo materno-fetal que influye en el estado psíquico materno e incluso en la situación del *nasciturus*, que en la etapa del crecimiento en el vientre puede presentar afectaciones por situaciones económicas desfavorables de la madre gestante (Roncallo *et al*., 2014, p. 16).

De lo anterior, tenemos que la ambigüedad ética de la gestación subrogada exige un enfoque pluralista y reflexivo en las democracias deliberativas. Dado que valores como la autonomía, la justicia, la solidaridad y la dignidad pueden entrar en conflicto en casos particulares de gestación subrogada, ningún régimen normativo o legal por sí solo puede articular todas las dimensiones relevantes. Por tanto, la regulación de la gestación subrogada debe estar encaminada a crear un marco normativo que equilibre los derechos reproductivos de los padres comitentes y las madres gestantes, que garantice la libertad de decisión de las madres gestantes y que, además, se asegure de que todo el proceso de gestación subrogada no sea contraproducente para el bebé por nacer. Este enfoque regulatorio será necesario para garantizar un marco normativo de la gestación subrogada en el cual se respeten los derechos reproductivos de los padres y las madres comitentes, pero, además, que con esta práctica no se reproduzca la desigualdad ni la injusticia ni se genere una explotación de las madres gestantes y su situación de pobreza.

Desde una perspectiva sociojurídica, la gestación subrogada en Colombia es un tema altamente complejo que escapa a la órbita del derecho. La complejidad de este fenómeno se agudiza debido a que el ordenamiento jurídico colombiano aún no tiene una regulación sobre la gestación subrogada, y la jurisprudencia no es la fuente de derecho idónea para abordar todas las dimensiones de las problemáticas asociadas a esta práctica reproductiva. Actualmente, este vacío regulatorio está propiciando la proliferación de acuerdos informales que generan explotación y mercantilización de las madres gestantes. En ese sentido, es necesaria una regulación no solamente por los derechos en pugna de los padres comitentes y las madres gestantes; también se debe considerar que este marco regulatorio se debe generar en pro de los derechos y el interés superior de los niños, cuya filiación, nacionalidad y derechos podrían verse afectados.

Asimismo, la desigualdad estructural preexistente en países con pobreza multidimensional, como Colombia, expone a un mayor riesgo de explotación a las madres gestantes. Por lo general, las mujeres de menor nivel socioeconómico, provenientes de zonas periurbanas o rurales marginadas, son las candidatas preferidas para los contratos de maternidad subrogada debido a su falta de oportunidades laborales, educativas y de salud. La regulación debe tener como objetivo detener la explotación, crear garantías exigibles para todas las personas involucradas y asegurar que el trabajo reproductivo no se visibilice ni se mercantilice de manera que refuerce las jerarquías existentes de género y clase.

De ahí que la maternidad subrogada ponga de relieve los desafíos legales y éticos más significativos en materia de TRA. A diferencia de otros tipos de relación contractual, el embarazo es un proceso biológico que no puede medirse en términos puramente económicos, ya que posee dimensiones físicas, emocionales y existenciales que trascienden los marcos típicos del comercio. Por tanto, cualquier regulación legal debe partir del reconocimiento de la especificidad del trabajo reproductivo y las cargas asociadas.

Hay que hacer hincapié en que la gestación subrogada no puede ser regulada únicamente por actores privados, clínicas o contratos. El Estado debe participar activamente en la definición de los límites legales de la práctica, en pro de la aplicación de estándares éticos y

la garantía de los derechos de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad. Esto incluye la creación de organismos de supervisión independientes, la certificación de los servicios de salud reproductiva y la realización de campañas de concienciación pública sobre las implicaciones de la gestación subrogada. Además, las instituciones públicas deben garantizar que el acceso a las tecnologías reproductivas, incluida la gestación subrogada, no sea un privilegio de los ricos, sino un elemento integral de una política de salud pública más amplia basada en los principios de igualdad e inclusión.

Una oportunidad y alternativa para parejas del mismo sexo

En la actualidad existen diferentes métodos de reproducción asistida; aun con esto, las parejas masculinas del mismo sexo están limitadas a la hora de querer acceder a alguna de estas, debido a la naturaleza de su ser. Pueden elegir entre la adopción o la maternidad subrogada, puesto que no pueden realizarse sobre sí mismos procedimientos como la inseminación artificial, la FIV, entre otros. La literatura ha utilizado el término *dysfertile* para referirse a parejas y hombres solteros que no pueden tener un hijo biológico sin la ayuda de un tercero (Molina-Ricaurte y Torres Buelvas, 2022). Solo el matrimonio entre dos personas da lugar a la procreación; pero, cuando existe la ausencia de esta, se debe a la incapacidad de uno de los cónyuges. Por el contrario, en el matrimonio homosexual, es su misma estructura la que resulta incompatible con la procreación, y es un matrimonio estructuralmente no procreativo (Carlos, 2013).

En España, la gestación subrogada es empleada por parejas heterosexuales entre un 80-85 %; en parejas homosexuales, entre un 15-20 %. Si bien esta práctica en la sociedad es aceptada y se ha convertido en una forma común de convertirse en padre o madre, genera incomodidad (Moreto, 2018). Debido a los estigmas, tabúes y críticas que la sociedad tiene sobre la homosexualidad, las parejas son más vulnerables en su integridad y, al querer acceder a procesos de reproducción asistida, están expuestas generalmente a la desaprobación tanto de las personas como de los prestadores de estos servicios o procedimientos. No obstante, la homoparentalidad se ha consagrado paulatinamente en los ordenamientos jurídicos de diversos países del mundo como una figura jurídica que vela por los derechos de todos los menores a tener una familia para desarrollarse en forma integral (Chaparro Piedrahíta y Guzmán Muñoz, 2017, p. 2).

Las parejas femeninas del mismo sexo, por el contrario, tienen más posibilidades de lograr ser madres, debido a que pueden, por sí mismas, utilizar su propio cuerpo mediante procesos como la inseminación artificial, fertilización *in vitro*, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que para el caso de los hombres estos procedimientos no son posibles. La maternidad subrogada se convierte, entonces, en uno de los limitados procesos a los cuales pueden acceder las parejas masculinas del mismo sexo, logrando con esto conformar una familia y, a su vez, se garantizan los derechos individuales de aquellos.

Un procedimiento lucrativo disfrazado de altruismo

Definir *altruismo* ha sido una labor ardua, bastante compleja hasta hoy en día. Se debe entender que no es posible hacerlo. Lo que sí es viable es dar aproximaciones, siempre y cuando se busque aplicar el término a otro tema, como se hará a la gestación subrogada; es decir, ¿qué relación guarda el altruismo con la gestación subrogada? Para ello, se entrará a detallar dos posturas sobre el término *altruismo*. En primer lugar, señala la Real Academia Española (RAE) que es la 'Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio' (Asociación de Academias de la Lengua Española, s. f.). Para los autores, si dicho precepto se aplicara en las relaciones contractuales de la gestación subrogada (concretamente para la mujer gestante), se evidenciaría una vulneración para la misma, ya que estaría sometida a todo aquello que las personas aspirantes a padres señalen, incluso en contra de su voluntad. Por ende, si se usara la definición de la RAE respecto del altruismo (aplicada a la gestación subrogada), resulta importante recoger únicamente el primer enunciado (diligencia en procurar el bien ajeno). Por su parte, Martínez (2003) señala que "podemos

definir 'altruismo' como el comportamiento que beneficia a otro organismo, no cercanamente relacionado, y que va en aparente detrimento del organismo que se comporta de manera altruista" (p. 29).

En los procesos de maternidad subrogada, los futuros padres requieren de una mujer que haga el papel de madre gestante; esta se encargará de llevar al bebé en su vientre los nueve meses hasta su nacimiento. Este proceso se realiza mediante un acuerdo previo en donde los futuros padres, con la madre gestante, estipulan unas condiciones en las cuales, generalmente, los padres se hacen cargo de todos los gastos sobre el cuidado de la madre durante el embarazo. Sumado a eso, la manutención no solo para ella, sino para los hijos que esta tenga o la familia, si es el caso; los padres son los encargados de proveer lo que requiera la madre durante todo ese lapso y hasta después del nacimiento del bebé.

Por todo ello, la maternidad por subrogación es, inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a su dignidad, al usar su cuerpo como un objeto negociable o incubadora humana para satisfacer deseos ajenos (Zurriaráin, 2019). Cuando, para la realización de este proceso, se requiere un acuerdo entre las dos partes y una cantidad monetaria de por medio, no estamos hablando de otra cosa más que de un negocio, el cual se tiende a negar o disfrazar de altruismo en muchos lugares del mundo debido a que su práctica no está del todo regulada o está totalmente prohibida la subrogación o alquiler de vientres, como en realidad se ve y se llama.

Por otro lado, no existe un derecho a la procreación, un derecho al hijo que justifique un pretendido derecho individual a la maternidad subrogada (Zurriaráin, 2019). En el "acuerdo" que se realiza entre las dos partes, no solo se estipula el precio de los cuidados y manutención de la madre durante el embarazo, sino también una suma muy alta de dinero por la "ayuda" que prestó esta mujer para que fuera posible la realización del proceso. Por todo ello, en la gestación de alquiler el bebé es tratado como un objeto de compraventa y, en muchos contratos, se establece que la madre subrogada deberá devolver el dinero si no logra dar a luz o el bebé no tiene las condiciones de salud establecidas (Zurriaráin, 2019). Por otro lado, la criatura queda en una posición muy vulnerable en la maternidad subrogada, dado que su situación depende de las cláusulas establecidas en dicho contrato, lo cual no asegura la protección de sus derechos (Zurriaráin, 2019). En Colombia, para el año 2023, esta remuneración oscila entre los 10 000 y 12 000 dólares, lo que resulta muy atractivo para los extranjeros; por ejemplo, en el Estado de Nevada, EE. UU., el precio de la subrogación varía de 110 000 a 170 000 dólares (Garcés Garcés y Gaona García, 2024). Este proceso suele estar muy bien pagado o "compensado", debido a las posibles consecuencias físicas y psicológicas que podría tener la sustituta; por tanto, es una forma de "automercantilización" (Aznar y Tudela, 2019). Los niños son sujetos de derechos; por tanto, no debieran ser concebidos para satisfacer las necesidades reproductivas de los padres, llevando a una banalización de la paternidad y, por consiguiente, no son propiedad de ninguno (Garaycochea Cannon, 2023).

Conclusión

La gestación subrogada en Colombia expone una interacción bastante compleja y profundamente preocupante entre cuestiones de autonomía reproductiva, desigualdad económica y falta de regulación legal. La actual ausencia normativa ha permitido la evolución de un mercado donde las capacidades reproductivas de las mujeres se comercializan. En estos contextos, la gestación subrogada no puede verse simplemente como una acción neutral; más bien, es una actividad enmarcada por relaciones asimétricas de poder y por la mercantilización del cuerpo de madres gestantes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.

Los hallazgos demuestran que la gestación subrogada, en lugar de ser una expresión de libertad individual, en Colombia suele presentarse como una transacción condicionada por las carencias socioeconómicas de las madres gestantes. Así, la vulnerabilidad económica coloca a las mujeres, en su mayoría provenientes de regiones y poblaciones marginadas, en posiciones estructuralmente desventajosas, donde el consentimiento no es una auténtica expresión de autonomía, sino una de coerción socioeconómica.

En términos legales, la ausencia de un marco normativo ha creado una brecha crítica en la protección de los derechos. Si bien la tradición constitucional colombiana garantiza la dignidad humana, la igualdad y la protección de las personas vulnerables, estos principios tienen un alcance principalmente declarativo en materia de gestación subrogada, ya que no pueden abarcar la gran cantidad de problemáticas asociadas a este fenómeno. Por ende, la falta de regulación legal ha generado inseguridad jurídica para las madres gestantes, los padres comitentes e incluso los neonatos producto de la gestación subrogada.

Por otro lado, desde un punto de vista ético, la gestación subrogada también plantea desafíos complejos. En concreto, existe una crítica a la gestación subrogada, pues se da como una especie de "servidumbre reproductiva" que es contraproducente para las mujeres más vulnerables. Así las cosas, los usos de los cuerpos femeninos como instrumentos gestacionales con fines de lucro no solo refuerzan el control patriarcal sobre la reproducción, sino que también generan una violencia estructural preexistente.

En suma, esto nos lleva a concluir que, actualmente, la gestación subrogada en Colombia, desarrollada bajo ausencia regulatoria, inevitablemente exacerba las desigualdades existentes y pone en riesgo de vulneración de derechos fundamentales a las madres gestantes, ya que las tecnologías biomédicas, sin regulación normativa ni garantías institucionales, inevitablemente exacerban las desigualdades existentes y las violaciones de derechos fundamentales. La gestación subrogada comercial expone problemas más amplios relacionados con la mercantilización de la vida, la erosión de las protecciones legales dentro de los regímenes contractuales privados y las contradicciones morales del sistema en cuanto a la explotación reproductiva que se permite en virtud de una supuesta libertad de elección. Mientras estas lagunas legales prevalezcan, en el desarrollo de la gestación subrogada seguirán ocurriendo situaciones que afectan la dignidad humana de las madres gestantes.

Dadas las tensiones legales, éticas y socioeconómicas planteadas en este estudio, es crucial que el Estado colombiano establezca un marco regulatorio que se ajuste directamente a las realidades de la gestación subrogada que se da en el país. Esta regulación no debe limitarse a la formalidad y garantizar los contratos entre las partes, sino que también debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales, asegurando que todas las partes involucradas asuman obligaciones contractuales, especialmente a favor de las mujeres gestantes y los niños nacidos mediante esta práctica. Un enfoque basado en los derechos debe establecer mecanismos legales idóneos que articulen el consentimiento informado; la prohibición de cláusulas coercitivas o explotadoras, y la atención médica integral, el apoyo psicológico y la representación legal. De lo contrario, su ausencia mantendrá un limbo legal en el que se producen abusos contra las personas más vulnerables y bienintencionadas.

En este caso, las políticas públicas deben elaborarse con el concepto de multidimensionalidad, en el contexto de los diversos determinantes estructurales que afectan la decisión de una mujer de convertirse en gestante subrogada. Enmarcar la gestación subrogada como una cuestión puramente de voluntad privada o de mercado no toma en cuenta adecuadamente la profunda pobreza, la exclusión social y la desigualdad de género que motivan estos contratos. Por tanto, cualquier regulación debe ir acompañada de estrategias más amplias, destinadas a reducir la feminización de la pobreza, así como a ampliar los derechos reproductivos y las alternativas económicas para las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Referencias

Álvarez, C. y Castrellón, L. (2023, abril 8). *Colombia: Prolifera el negocio de los vientres de alquiler mientras buscan ley para regularlo*. Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/colombia-vientres-de-alquiler-/7032004.html

Aparisi Miralles, A., Castilla de Cortázar, B. y Miranda, M. (2017). *Los discursos sobre el género: Algunas influencias en el ordenamiento jurídico español*. Tirant lo Blanch.

Arteta Acosta, C. (2011). Maternidad subrogada. *Revista Ciencias Biomédicas*, *2*(1), 91-97. https://doi.org/10.32997/rcb-2011-3397

Asociación de Academias de la Lengua Española. (s. f.). Altruismo. En *Diccionario de la lengua española* (Tricentenario). Recuperado el 9 de diciembre de 2025, de https://dle.rae.es/altruismo

Aznar, J. y Tudela, J. (2019). Subrogación gestacional. Aspectos éticos. *Medicina y ética*, *30*(3), 745-787. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2594-21662019000300745&lng=es

Beetar Bechara, B. (2019). La maternidad subrogada en Colombia: Hacia un marco jurídico integral e incluyente. *Estudios Socio-Jurídicos*, *21*(2), 135-166. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.6869

Carlos, A. (2013). La filiación, entre biología y derecho. *Prudentia Iuris*, *76*, 117-133. https://corteidh.or.cr/tablas/r32808.pdf

Cervino, F., Calderón, G., Vargas, M. y Ortega, N. (2019). *Maternidad subrogada* [Trabajo de investigación, Universidad de Navarra]. https://www.unav.edu/documents/4889803/23506220/45_Fuenllana_Maternidad+subrogada.pdf

Chaparro Piedrahíta, L. J. y Guzmán Muñoz, Y. M. (2017). Adopción homoparental: Estudio de derecho comparado a partir de las perspectivas de los países latinoamericanos que la han aprobado. *Revista CES Derecho*, *8*(2), 267-297. https://doi.org/10.21615/cesder.8.2.4

Díaz Fernández, E. (2015). Gestación por sustitución o maternidad subrogada. *Revista In Iure*, *5*(2), 64-78. https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/article/view/15

Gamboa-Bernal, G. A. (2023). Maternidad subrogada a debate. *Persona y Bioética*, *27*(1), 1-14. https://doi.org/10.5294/pebi.2023.27.1.1

Garaycochea Cannon, V. A. (2023). Gestación subrogada, ¿estamos preparados en Perú? Una reflexión desde la ética. *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia*, *69*(2). https://doi.org/10.31403/rpgo.v69i2518

Garcés Garcés, H. y Gaona García, D. C. (2024). Aspectos de la eficacia del contrato de maternidad subrogada respecto de las obligaciones de la madre sustituta durante el periodo de gestación. *Revista de Bioética y Derecho*, *61*, 173-194. https://doi.org/10.1344/rbd2024.61.44217

Leonsegui Guillot, R. A. (1994). La maternidad portadora, sustituta, subrogada o de encargo. *Boletín de la Facultad de Derecho*, *7*, 317-338. https://e-spacio.uned.es/bitstreams/262e1a29-8a60-4388-8837-2ca9a79f3ef5/download

Martínez, M. (2003). La evolución del altruismo. *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, *4*(9), 27-42. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41400902

Mohapatra, S. (2012). Achieving Reproductive Justice in the International Surrogacy Market. *Annals Health L.*, *21*(1), 191-200. https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=annals

Molina-Ricaurte, C. J. y Torres Buelvas, J. E. (2022). Male same-sex couples and surrogate motherhood: At a crossroads. *Ius et Praxis*, *28*(3), 155-170. https://doi.org/10.4067/S0718-00122022000300155

Montes Guevara, G. E. (2004). Bioética y técnicas de reproducción asistida. *Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social*, *12*(1), 71-78. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-12592004000100008&lng=en&tlng=es.

Morero Beltrán, A. M. (2018). Características de las familias creadas por gestación subrogada en el Estado español. *Papeles del CEIC*, *2018*(2), preprint 199. https://doi.org/10.1387/pceic.18966

Muñoz, A. R. (2023, junio 29). En Colombia el valor de la subrogación uterina oscila entre 17 a 19 millones en 2023. *Asuntos Legales*. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-colombia-el-valor-de-la-subrogacion-uterina-oscila-entre-17-a-19-millones-en-2023-3648153

Reyes Barrera, L. S. y Arregoces Bello, D. C. (2025). *La maternidad subrogada: Desafíos éticos y legales en la búsqueda de soluciones en Colombia* [Tesis de pregrado, Universidad del Rosario]. Repositorio Institucional E-docUR. https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/43115

Rojas, J. C. (2017). 17 septiembre). En Colombia se alquilan vientres desde $ 5 millones. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/salud/como-funciona-el-alquiler-de-vientres-en-colombia-131472

Roncallo, C. P., Sánchez de Miguel, M. y Arranz, E. (2014). Vínculo materno-fetal. Implicaciones en el desarrollo psicológico y propuesta de intervención en Atención Temprana. *Escritos de Psicología*, *8*(2), 14-23. https://doi.org/10.5231/psy.writ.2015.0706

Sentencia T-968 de 2009. (2009). Corte Constitucional de Colombia. (María Victoria Calle Correa, M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-968-09.htm

Valero Heredia, A. (2019). La maternidad subrogada: Un asunto de derechos fundamentales. *Teoría y Realidad Constitucional*, *43*, 421-440. https://doi.org/10.5944/trc.43.2019.24433

Zurriaráin, R. G. (2019). La maternidad subrogada: ¿"solidaridad" o "explotación"? *Medicina y Ética*, *30*(4), 1231-1253. https://doi.org/10.36105/mye.2019v30n4.02

UNIMETA
Fundada en 1985

Propiedad, posesión y tenencia de tierras para extranjeros: perspectivas para la reflexión

Jairo Alberto Merlo Pinzón*
Jorge Gustavo Munévar Mora**

* Doctor en Filosofía Universidad Autónoma de Barcelona; jefe del Centro de Investigaciones Sociojurídicas Jorge Eliécer Gaitán de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
jairomerlopinzon@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1957-3218

** Doctor en Humanidades, Humanismo y Persona; docente-Investigador de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA.
jgmunevar@yahoo.es
https://orcid.org/0009-0004-1837-4227

Resumen

Este artículo de reflexión aborda la compleja situación de la propiedad, posesión y tenencia de tierras en Colombia, con especial énfasis en la regulación de la tenencia de tierras por parte de extranjeros en la frontera agrícola. En esta área se manifiestan tensiones socioeconómicas y ambientales que ofrecen tanto oportunidades como desafíos significativos. La concentración de tierras en pocas manos ha generado una creciente desigualdad y ha perpetuado la pobreza en las comunidades rurales, donde muchos campesinos ocupan tierras de manera informal y carecen de títulos legales, lo que los hace particularmente vulnerables a desalojos. La violencia y el desplazamiento forzado han contribuido a agravar esta problemática, debilitando la cohesión social y la estabilidad comunitaria. A pesar de los esfuerzos del gobierno para formalizar la propiedad y restituir tierras a las víctimas del conflicto armado, la corrupción y la resistencia de quienes se benefician del sistema actual han limitado estos esfuerzos. Para lograr un futuro más equitativo y sostenible, es esencial implementar políticas públicas y reformas agrarias que garanticen una distribución justa de la tierra y refuercen la soberanía alimentaria en el país.

Palabras clave: propiedad, posesión, tenencia, justicia, soberanía.

> En Colombia, los debates sobre la tierra reflejan desigualdad y conflicto, y requieren un acceso equitativo y formalización para lograr paz, justicia social y desarrollo sostenible.

Abstract

This reflection article addresses the complex situation of land ownership, possession, and tenure in Colombia, with special emphasis on the regulation of land tenure by foreigners in the agricultural frontier. In this area, socioeconomic and environmental tensions offer both opportunities and significant challenges. The concentration of land in a few hands has generated growing inequality and has perpetuated poverty in rural communities, where many peasants occupy land informally and lack legal titles, making them particularly vulnerable to eviction. Violence and forced displacement have contributed to aggravating this problem, weakening social cohesion and community stability. Despite government efforts to formalize property and restore land to victims of the armed conflict, corruption and resistance from those who benefit from the current system have limited these efforts. To achieve a more fair and sustainable future, it is essential to implement public policies and agrarian reforms that guarantee a fair distribution of land and reinforce food sovereignty in the country.

Keywords: property, possession, tenure, justice, sovereignty.

Introducción

La propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra en Colombia, especialmente en las zonas que conforman la frontera agrícola, constituyen un eje central dentro de la realidad social, económica y ambiental del país. La frontera agrícola se entiende como el límite donde la agricultura se expande hacia territorios antes no cultivados, y su dinámica está atravesada por múltiples tensiones y posibilidades (Resolución 000261, 2018). Este proceso responde tanto a la necesidad de nuevas áreas para la producción como a las disputas históricas por el acceso a la tierra, recurso indispensable para la vida de muchas comunidades campesinas.

La concentración de la tierra ha sido un rasgo constante en la historia colombiana (Lara, 2023; Sarmiento, 2018). El modelo vigente ha favorecido a grandes terratenientes, dejando a la mayoría de los campesinos y familias rurales con poco o ningún acceso a tierras propias. Este patrón ha alimentado profundas desigualdades, obligando a pequeños agricultores a vivir bajo condiciones precarias y sin garantías laborales estables. En consecuencia, la lucha por la tenencia y el reconocimiento de la tierra se mantiene viva, sobre todo en aquellas áreas en expansión agrícola donde la exclusión es más evidente.

El acceso informal a tierras en la frontera agrícola es una problemática recurrente (Cortés Ramírez, 2021). Gran parte de los campesinos ocupa predios sin contar con títulos que respalden su derecho de permanencia (Villegas del Castillo, 2021). Esta ausencia de seguridad jurídica los deja en una situación frágil, pues pueden ser desalojados por quienes sí cuentan con registros formales o por intereses empresariales que buscan desarrollar proyectos agrícolas o extractivos. La falta de reconocimiento legal no solo limita las posibilidades de desarrollo rural, sino que también desestabiliza la vida comunitaria y la seguridad alimentaria de las familias[1].

Otros factores agravan esta situación. El conflicto armado interno ha generado desplazamientos masivos y despojo de tierras, favoreciendo que grandes extensiones pasen a manos de élites o actores armados. La violencia y el despojo han dejado a miles de familias en extrema vulnerabilidad. A su vez, la expansión de la frontera agrícola está asociada con la deforestación y la degradación ambiental (Suescún Barón *et al*., 2023). La búsqueda de mayor producción agrícola suele implicar la explotación intensiva de los recursos naturales, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Frente a ello, el Estado colombiano ha promovido políticas para formalizar la propiedad rural y devolver tierras a las víctimas del conflicto (Agencia Nacional de Tierras, 2023). No obstante, la eficacia de estas iniciativas se ve limitada por problemas como la corrupción, la falta de recursos o la oposición de sectores que mantienen privilegios en el sistema agrario. Las reformas agrarias, históricamente, han sido parciales y de corto alcance, lo que ha impedido revertir la desigualdad estructural.

La informalidad en la tenencia de la tierra repercute directamente en la economía. Los campesinos sin títulos carecen de acceso a créditos, financiamiento o apoyos institucionales, lo cual restringe su capacidad para invertir y mejorar su calidad de vida. Esto perpetúa un ciclo de pobreza intergeneracional y margina a las comunidades rurales. La presión aumenta con la llegada de empresas multinacionales interesadas en expandir proyectos sobre territorios ocupados ancestralmente por comunidades campesinas, generando conflictos agrarios que enfrentan la lógica del mercado con la defensa de los territorios como espacios de vida.

La trayectoria de la tenencia de tierras en Colombia está marcada por una herencia de desigualdad y violencia. Desde la colonia, los factores políticos y económicos han consolidado un patrón que favorece a las élites terratenientes y margina a los sectores populares. La lucha por la tierra, más allá de un reclamo económico, es un clamor por dignidad, justicia social y preservación cultural. Para las comunidades rurales, acceder

1 La tierra ha sido históricamente comprendida como lugar de dominación y explotación; sin embargo, ella es una condición esencial para la existencia. Es precisamente en esta espacialidad donde toda vida, en especial la vida humana, agencia los posibilitadores [*potestas*] para la producción y reproducción de la demanda vital [*potentia*]. (Merlo, 2019).

a la tierra significa asegurar medios de subsistencia, defender sus tradiciones y proyectar un futuro más justo. En este sentido, la formalización de la propiedad y los procesos de restitución no son simples trámites administrativos, sino pasos esenciales hacia la construcción de un país más equitativo en el que la tierra se reconozca como un bien común y un derecho fundamental para la vida.

De la tenencia

La cuestión de la tenencia de la tierra en Colombia resulta central dentro del complejo panorama social, político y económico del país. Este concepto no se limita a la propiedad formal, sino que abarca los distintos modos de posesión, uso y aprovechamiento de los terrenos, configurados históricamente por conflictos agrarios, desplazamientos forzados y reclamos de justicia social. Su regulación se enmarca en la Constitución Política de 1991, el Código Civil y un conjunto de normas específicas que buscan ordenar el acceso y garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.

La Constitución de 1991, en su artículo 58, reconoce la propiedad privada, pero también resalta que esta debe cumplir una función social. Con ello, se establece que, aunque el derecho a la propiedad es fundamental, está condicionado por obligaciones que garantizan el bienestar colectivo. Esta visión implica que el uso de la tierra[2] no puede concebirse solo como un privilegio individual, sino como un medio que debe contribuir al desarrollo sostenible y a la calidad de vida de las comunidades, equilibrando los intereses particulares con las necesidades comunes.

Dentro de este marco, un aspecto clave ha sido el reconocimiento de los derechos de comunidades étnicas y campesinas. La Ley 70 de 1993, por ejemplo, otorgó a las comunidades afrocolombianas la posibilidad de acceder a la propiedad colectiva de sus territorios, protegiendo sus formas tradicionales de manejo de la tierra, que habían sido históricamente desconocidas. A través de esta norma, se establecieron mecanismos de titulación que fortalecen la identidad cultural y aseguran la preservación de modos de vida ligados al territorio.

A su vez, la Ley 160 de 1994 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, con el propósito de redistribuir tierras y facilitar el acceso a campesinos sin tierra o con parcelas insuficientes. La norma prevé procedimientos de adjudicación, así como derechos y obligaciones para quienes resulten beneficiarios. No obstante, la implementación de esta política ha enfrentado serios tropiezos, entre ellos la corrupción, la falta de apoyo institucional y la violencia, que han limitado su efectividad real en el campo.

Existen, además, situaciones específicas que muestran la complejidad del problema. Un caso paradigmático es el de la restitución de tierras para víctimas del conflicto armado, establecido en la Ley 1448 de 2011. Aunque la norma creó un marco para devolver predios arrebatados por la violencia, su ejecución ha sido lenta y llena de dificultades, entre ellas la presencia de grupos armados, la resistencia de sectores beneficiados por el despojo y la falta de garantías suficientes para quienes reclaman sus derechos.

En esta misma línea, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-025 de 2004, señaló la responsabilidad del Estado al no proteger adecuadamente a las comunidades desplazadas, lo que convirtió esta decisión en un referente para las luchas de los pueblos indígenas y campesinos por el reconocimiento de sus territorios. Sin embargo, los retos en la materialización de estas decisiones siguen siendo considerables.

Pese a los avances legislativos, la tenencia de la tierra continúa siendo fuente de conflictos. Persisten problemas como la concentración de la propiedad en pocas manos, la informalidad en los títulos y la débil capacidad del

2 El artículo 64 de la Constitución dispone que el Estado debe promover el acceso progresivo de los trabajadores del campo a la propiedad de la tierra. A su vez, el artículo 65 garantiza una protección especial a la producción de alimentos como parte esencial de la seguridad nacional. En esa misma línea, la Ley 1753 de 2015, orientada a la transformación del sector rural, busca organizar el territorio campesino y facilitar que las comunidades rurales accedan de manera más justa a la tierra.

sistema judicial para garantizar derechos. A esto se suma que muchos proyectos de desarrollo y de explotación de recursos naturales chocan con los derechos territoriales de comunidades locales, generando nuevas tensiones e, incluso, desplazamientos forzados.

El contexto contemporáneo agrega otro desafío: el cambio climático. La manera en que se distribuye y utiliza la tierra incide directamente en la seguridad alimentaria y en la preservación de los ecosistemas. Por ello, las políticas públicas deben no solo abordar la desigualdad en la tenencia, sino también promover formas de uso sostenibles que garanticen tanto la equidad social como la conservación de la biodiversidad. Solo de esta manera será posible construir un equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y protección ambiental.

De la propiedad

La posesión constituye uno de los fundamentos esenciales del derecho civil colombiano, estrechamente ligada tanto a la propiedad como al uso de los bienes. Su regulación está recogida en el Código Civil, que establece las normas y principios aplicables a su adquisición, conservación y transmisión. A su vez, la Constitución Política de 1991 refuerza el derecho de propiedad, lo que, a su vez, respalda el derecho a la posesión como expresión concreta de ese vínculo con los bienes.

En términos jurídicos, la posesión se entiende como la tenencia de un bien, acompañada de la intención de comportarse como propietario. No se limita, por tanto, al hecho material de tener la cosa bajo control, sino que también implica el propósito de ejercer derechos sobre ella. El Código Civil diferencia entre posesión válida e inválida, y entre posesión de buena fe y de mala fe. La primera corresponde a quien cree legítimamente tener derecho a poseer, mientras que la segunda caracteriza al poseedor que actúa sabiendo que contraviene los derechos de otro.

La protección de la posesión es un eje central del sistema jurídico colombiano. El Código Civil consagra acciones como la reivindicatoria y las de protección posesoria, que permiten al poseedor defenderse frente a perturbaciones o despojos ilegítimos. La jurisprudencia refuerza esta idea al precisar que, aunque la posesión no equivale a propiedad, sí otorga derechos que merecen amparo. Este reconocimiento contribuye a la seguridad jurídica del país, garantizando que quienes ejercen la posesión puedan hacerlo de manera efectiva y estable.

Un aspecto clave es la relación entre *posesión* y *propiedad*. La posesión puede transformarse en propiedad a través de la usucapión o prescripción adquisitiva, que concede el dominio a quien posea durante cierto tiempo, bajo condiciones de buena fe y continuidad. De este modo, se busca dar estabilidad a las relaciones patrimoniales, regularizando situaciones de hecho que persisten en el tiempo.

La jurisprudencia ha desarrollado importantes precedentes en esta materia. Por ejemplo, en el caso de tierras en zonas de conflicto armado, muchas comunidades han ejercido posesión sobre predios disputados por actores armados o empresas. La Corte Constitucional ha señalado la necesidad de proteger a estos poseedores, resaltando la importancia de la posesión en contextos de vulnerabilidad. De manera similar, en áreas urbanas se han presentado casos de ocupaciones de bienes inmuebles abandonados, en los que los jueces deben ponderar el derecho a la propiedad privada frente al derecho a una vivienda digna, evidenciando tensiones sociales de gran alcance.

La Constitución de 1991, en su artículo 58, establece que la propiedad privada está garantizada, pero no es un derecho absoluto. Debe ejercerse con límites, atendiendo a su función social y al respeto por los derechos de los demás. Esto abre la posibilidad de interpretar la posesión no solo desde un plano individual, sino también como una práctica con relevancia social, vinculada al bienestar colectivo. En este sentido, la Corte y el legislador han favorecido a los poseedores de buena fe en casos de despojo, especialmente en procesos de restitución de tierras, lo que ha servido para avanzar hacia mayor equidad y justicia social.

El derecho de propiedad, por su parte, está igualmente consagrado en la Constitución y en el Código Civil. Se entiende como el poder que tiene una persona sobre una cosa, que le permite usarla, disfrutarla y disponer de ella, dentro de los límites que la ley impone. El Código Civil regula este derecho en los artículos 669 y siguientes, distinguiendo entre propiedad plena, limitada y copropiedad, y define las formas de adquisición, como la compra, la herencia, la donación, la ocupación o la prescripción.

En el ámbito práctico, la jurisprudencia ha generado un amplio cuerpo de decisiones que ilustran la importancia de la propiedad. Un caso destacado es el de la restitución de tierras, regulada por la Ley 1448 de 2011, que busca devolver predios a víctimas del conflicto armado. También se encuentra la regulación de la propiedad horizontal, contemplada en la Ley 675 de 2001, aplicable a edificios y conjuntos residenciales con áreas comunes, donde los jueces han debido resolver disputas sobre administración y uso. En el campo rural, la Ley 160 de 1994 introdujo medidas para redistribuir tierras y enfrentar la concentración, aunque con resultados limitados debido a los problemas estructurales del campo colombiano.

Un punto fundamental es que tanto la propiedad como la posesión no son derechos absolutos. La Constitución establece la función social de la propiedad, recordando que su ejercicio no puede lesionar los intereses de la colectividad. En este marco, la expropiación es posible por motivos de utilidad pública o interés social, siempre con indemnización, lo que refleja un equilibrio entre derechos individuales y las necesidades del conjunto social.

En conclusión, la regulación de la posesión y la propiedad en Colombia refleja una tensión permanente entre derechos individuales y exigencias colectivas. Mientras la posesión otorga herramientas para proteger a quienes detentan de hecho un bien, la propiedad asegura estabilidad y reconocimiento jurídico. Ambos conceptos, enraizados en el Código Civil y reforzados por la Constitución, se convierten en pilares esenciales para comprender las dinámicas sociales, económicas y políticas de un país atravesado por desigualdades históricas, conflictos y la búsqueda de justicia social.

Fundamentos constitucionales sobre la tenencia de tierras para extranjeros

La Constitución Política de Colombia de 1991 ofrece un marco normativo amplio que regula la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, con especial énfasis en lo relacionado con la frontera agrícola. Dicho marco no solo protege los derechos de los ciudadanos, sino que también busca garantizar el bienestar colectivo y la igualdad en el acceso a este recurso, aspectos fundamentales para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible. La importancia de esta regulación se ha intensificado en los últimos años, en la medida en que los debates sobre la tenencia de tierras y la creciente participación de capital extranjero en el sector agrícola han cobrado una gran relevancia nacional.

El artículo 2 de la Constitución establece que el Estado está llamado a garantizar la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto significa que las normas relacionadas con la propiedad y tenencia de tierras deben orientarse al bienestar general, lo que incluye asegurar los derechos de los campesinos y proteger la soberanía alimentaria. De acuerdo con datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Plata, 2024), la concentración de tierras en manos extranjeras genera riesgos para la producción agrícola nacional, comprometiendo directamente la seguridad alimentaria. Este panorama se agrava frente al incremento global de la demanda de alimentos, lo que evidencia la necesidad de políticas que prioricen la producción local y aseguren un uso sostenible[3] de los recursos naturales[4].

3 La sostenibilidad en el ámbito productivo puede expresarse de distintas maneras. Entre ellas se encuentran el uso responsable y equilibrado de la tierra, la diversificación de cultivos, la práctica de sistemas agroforestales, el control integrado de plagas, la elección de variedades agrícolas adecuadas, el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina, la promoción de dietas más sostenibles, la protección de la biodiversidad y el apoyo a la pesca artesanal, entre otras estrategias.

4 Hoy en día, en el país se debaten varios proyectos de ley que buscan dar respuesta a una pregunta clave: ¿de qué manera un nuevo marco jurídico

Por su parte, el artículo 58 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, pero señala que este derecho debe cumplir una función social y ecológica. Esto implica que la tierra no puede concebirse únicamente como un bien privado, sino como un recurso que debe contribuir al bienestar colectivo. En este sentido, el control sobre la adquisición de tierras en zonas de frontera agrícola por parte de inversionistas extranjeros resulta indispensable, con el fin de evitar que se convierta en un obstáculo para el desarrollo rural y la equidad. Como lo señalan Rincón-Zapata *et al*. (2021), una regulación adecuada contribuye a una distribución más justa de la tierra, fortaleciendo la cohesión social y la estabilidad económica en los territorios rurales.

De igual manera, el artículo 100 impone al Estado la responsabilidad de promover un uso adecuado de la tierra y velar por la protección del medioambiente, un tema de especial importancia en la frontera agrícola. La ampliación descontrolada de esta frontera suele generar impactos como la deforestación y la degradación de los ecosistemas, con consecuencias directas sobre la calidad de vida de las comunidades. En este sentido, regular la propiedad y la tenencia de tierras en manos extranjeras constituye una estrategia para asegurar que las prácticas agrícolas se desarrollen de forma sostenible y respetuosa con el entorno. Como advierte Pérez Vásquez (2020), la regulación de la propiedad está directamente ligada a la preservación ambiental, pues prácticas irresponsables pueden ocasionar daños irreversibles que afectan tanto la biodiversidad como a las comunidades que dependen de estos recursos para subsistir.

El artículo 332 confiere al Estado la facultad de intervenir en la regulación de la propiedad con el propósito de garantizar su uso eficiente y equitativo. Los artículos 333 y 334 refuerzan este mandato al destacar que la propiedad debe cumplir una función social y que la intervención estatal es necesaria para asegurar el bienestar general. Esta intervención cobra especial relevancia en un país donde la tierra ha estado históricamente concentrada en manos de unos pocos y donde persisten profundas desigualdades. Acosta Medina (2013) señala que es indispensable que el Estado ejerza un control efectivo que impida que la tierra se convierta en un instrumento de exclusión social, sobre todo en un contexto en el que las tensiones por el acceso a los recursos naturales se han intensificado.

En conjunto, los artículos de la Constitución de 1991 ofrecen al Estado un marco jurídico sólido para regular la propiedad, la posesión y la tenencia de la tierra, subrayando la necesidad de limitar la concentración de tierras en manos extranjeras. La defensa de la soberanía alimentaria, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la protección ambiental se consolidan como principios orientadores de estas disposiciones. En el actual contexto de globalización y cambio climático, avanzar en la limitación de la propiedad extranjera en la frontera agrícola no solo resulta urgente, sino que también constituye un paso necesario para equilibrar intereses económicos y garantizar un acceso más justo a la tierra. La vigencia de estas disposiciones abre una oportunidad para construir un futuro más equitativo y ambientalmente sostenible en Colombia.

Excursus

En Colombia, los informes del Observatorio de Desplazamiento Interno ofrecen cifras que reflejan de manera clara los impactos del conflicto armado y del

puede impulsar a Colombia a consolidarse como la "despensa de alimentos" del mundo y, al mismo tiempo, fortalecer la productividad en las zonas rurales? Entre las propuestas presentadas, una de las más relevantes pone el acento en la necesidad de establecer límites claros frente a la propiedad, posesión y uso de tierras rurales por parte de extranjeros, ya sean personas naturales o empresas. La intención es salvaguardar la soberanía alimentaria y garantizar que el acceso a la tierra sea más equitativo para la población local. Dentro de estas iniciativas se destaca la restricción que impediría a los extranjeros acumular más del 15 % del suelo rural dentro de la frontera agrícola de cada municipio. Esta medida busca frenar la concentración de tierras en manos foráneas y proteger los derechos de campesinos y comunidades. De igual modo, se plantea que la extensión de tierra que un extranjero pueda adquirir no supere una Unidad Agrícola Familiar (UAF), promoviendo así un modelo de producción agrícola sostenible y menos dependiente de intereses externos. Otro aspecto importante es la prohibición de adquirir terrenos por fuera de la frontera agrícola o en suelos con vocación agropecuaria de las categorías I, II y III, así como en áreas consideradas estratégicas para el país. Esto refleja una preocupación por la preservación de los recursos naturales y por asegurar que el uso del suelo esté orientado al beneficio colectivo.

confinamiento forzado[5] sobre una población mayoritariamente rural, marcada por la precariedad, la vulnerabilidad y el abandono estatal. Según este organismo, al 31 de diciembre de 2023, había en el país 5 077 150 personas en condición de desplazamiento interno. De manera paralela, el Registro Único de Víctimas reportaba, para la misma fecha, un total de 8 578 124 personas reconocidas oficialmente como víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2024a, 2024b).

A su vez, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que, entre enero y diciembre de 2023, al menos 250 000 personas se vieron afectadas por acciones de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Estas dinámicas generaron 204 emergencias humanitarias, que incluyeron desplazamientos masivos (63 249 personas), desplazamientos individuales (100 005) y confinamientos (88 007). Aunque estas cifras son alarmantes, representan una disminución del 17 % respecto al año anterior, reducción atribuida a los acuerdos de cese al fuego alcanzados por el gobierno (OCHA, 2024). Sin embargo, la propia OCHA advierte que persiste la disputa territorial entre actores armados ilegales, que buscan imponer control social y mantener confinadas a comunidades enteras.

Las regiones más golpeadas por este fenómeno son la del Pacífico y los departamentos de Bolívar, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Arauca. Esta presencia armada responde a la necesidad de garantizar corredores estratégicos de movilidad y asegurar rentas derivadas de economías ilegales, como el narcotráfico, la minería, la extorsión y el reclutamiento de menores. El avance territorial de estos grupos se acompaña de procesos de abandono[6] y despojo de tierras[7]. En este marco, la Comisión de la Verdad resaltó que la tierra debe entenderse no como un mero escenario pasivo, sino como un actor político central en la distribución de la violencia: "En el despojo, la tierra es un actor político y social que influencia la distribución de la violencia" (Huellas de la Desaparición, 2021).

El relato histórico reciente confirma que, bajo la represión armada del Estado y los grupos paramilitares, se consolidó un proceso sistemático de despojo y abandono de tierras campesinas, favoreciendo intereses de élites económicas nacionales y extranjeras. Para la Comisión de la Verdad, "la memoria de la tierra" conserva las huellas de una violencia múltiple —física, institucional y ambiental— que transformó radicalmente el paisaje y sus ecosistemas.

Este panorama plantea al Estado enormes retos: proteger los territorios, garantizar el retorno de las comunidades desplazadas, restituir predios, implementar reparaciones integrales[8] y, en algunos casos, facilitar reubicaciones o procesos de integración local[9]. En este sentido, la relación entre las comunidades y la tierra —entendida por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2005) como tenencia— se vincula al concepto más amplio de territorio, que incluye el patrimonio social, cultural y ambiental de cada comunidad (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2011). Comprender el fenómeno del despojo y abandono requiere reconocer la diversidad de formas de tenencia existentes: legales, culturales, regionales y étnicas. En Colombia, gran parte de quienes fueron forzados a abandonar

5 Se reconoce como aquellas circunstancias en las que se vulneran derechos fundamentales al limitar la libre circulación de la población civil y restringir su acceso a bienes esenciales para la vida. Estas situaciones suelen darse cuando grupos armados, ya sean legales o ilegales, ejercen algún tipo de control —sea militar, económico, político, social, cultural o incluso ambiental— dentro del marco del conflicto armado (INDH, 2011).

6 El abandono de las tierras no coincide necesariamente con el despojo. El abandono tiene una dimensión traumática por su coincidencia con la huida forzada y el quiebre de las condiciones de vida (INDH, 2011).

7 La pérdida del uso, control o posibilidad de disponer de las tierras y territorios por parte de las personas desplazadas ocurre dentro de contextos locales y regionales específicos, cuya comprensión resulta fundamental para dimensionar la complejidad del problema. Solo desde esa perspectiva es posible identificar los desafíos que enfrenta la restitución de derechos sobre la tierra y el territorio en Colombia, entendida como una pieza esencial de la reparación integral (INDH, 2011).

8 Son los mecanismos institucionales de atención para proteger la tierra abandonada por los desplazados, mediante rutas institucionales de protección individual, colectiva o étnica. Esta protección de tierras incluye también predios que están en riesgo de abandono, y no solo aquellos que ya han sido abandonados (INDH, 2011).

9 Son las determinaciones administrativas o judiciales dirigidas a garantizar la recuperación del patrimonio de los desplazados (INDH, 2011).

sus tierras eran ocupantes legítimos o poseedores sin títulos formales, lo que hace aún más relevante la recomendación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2005) sobre la necesidad de proteger también a arrendatarios y no propietarios en los procesos de restitución.

Otro aspecto clave es la igualdad de género en el acceso a la tierra. El DANE, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, ha resaltado que garantizar la propiedad para las mujeres es un paso indispensable hacia la equidad económica y social (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2022). Sin embargo, la realidad muestra profundas desigualdades: el catastro tradicional ni siquiera incluye la variable de sexo, lo que invisibiliza la magnitud de la brecha. Cruces de información permiten concluir que el 63,7 % de los predios pertenecen a hombres y que, cuando las mujeres figuran como propietarias, se trata de pequeñas parcelas de menos de tres hectáreas, en su mayoría destinadas a vivienda. Según Deere *et al*. (2011), esta discriminación histórica reduce la autonomía femenina y limita su participación en el orden social y económico.

En esa línea, la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) señala que cerrar la brecha de género en el acceso a la tierra no es solo un asunto de productividad agrícola, sino de derechos humanos y de justicia social (Deere *et al*., 2011). Aunque la legislación colombiana reconoce la igualdad de derechos, persisten barreras no normativas: dificultades en el acceso al crédito, predominio masculino en las decisiones comunitarias, patrones patriarcales en el núcleo familiar y la falta de educación formal de las mujeres, que refuerza su aislamiento respecto a las instituciones.

A ello se suma que la concentración de tierras sigue siendo un factor estructural de desigualdad. Oxfam (Cardona, 2018) ha evidenciado que el 1 % de los predios agropecuarios de gran tamaño está en manos de un reducido número de personas, lo que, como advierte Vergara (2020), perpetúa la pobreza, alimenta conflictos sociales, compromete la seguridad alimentaria y degrada el ambiente mediante monocultivos. Vargas-Reina (2010) documentó, además, cómo el narcotráfico ha contribuido a la concentración de tierras, usándolas como mecanismo de lavado de activos y orientándolas mayormente hacia la ganadería, en detrimento de la agricultura y la conservación de los bosques.

Finalmente, en lo que respecta a la adquisición de tierras por extranjeros, informes oficiales citados por *El Espectador* revelan que cerca de 1,4 millones de hectáreas en Colombia pertenecen legalmente a foráneos o a sociedades internacionales, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de limitar esta práctica en defensa de la soberanía nacional y alimentaria.

Conclusión

En Colombia, los debates sobre la propiedad, la posesión y la tenencia de tierras reflejan tanto las huellas de un pasado conflictivo como los retos actuales del país. La relación histórica de las comunidades con la tierra ha estado marcada por la desigualdad, la violencia y una larga lucha por el reconocimiento de derechos básicos. Aunque estos tres conceptos suelen entrelazarse, cada uno posee particularidades que influyen directamente en la vida cotidiana de millones de personas, especialmente en las zonas rurales. Comprender esta compleja dinámica exige un enfoque que no se limite a lo jurídico, sino que abarque también dimensiones sociales y económicas, abriendo un diálogo entre todos los actores implicados.

La *tenencia de la tierra* describe la situación en la que una persona ocupa o utiliza un bien, reconociendo que no es el verdadero propietario. En Colombia, esta figura resulta especialmente sensible, pues muchas familias desplazadas o en condición de vulnerabilidad se encuentran bajo esquemas de tenencia frágiles, sin respaldo legal suficiente. El Código Civil, en su artículo 775, establece que el tenedor actúa "no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño". Esta definición pone en evidencia la precariedad de quienes viven en tierras que no les pertenecen formalmente, quedando expuestos a conflictos legales, inseguridad económica y riesgo constante de despojo.

La *posesión*, en contraste, implica la intención de comportarse como propietario. Supone tanto la ocupación física del bien (*corpus*) como la voluntad de ejercer dominio sobre él (*animus*). En el sistema jurídico colombiano, la posesión puede transformarse en propiedad a través de la prescripción adquisitiva, que otorga el derecho a quienes han ocupado un terreno de manera continua, pacífica y de buena fe durante el tiempo fijado por la ley. Este mecanismo es vital en un país donde miles de campesinos habitan terrenos sin títulos formales, ya que les ofrece una vía legal para regularizar su situación y obtener seguridad jurídica.

La *propiedad*, entendida en su sentido más amplio, otorga a una persona el derecho pleno de usar, disfrutar y disponer de un bien. La Constitución de 1991 protege este derecho al establecer que nadie puede ser privado de su propiedad sin un debido proceso y una indemnización justa. Sin embargo, más allá de la norma, la realidad colombiana evidencia una profunda concentración de tierras en manos de pocos, lo que agudiza los desequilibrios sociales y económicos (Sarmiento E., 2018).

La disputa por la tierra no solo es una cuestión de derecho civil; está íntimamente ligada a las dinámicas del conflicto armado. El despojo, la apropiación ilegal por parte de actores armados y la falta de garantías para los campesinos han generado un círculo de exclusión y violencia que persiste, pese a los intentos de reforma agraria y a los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz. Frente a esta situación, es indispensable que las comunidades rurales, históricamente marginadas, participen activamente en la discusión sobre la propiedad y la tenencia, garantizando que sus perspectivas y demandas formen parte de las soluciones.

En este escenario, la *formalización de la propiedad* y un acceso más equitativo a la tierra son claves para asegurar la soberanía alimentaria, reducir la pobreza rural y promover prácticas sostenibles en el uso del suelo. Las políticas públicas deben orientarse hacia una redistribución más justa, reconociendo la diversidad cultural y territorial del país, al tiempo que fortalecen la participación comunitaria en la gestión de los recursos.

El futuro del campo colombiano depende de un *diálogo inclusivo* en el que confluyan campesinos, organizaciones sociales, Estado, sector privado y organismos internacionales. Solo mediante una construcción colectiva será posible avanzar hacia políticas que respondan a la complejidad del problema, respetando tanto las particularidades regionales como los principios de justicia social y sostenibilidad.

En suma, resolver las tensiones en torno a la propiedad, la posesión y la tenencia no es únicamente una tarea jurídica, sino un desafío estructural que incide en la paz, la equidad y el desarrollo sostenible del país. Como señalan Merlo *et al*. (2024), avanzar en esta dirección supone reconocer que la tierra es más que un recurso económico: es un espacio vital de identidad, justicia y dignidad para millones de colombianos.

Referencias

Acosta Medina, A. D. (2013). Colombia: Escenario de las desigualdades. *Tendencias*, *14*(1), 9-35. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-86932013000100009&lng=en&tlng=es.

Agencia Nacional de Tierras. (2023). *Plan Nacional 2023*. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/PLANEACION/Plan_de_Accion_(Plan_Gasto_Publico)/2023/PLAN_DE_ACCION_INSTITUCIONAL_VIGENCIA_2023_V3.pdf

Cardona, A. P. (2018, abril 18). *Un millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca*. Mongabay. https://es.mongabay.com/2018/04/distribucion-de-la-tierra-en-colombia/

Cortés Ramírez, H. A. (2021). Colonialidad del poder/despojo de tierras. Una perspectiva espacial de la acumulación y la guerra en Colombia. *Eidos*, *34*, 132-160. https://doi.org/10.14482/eidos.34.172.42

Deere, C. D., Lastarria-Cornhiel, S. y Ranaboldo, C. (with Costas, P.). (2011). *Tierra de mujeres: Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en Latinoamérica*. Fundación Tierra, Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2022). *Propiedad rural en Colombia. Un análisis con perspectiva de género e integración de fuentes de datos*

[Nota estadística]. Presidencia de la República. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/jul_2022nota_estadistica_propiedad_rural.pdf

Huellas de la Desaparición. (2021, diciembre 24). *Despojo y memoria de la tierra*. Comisión de la Verdad. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7599.pdf

Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2011). *Desplazamiento forzado, tierras y territorio. Agendas pendientes: La estabilización socioeconómica y la restitución*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2011/7599.pdf

Lara, N. (2023). Deforestación y desigualdad de la tierra: Un análisis econométrico en el posconflicto colombiano (2015-2019). *Cuadernos de Economía*, *42*(89), 203-232. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v42n89.94607

Merlo Pinzón, J. A., Orrego Echeverria, I. A., Cepeda H, J. y Cárdenas Arias, J. (2024). Análisis teológico sobre la categoría *signos de los tiempos*. *Perspectiva Teológica*, *56*(3), 555. https://doi.org/10.20911/21768757v56n3p555/2024

Organización de las Naciones Unidas. (2005). *Norma de restitución específica: Principios de las Naciones Unidas sobre la restitución de bienes y viviendas a los refugiados y las personas desplazadas*. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2005). *El acceso a la tierra rural y la administración de tierras después de conflictos violentos*. Organización de las Naciones Unidas. https://www.fao.org/4/y9354s/y9354s00.htm

Pérez Vásquez, M. A. (2020). Retos de la política ambiental colombiana frente a los desafíos de la OCDE y los ODS. *Análisis Político*, *33*(99), 101-120. https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90970

Resolución 000261. (2018, junio 21). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Diario Oficial N.º 50632. https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/BancoMedios/Archivos/res-0261-18%28minaagricultura%29.pdf

Rincón-Zapata, C., Restrepo-Ruíz, A. L., Alzate-Cárdenas, M. D. S., Sabala-Salazar, H. E. y Arboleda-Álvarez, O. L. (2021). Desigualdades Rurales en Colombia: Aportaciones para el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Revista Lasallista de Investigación*, *18*(2), 178-200. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8843579

Sarmiento E., J. P. (2018). La aplazada reforma agraria y la concentración de la tierra en Colombia. *Revista de Derecho*, *49*, VII-XII. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100001&lng=en&tlng=es

Suescún Barón, C. A., Giraldo Giraldo, C. A., Sandoval Castaño, J. P. y Cantor Ávila, V. A. (2023). La frontera agraria en disputa: Análisis de algunos conflictos territoriales sobre comunidades étnicas y campesinas en Colombia. *Cuadernos de Economía*, *42*(89), 297-329. https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v42n89.97146

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2024a). *Las cifras que presenta el Informe Global sobre Desplazamiento 2024*. Departamento de Prosperidad Social. https://www.unidadvictimas.gov.co/las-cifras-que-presenta-informe-global-sobre-desplazamiento-2024/

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2024b). *Registro Único de Víctimas*. Datos para la Paz. https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas/

Vargas-Reina, J. (2010). Guerreros y campesinos: El despojo de la tierra en Colombia. *Estudios Socio-Jurídicos*, *12*(2), 381-387. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792010000200012&lng=en&tlng=es

Vergara Vergara, W. (2020). *Derechos de propiedad agraria, concentración de la tierra y productividad agrícola en Colombia* [Tesis de doctorado, Universidad de La Salle]. Ciencia Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/items/6d3f14e8-0c97-446c-8a61-b46bcad3521e

UNIMETA

Territorializar el discurso contemporáneo: el impacto de la inteligencia artificial en la construcción del territorio y el Estado

José Luis Farelo Guerra*

* Doctor en Estudios Territoriales; jefe del Centro de Investigaciones Rogelio Salmona–PATER de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA.

jose.farelo@unimeta.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-7545-7975

Introducción

Territorializar el discurso desde el lenguaje es adscribirle una competencia relacionada con el territorio que, entendido como un espacio de poder y disputa, se construye a partir de dos formas:

- desde las prácticas concretas en el espacio físico material —en terreno—;
- por medio del discurso, a través del lenguaje inmaterial —por ejemplo, con la norma urbana—.

En Colombia, teniendo presentes algunas leyes de la política pública territorial en el contexto del desarrollo legislativo de la Constitución Política de 1991, desde el discurso, el territorio se ha territorializado de manera particular, a saber, su *trans*determinación; es decir, el territorio se evidencia en colocación, coaparición o elemento doble. El territorio, en efecto, se transcribió y delimitó de manera estratégica en el articulado legal, evidenciando relaciones de poder que lo ocultan o revelan no solo a escala nacional, sino también en la esfera local e intermedia del país (Farelo Guerra, 2020, 2024).

Precisamente, algunos científicos sociales vaticinan que el lenguaje será la próxima gran novedad de la inteligencia artificial (IA). Esta tecnología, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX (Buchanan, 2005), constituye una herramienta de poder primordial, tal como la cartografía moderna en el siglo XVI: un avance que permitió hacer tangible al Estado en el territorio y, lo más importante, ejercer control político y poder legítimo de la fuerza por medio de la delimitación de sus fronteras (Raffestin, 2011).

Es más, así como sucedió con el mapa en el espacio abstracto, en la actualidad, la palabra, por medio de las técnicas de procesamiento de lenguajes naturales (PLN), los modelos extensos de lenguaje (MEL) y la forma de representación del conocimiento, reconfigurará

> La inteligencia artificial, como tecnología política, produce territorio desde el discurso y la práctica, redefiniendo Estado y poder.

en el futuro lo que entendemos por territorio y, quizás, también por el Estado contemporáneo. Por ello, empezar a reflexionar sobre cómo va a territorializarse dicho lenguaje resulta fundamental. Así las cosas, en este escrito nos ocupamos del territorio construido desde el lenguaje, reflexionando alrededor de la pregunta por la manera en que la IA territorializa el lenguaje.

Desarrollo

Territorializar el lenguaje es adscribir una competencia al territorio; es decir, volverlo verbo y otorgar a un espacio particular el poder de ordenarse en términos políticos y administrativos, al tener en cuenta los principios de autonomía, descentralización y competencia territorial, en el contexto jurídico colombiano (Farelo Guerra, 2020, 2024). Por tanto, aunque nos hallamos ante un asunto que cobra sentido en el espacio inmaterial, no es menos cierto que este se acciona también en el espacio material, a través de la territorialización de las acciones (Monnet, 2013). En Colombia, por ejemplo, la omisión de esos principios en poco más de treinta años de vida de la Constitución Política de 1991 y en su desarrollo legislativo subsecuente incide en nuestro débil desarrollo territorial, que representa también la debilidad del Estado.

En esa dirección, en nuestra juridicidad territorial, por ejemplo, el término *territorio* establece tantas relaciones de sentido que, en realidad, funciona como un concepto que se desarrolla en colocación, coaparición o elemento dúplice. Es decir, tiene un significado

composicional, producto de palabras combinadas o en relación, y no simplemente como concepto individual o aislado. En Colombia, no solo existe el territorio nacional, el territorio departamental, el territorio municipal o el territorio distrital, sino múltiples territorios adicionales. A saber, en la escala nacional, había 73 tipos de territorio en coaparición hasta 2020; y en la escala local e intermedia, 104 territorios distintos hasta ese mismo año, como elemento de doble naturaleza (Farelo Guerra, 2020, 2024).

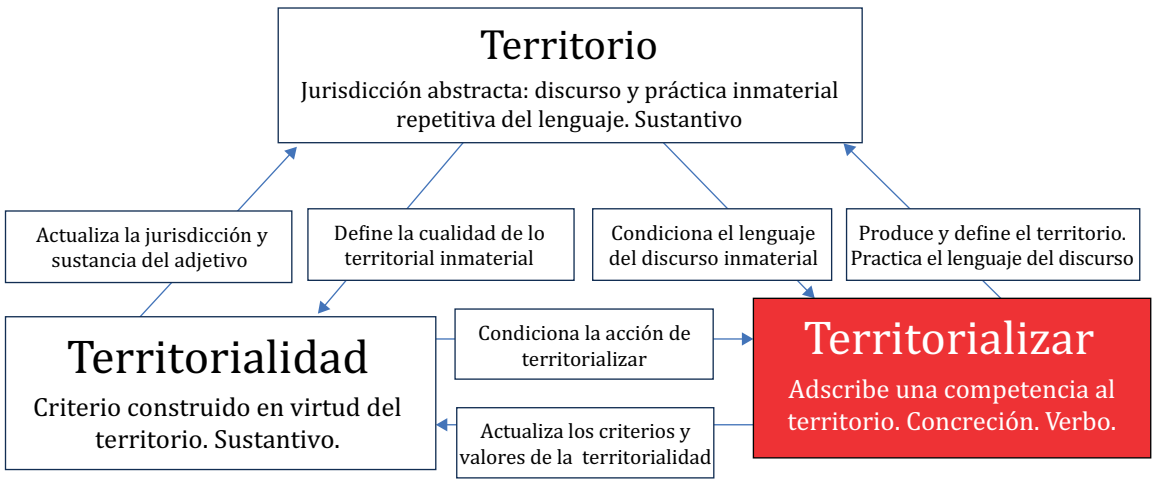
Lo anterior sucede debido a que el territorio, desde el lenguaje, también funciona como un sistema que se *trans*determina. Es decir, se actualiza de manera constante según los criterios que de él mismo se valoren, al tener presente su territorialidad. Esta última, además, se (re)produce al adscribirle una competencia transcrita en los textos de la normativa legal y jurídica que concretan el acto de territorializar el discurso a través de los articulados que lo reconocen como elemento doble o en colocación (figura 1).

Por otro lado, la IA, una tecnología que está produciendo territorio en la actualidad, impacta en las prácticas concretas en el espacio material a través de desarrollos como los grandes progresos en infraestructura de movilidad, distribución de energía y población, otros servicios públicos y sanitarios, así como el control ambiental en las ciudades y centros urbanos, entre otros. Pues bien, la IA es principalmente una tecnología política, en la medida en que es una herramienta de poder (Arendt, 2016), que además tiene la posibilidad de producir territorio desde el lenguaje, toda vez que está diseñada para tener efecto desde y a través de él. En ese sentido, tiene algunos rasgos de opacidad que dejan entrever relaciones de poder.

Es más, aunque es por medio de los PLN que la IA realiza la intersección lingüística-computación (estudiando el lenguaje humano por medio de tareas como la traducción, el análisis semántico, la extracción de información y el análisis de sentimientos, entre otros aspectos), el gran desafío de esta tecnología radica en la gestión de los datos, ya que estos son su insumo principal, siempre que sean confiables, imparciales y relevantes; es decir, desprovistos de sesgos (Universidad de los Andes, 2023).

Este desafío se multiplica al tener en cuenta los exponenciales avances de los MEL, que, asemejando las

Figura 1.
Sistema lenguaje-territorial-normativa: transdeterminación entre territorio, territorialidad y territorializar



Fuente: tomado de Farelo Guerra (2020).

redes neuronales del cerebro humano, manejan millones de parámetros; datos que, a diferencia de los PLN, son "grandes cantidades de texto sin etiquetar, mediante aprendizaje autosupervisado o aprendizaje semisupervisado" (Goled, 2021; como se citó en "Modelo extenso de lenguaje", 2024). En efecto, "esto ha cambiado el enfoque de la investigación del procesamiento del lenguaje natural alejándose del paradigma anterior de entrenar modelos supervisados especializados para tareas específicas" ("Modelo extenso de lenguaje", 2024).

Ahora bien, la representación del conocimiento con IA constituye otro desafío complejo. Específicamente, al tratar sobre los PLN, las redes semánticas son una manera de alcanzar la representación del conocimiento por medio de nodos, arcos, propiedades, jerarquías y taxonomías. No es parte del alcance de este escrito desarrollar a profundidad cada elemento; más bien, nuestro propósito es llamar la atención sobre que la semántica léxica "estudia el significado de las palabras, así como las diversas relaciones de sentido que se establecen entre ellas" (Asociación de Academias de la Lengua Española, s. f.).

Así, al final, las colocaciones o coapariciones, los PLN y los MEL tratan sobre lo mismo: las relaciones entre las palabras que, en el caso que nos ocupa, producen el territorio desde el lenguaje en la normativa colombiana, a través del acto de territorializar el discurso. Así como las colocaciones, coapariciones o elementos de doble naturaleza han producido esta territorialización, conviene preguntarse: ¿de qué manera la IA territorializa el lenguaje? ¿Y qué datos (discursos) alimentan a la IA?

Con la IA, el manejo de grandes cantidades de datos se simplifica, aunque su análisis y comprensión amplia obliguen al razonamiento humano. En el caso colombiano, la explosión de colocaciones sobre el territorio —expuestas en un acápite anterior— parece demasiado compleja. Por ello, ha resultado casi imposible concertar el territorio desde el lenguaje y, también, desde las prácticas, otra de las enormes debilidades de nuestro ordenamiento territorial jurídico. Llegados aquí, es clave tener presente que las sociedades pactan a través del lenguaje.

Retomando las preguntas, no es el alcance de este ensayo encontrar sus respuestas, sino llamar la atención sobre que conceptualizar datos o discursos es también un acto de poder (Nates-Cruz, 2011). En el caso que nos ocupa, esto tiene implicaciones éticas, sociales y jurídicas que se manifiestan en el sistema del mundo digital (Mohamed *et al*., 2020).

En esa dirección, Stuart (2013) sugiere que "el territorio, como palabra, concepto y práctica, es una cuestión histórica, geográfica y política"[1] (p. 327). Sostener la conceptualización de territorio, en la actualidad, pasa por pensar el contexto histórico y geográfico donde se produce, de manera que entenderlo como una tecnología política o un conjunto de tecnologías políticas permeadas por la IA también es válido:

> El territorio no es simplemente tierra, en el sentido político-económico de los derechos de uso, apropiación y posesión inherentes a un lugar; tampoco es una cuestión estrictamente político-estratégica, más cercana a una noción de terreno. El territorio comprende técnicas para medir la tierra y controlar el terreno […]. Lo clave en esta designación es el intento de mantener abierta la cuestión del territorio. Entender el territorio como una tecnología política no es definirlo de una vez por todas; más bien, es indicar las cuestiones en juego al comprender cómo se entendió en diferentes contextos históricos y geográficos[2] (Stuart, 2013, p. 323).

Ahora bien, pensar el territorio que se construye desde el discurso, por medio del acto de territorializar el lenguaje en el contexto de la IA, es, igualmente, pensar también el Estado. Insistimos, sin embargo, en que el desafío de este escrito es invitar a la reflexión, no proveer respuestas inmediatas. En este sentido, para

1 "Territory […], as word, concept, and practice are a historical, geographical, and political question" [traducción propia].

2 "Territory is not simply land, in the political economic sense of rights of use, appropriation, and possession attached to a place; nor is it a narrowly political-strategic question that is closer to a notion of terrain. Territory comprises techniques for measuring land and controlling terrain […] What is crucial in this designation is the attempt to keep the question of territory open. Understanding territory as a political technology is not to define territory once and for all; rather, it is to indicate the issues at stake in grasping how it was understood in different historical and geographical contexts" [traducción propia].

Camps (2011), teorizar el Estado implica necesariamente entender la reflexión desde la perspectiva de los problemas y preguntas vigentes. Así, otra pregunta clave que surge es: ¿Cómo entender el Estado a la luz del contexto tecnológico actual permeado por la IA?

Stuart (2013) da luces para responder este cuestionamiento. Para él, el Estado se manifiesta como resultado de las formas de organizar la relación entre territorio y poder: tres conceptos que, a propósito, se producen y reproducen históricamente. Es necesario revisarlos a través del prisma y las lógicas de la IA.

En la contemporaneidad, una de las cuestiones fundamentales que justifican esta tarea es comprobar si, en realidad, sus conceptualizaciones y significados actuales resultan vigentes para entenderlos y, sobre todo, deducir las nuevas capacidades del poder. En el caso colombiano, estas narrativas transitan desde la racionalidad del nivel central nacional que, después de la Constitución de 1991, volvió a centralizar el poder, a otras lógicas más globales.

Así pues, tiene sentido hacer otra pregunta: ¿de qué se transita en Colombia desde la perspectiva de un escenario regional y local alrededor de una incompleta descentralización política del centro nacional de decisiones institucional a otro global, dominado por corporaciones tecnológicas hipercapitalizadas y, en cierto sentido, unipersonales? Es decir, ¿son los Elon Musk (CEO de Tesla Motors), Mark Zuckerberg (CEO de Meta) y Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI), entre otros, quienes finalmente definirán lo que comprendemos por territorio y Estado?

Conclusiones

El territorio, como concepto y categoría de análisis, solo puede producirse a partir de dos maneras: desde las prácticas y el discurso. De la misma forma, para mantener abierta su conceptualización, es necesario pensar en los diferentes contextos históricos y geográficos donde este se produce, como el actual, donde la IA es una tecnología que, de manera evidente, está produciéndolo tanto en la práctica como en el discurso.

En efecto, en ese sentido, la IA es principalmente una tecnología política, ya que tiene el poder de producir territorio desde el lenguaje. También es cierto que dicha tecnología está produciendo territorio desde las prácticas concretas en el espacio físico material.

Uno de los grandes desafíos de esta tecnología es la gestión de los datos, los cuales deben estar desprovistos de sesgos. A partir de ese contexto inicial, dos preguntas son necesarias: ¿cómo la IA territorializa el lenguaje? y ¿qué datos (discursos) alimentan a la IA?

Responder a estas preguntas resulta fundamental, entre otras razones, porque conceptualizar datos (discursos) es también un acto de poder. Justamente, al territorializar el lenguaje, se le adscribe una competencia al territorio y se lo llena de poder; poder que, en Colombia, por ejemplo, omite, desde el desarrollo de la juridicidad, los principios de autonomía, descentralización y competencia territorial en desarrollo de la Constitución Política de 1991. Sin duda, ello ha incidido en nuestro débil desarrollo territorial, que constituye también la debilidad del Estado mismo.

Por otra parte, la representación del conocimiento en la IA constituye un desafío complejo. En esa dirección, en nuestra juridicidad territorial, por ejemplo, la palabra territorio se ha *trans*determinado, representando y funcionando como un sustantivo que se desarrolla en colocación, coaparición o elemento doble. Esto produce una explosión de colocaciones, de modo que ha resultado imposible concertar el territorio tanto en la normativa (discurso) como en terreno (práctica): otra de las grandes debilidades de nuestro ordenamiento territorial jurídico.

Finalmente, pensar el territorio producido desde el lenguaje y su relación con la IA lleva, ineludiblemente, a pensar en el Estado mismo. De ahí que otra pregunta fundamental sea la siguiente: ¿Cómo entender el Estado a la luz del contexto tecnológico actual, permeado por la IA?

No cabe duda de que atender el desafío de resolver dicho interrogante debe partir de entender que

Estado, territorio y poder son tres conceptos que se (re) producen históricamente interrelacionados y que, así, en relación, es menester comprobar si, en efecto, sus conceptualizaciones y significados resultan vigentes para entenderlos bajo las lógicas de la IA como tecnología política.

Referencias

Arendt, H. (2016). ¿Qué es la política? Paidós

Asociación de Academias de la Lengua Española. (s. f.). Semántico, semántica. En *Diccionario de la lengua española* (Tricentenario). Recuperado el 10 de diciembre de 2025, de https://dle.rae.es/semántico

Buchanan, B. G. (2005). A (very) brief history of artificial intelligence. *AI Magazine*, *26*(4), 53-60. https://doi.org/10.1609/aimag.v26i4.1848

Camps, V. (2011). *Filosofía política. Conceptos y textos*. Editorial Universidad de Antioquia.

Farelo Guerra, J. (2020). Política pública de ordenamiento, de configuración y desarrollo territorial en la Costa Caribe colombiana continental (1990-2016). En J. F. Jolly (Ed.), *Territorio, planeación y políticas públicas: Variaciones sobre un trinomio imperfecto* (pp. 129-150). Editorial Pontificia Universidad Javeriana. https://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587815061

Farelo Guerra, J. (2024). Estrategia estatal y ensamble discursivo: Territorialización del lenguaje normativo desde la transdeterminación y la interdeterminación del territorio. En Y. J. Peña Poveda, P. M. Martínez Toro, Morales Fernández y C. A. Rojas Granada (Eds.), *Pensamiento contemporáneo en estudios territoriales: Vol. 1. Perspectivas y retos de los estudios territoriales* (pp. 75-93). Universidad del Caldas.

Goled, S. (2021, mayo 7). Self-Supervised Learning Vs Semi-Supervised Learning: How They Differ. *Analytics India Magazine*. https://analyticsindiamag.com/ai-trends/self-supervised-learning-vs-semi-supervised-learning-how-they-differ/

Modelo extenso de lenguaje. (2025, 22 de noviembre). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_extenso_de_lenguaje&oldid=170603247

Mohamed, S., Png, M.-T. y Isaac, W. (2020). Decolonial AI: Decolonial Theory as Sociotechnical Foresight in Artificial Intelligence. *Philosophy & Technology*, *33*(4), 659-684. https://doi.org/10.1007/s13347-020-00405-8

Monnet, J. (2013). El territorio reticular. En B. Nates-Cruz (Ed.), *Enfoques y métodos en estudios territoriales* (pp. 137-167). Doctorado de Estudios Territoriales, Universidad de Caldas.

Nates-Cruz, B. (2011). *La territorialización del conocimiento: Categorías y clasificaciones culturales como ejercicios antropológicos*. Anthropos.

Raffestin, C. (2011). *Por una geografía del poder* (Y. Villagómez, Trad.). Colegio de Michoacán.

Stuart, E. (2013). *The Birth of Territory*. University of Chicago Press.

Universidad de los Andes. (2023). *Introducción a la inteligencia artificial contemporánea*. Coursera. https://www.coursera.org/learn/introduccion-a-la-inteligencia-artificial-contemporanea

Sociedades comerciales de hecho: abordaje jurisprudencial con énfasis en la sociedad de hecho derivada de relación en concubinato

Juan Sebastián Cubides Salazar*
Jorge Gustavo Munévar**

* Abogado; docente de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
juan.cubides@unimeta.edu.co
https://orcid.org/0009-0001-4049-5680

** Doctor en Humanidades, Humanismo y Persona; docente-investigador de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA
jgmunevar@yahoo.es
https://orcid.org/0009-0004-1837-4227

Resumen

Las sociedades comerciales de hecho, particularmente aquellas derivadas de relaciones de concubinato, presentan un interesante desafío jurídico en la legislación colombiana. Estas sociedades se constituyen sin cumplir con las formalidades legales típicas, surgiendo del consentimiento expreso o implícito de las partes involucradas. En el contexto del concubinato, donde las parejas conviven y comparten bienes y actividades económicas, a menudo se establece una sociedad de hecho sin la formalización adecuada, lo que complica la determinación de derechos y obligaciones. La jurisprudencia colombiana ha abordado este fenómeno, reconociendo que las relaciones de concubinato pueden generar vínculos patrimoniales que merecen protección legal. Los tribunales han sostenido que, a pesar de la falta de formalización, los derechos adquiridos por los concubinos en el contexto de una sociedad de hecho deben ser respetados, permitiendo que los socios reclamen sus participaciones y derechos en caso de disolución. Este enfoque busca salvaguardar los intereses de las partes y garantizar la justicia en la distribución de bienes acumulados durante la relación, reflejando un avance en la protección de los derechos de las parejas no casadas en el ámbito económico. La jurisprudencia resalta la importancia de considerar el contexto social y las dinámicas de convivencia en el tratamiento de las sociedades comerciales de hecho.

Palabras clave: concubinato, sociedad comercial de hecho, disolución, patrimonio.

> Las sociedades de hecho en concubinato generan vínculos patrimoniales protegidos en Colombia.

Abstract

De facto commercial partnerships, particularly those arising from cohabitation relationships, present an interesting legal challenge in Colombian law. These partnerships are established without complying with the typical legal formalities, arising from the express or implicit consent of the parties involved. In the context of cohabitation, where couples live together and share assets and economic activities, a *de facto* partnership is often set up without proper formalization, which complicates the determination of rights and obligations. Colombian jurisprudence has addressed this phenomenon, recognizing that cohabitation relationships can generate patrimonial ties that deserve legal protection. The courts have held that, despite the lack of formalization, the rights acquired by cohabitants in the context of a *de facto* partnership must be respected, allowing partners to claim their shares and rights in case of dissolution. This approach seeks to safeguard the interests of the parties and ensure justice in the distribution of assets accumulated during the relationship, reflecting progress in the protection of the rights of unmarried couples in the economic sphere. Case law highlights the importance of considering the social context and the dynamics of cohabitation in the treatment of *de facto* commercial partnerships.

Keywords: cohabitation, *de facto* commercial partnership, dissolution, assets.

Introducción

La *sociedad de hecho*, prevista en el Código de Comercio colombiano, ha despertado interés y generado discusiones en el ámbito jurídico por varias décadas. Este tipo de figura se configura como un contrato que no logra encajar dentro de las formas societarias reconocidas por la ley, debido a la ausencia de ciertos requisitos propios de cada una de ellas. Tal particularidad le ha otorgado un carácter marcadamente informal, tanto en su creación como en su funcionamiento. Sin embargo, a pesar de su importancia práctica y jurídica, este tema ha recibido una atención limitada desde la investigación académica y el análisis doctrinal.

En consecuencia, aunque la legislación, la doctrina y la jurisprudencia han intentado construir marcos regulatorios que fortalezcan el control sobre la actividad empresarial y comercial, las sociedades de hecho continúan situándose en un terreno marginal. Esta falta de regulación precisa genera dificultades jurídicas, especialmente de tipo probatorio, para quienes se ven inmersos en litigios relacionados con este tipo de acuerdos.

El presente trabajo pretende problematizar el papel de la sociedad de hecho, preguntándose si puede considerarse un mecanismo adecuado para garantizar derechos en contextos donde las sociedades conyugales y patrimoniales no logran coexistir, generando un evidente vacío normativo. Para ello, se propone una investigación de carácter cualitativo y documental que examine la naturaleza, el funcionamiento y las consecuencias legales de esta figura en el marco de la legislación nacional, abarcando la rama comercial, civil y de familia.

De manera particular, se busca analizar cómo ha sido abordada esta institución en la *jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*, cuáles son las disposiciones normativas que la rodean y qué ha planteado la doctrina, que hasta ahora ha sido incipiente en el tratamiento del tema. Asimismo, se tendrá en cuenta la perspectiva de la **Superintendencia de Sociedades**, organismo que ha aportado una visión relevante sobre la aplicación práctica y los retos de este tipo societario en la vida económica del país.

La sociedad comercial de hecho

La legislación colombiana, en el título IX del Código de Comercio establecido por el Decreto 410 de 1971, específicamente en el artículo 498, permite la constitución de una sociedad mediante un documento privado. Así, cuando no se formaliza a través de escritura pública, su existencia puede ser evidenciada por los medios probatorios reconocidos por la ley. Esta disposición también se aplica a las sociedades por acciones simplificadas (SAS), en las que no es necesario constituirse por escritura pública para tener vigencia legal (Ley 1258, 2008, art. 5).

Además, el artículo 499 del Código de Comercio establece que la sociedad de hecho carece de personalidad jurídica propia. Esto implica que los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas se consideran en favor o en contra de todos los socios de manera solidaria. Las estipulaciones acordadas entre los asociados solo tienen efecto entre ellos, lo que permite que los terceros reclamen sus derechos a cualquiera de los socios (art. 501 del C. Com.). Por otro lado, la administración de la sociedad de hecho es responsabilidad de todos los socios, a menos que se acuerde otra modalidad entre ellos (art. 503 del C. de Com.).

En caso de liquidación, la ley señala que "cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella, y los demás asociados están obligados a proceder a dicha liquidación" (art. 505 del C. de Com.). Los socios, en cualquier momento, individualmente pueden solicitar que se liquide su participación en la sociedad de hecho sin que ello implique la disolución de la sociedad (art. 506 del C. de Com.). Recordemos que no se constituye una persona jurídica; por tanto, lo que se liquida es la participación tanto de los derechos como de las obligaciones adquiridas en la sociedad y no la sociedad en sí.

Una sociedad de hecho se configura como un acuerdo que no puede ser reconocido dentro de las formas convencionales de sociedades contempladas dentro de la legislación colombiana, ya sea debido a la omisión total o parcial de los requisitos específicos de cada una

de esas formas, o de las formalidades comunes a todas ellas. También puede originarse como un acuerdo basado únicamente en el consentimiento expreso o implícito de las partes, sin requerir ninguna formalidad adicional.

De igual manera, hay situaciones en las que una sociedad, a pesar de haber seguido rigurosamente las formalidades legales requeridas para su constitución, es nula debido a defectos en el consentimiento o a otras causas distintas al objeto o causa ilícita. Este último caso, en el cual una sociedad se forma pero luego es declarada nula por diversas razones, se conoce como "degeneración" dentro del contexto de las sociedades de hecho.

En ese sentido, la sociedad comercial de hecho puede surgir por el simple consentimiento de las partes o por degeneración, cuando, queriendo las partes formalizar la constitución de una sociedad, lo hacen con vicios que, consecuentemente, derivan en la declaratoria de su nulidad, naciendo con ello una sociedad de hecho.

Por lo anterior, las sociedades de hecho se dividen en tres clases: aquellas que surgen por virtud de un consentimiento expreso y que, debido a la falta de uno o varios requisitos o solemnidades requeridos por la ley para las sociedades legalmente constituidas, no alcanzan el estatus de tales (Peña Nossa, 2017); las que se originan en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resultan de un conjunto o de una serie coordinada de acciones que efectúan en común esas personas, lo que implica un consentimiento implícito.

Las que emergen como resultado de un proceso degenerativo, cuando las partes intentan formalizar una sociedad, pero cometen errores que llevan a la declaración de nulidad, lo que da lugar a una posible sociedad de hecho.

La tesis planteada contra el reconocimiento de las sociedades de hecho señaladas en el numeral segundo no puede alegarse basándose en que la sociedad es un contrato que no se forma sino por manifestaciones concordantes y recíprocas de las partes. Elemento este que resulta fundamental y que no existe en esas denominadas sociedades creadas de hecho. La Corte Suprema de Justicia dice —a propósito— que, en dichas sociedades creadas a través de los hechos, tal acuerdo de voluntades no falta; lo que ocurre es que se acredita por medio de una presunción (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 1935).

Se presumirá ese consentimiento; se inducirá por los hechos, el contrato implícito de sociedad, y se deberá, en consecuencia, admitir o reconocer la sociedad creada de hecho cuando la aludida colaboración de varias personas en una misma explotación reúna las siguientes condiciones:

- Que se trate de una serie coordinada de hechos de explotación común.
- Que se ejerza una acción paralela y simultánea entre los presuntos asociados, tendiente a la consecución de beneficios.
- Que la colaboración entre ellos se desarrolle en un pie de igualdad, es decir, que no haya estado uno de ellos, con respecto al otro u otros, en un estado de dependencia proveniente de un contrato de arrendamiento de servicios, de un mandato o de cualquiera otra convención, por razón de la cual uno de los colaboradores reciba salario o sueldo y esté excluido de una participación en la dirección, en el control y en la supervivencia de las empresas.
- Que no se trate de un estado de simple indivisión, de tenencia, guarda, conservación o vigilancia de bienes comunes, sino de verdaderas actividades encaminadas a obtener beneficio.

El estudio de la *sociedad de hecho* pone en evidencia la relevancia de ciertos elementos que permiten identificar su existencia y definir su funcionamiento. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en aquellos casos donde una de las partes se niega a suscribir la escritura social: allí, los tribunales han señalado que, aunque falten las formalidades propias de las sociedades reguladas por la ley, deben estar presentes los elementos esenciales

que caracterizan cualquier sociedad. En otras palabras, la ausencia de solemnidades no elimina la esencia del vínculo societario.

La existencia de este tipo de sociedades puede inferirse mediante simples presunciones, lo que otorga al juez un amplio margen de apreciación en su valoración, haciendo que su decisión sea difícil de controvertir en instancias como la casación. Dentro de este marco interpretativo cobra especial importancia la *affectio societatis*, es decir, la voluntad recíproca de asociarse. Para que una sociedad de hecho sea reconocida como tal, no basta con un acuerdo abstracto de voluntades destinado a reunir bienes o esfuerzos con fines lícitos; resulta igualmente imprescindible que entre los socios exista un trato equitativo, sin subordinación personal o jurídica, y que esa intención de asociarse se manifieste de forma clara y mutuamente reconocida.

La Corte Suprema de Justicia ha resaltado que los hechos mismos pueden convertirse en la mejor prueba de la existencia de una sociedad de hecho. Cuando la voluntad de asociarse no se expresa en documentos fundacionales o no se plasma en un consentimiento formal, deben ser las conductas, acciones y compromisos de las partes los que evidencien esa intención de conformar una empresa común. De este modo, el compromiso de colaboración y la distribución de riesgos y beneficios se transforman en pruebas clave para confirmar la sociedad, incluso sin respaldo documental.

En este sentido, los hechos que demuestran que dos o más personas se han unido con un propósito económico compartido —y que aceptan distribuir entre sí tanto ganancias como pérdidas— constituyen la base para reconocer la existencia de la sociedad de hecho. Así, este tipo societario debe reunir los elementos esenciales de cualquier sociedad regular, diferenciándose únicamente por la falta de la formalidad específica que exige la ley para su constitución.

Sorprende, sin embargo, que la jurisprudencia que existe al respecto en la relatoría de la Corte Suprema de Justicia recurra siempre a las tres sentencias fundacionales citadas previamente. Así, por ejemplo, en sentencia de 1993, el magistrado ponente Pedro Lafont Pianetta, al estudiar un caso donde se pretendía la declaratoria de la sociedad comercial de hecho, manifestó lo siguiente:

> En ese orden de ideas, la jurisprudencia de esta Corporación, en doctrina unánime, ha venido proclamando desde la sentencia proferida el 30 de noviembre de 1935 (Corte Suprema de Justicia, 1935, p. 479), que para declarar judicialmente la existencia de una sociedad formada por los hechos es preciso que se encuentre demostrado no solo la existencia de un capital social aportado por los socios, en función precisamente de la actividad económica de la sociedad, sino también el *animus contraendae societatis*, evidenciando por lo menos que hay mérito para establecer ese designio específico, por razonable inferencia, dadas la actividad en común desarrollada por los socios en posición igualitaria, la finalidad de ganancia que por esta vía pretenden alcanzar y la participación de todos en los resultados de la empresa (Corte Suprema, 2021).

A pesar de lo mencionado anteriormente, los autores consideran que, para comprender mejor la naturaleza de las sociedades comerciales de hecho en Colombia, es fundamental analizar sus elementos esenciales. Estos elementos, aunque similares a los de las sociedades regulares, tienen ciertas particularidades debido a la informalidad inherente a este tipo de asociación.

Al igual que en las sociedades regulares, la sociedad de hecho requiere la participación de dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas. Esta pluralidad es esencial para la formación de cualquier tipo de sociedad, incluidas las de hecho.

Los asociados deben realizar aportes, que pueden ser en dinero, bienes o trabajo. En las sociedades de hecho, estos aportes pueden no estar formalmente documentados, pero deben ser demostrables a través de los hechos.

La intención de obtener beneficios económicos y compartirlos entre los asociados es un elemento crucial.

Este ánimo de lucro debe ser común a todos los participantes de la sociedad de hecho.

Por último, aparece la *affectio societatis*; este elemento, ya mencionado, es particularmente importante en las sociedades de hecho, razón por la cual se ahonda un poco más en su aspecto. La Corte Suprema de Justicia ha enfatizado repetidamente su relevancia. En la sentencia del 11 de junio de 1962, el magistrado José Hernández Arbeláez señaló:

> Pero, tanto en la una como en la otra hipótesis, aunque se trata de sociedades de hecho, su configuración necesita que, además del acuerdo de voluntades dirigido específicamente a reunir bienes y esfuerzos para fines de lucro en campo lícito, exista tratamiento igualitario, sin subordinación personal o jurídica dentro del juego de intereses recíprocos y mediante el ánimo inequívoco de asociarse: *affectio societatis* (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 1962).

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 30 de noviembre de 2001, el magistrado Jorge Antonio Castillo Rugeles explicó: "La *affectio societatis*, *o animus contrahendi societatis*, es la voluntad de asociación, el querer unirse para un fin determinado, colaborar activamente en la obra común, participar en las pérdidas y ganancias que la empresa societaria pueda producir" (Sentencia 6094, 2001).

Es decir, la *affectio societatis* implica la voluntad de colaborar en pie de igualdad para lograr un fin común. En las sociedades de hecho, este elemento se infiere de las acciones y comportamientos de los asociados más que de documentos formales. Sin embargo, vale la pena preguntarse si la Corte, en su esfuerzo de definir la *affectio societatis*, ha incurrido en una especie de definición por embudo; es decir, en definir el concepto como el cúmulo de las demás características.

Para ello, revisada la jurisprudencia de la Corte, se evidencia que esta ha establecido que la *affectio societatis* en las sociedades de hecho debe presentar ciertas características:

- **La voluntariedad:** en la sentencia del 7 de julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia enfatizó: "La convivencia o la vida en común de una pareja no puede permitir edificar fatalmente una sociedad de hecho, pero si está debidamente demostrada, será indicio del *affectio societatis* o del *animus contrahendi societatis*, puntal constitutivo de uno de sus elementos axiológicos" (Corte Suprema de Justicia, 2021).

- **La igualdad entre los asociados:** La sentencia del 30 de agosto de 2011, con ponencia del magistrado William Namén Vargas, señaló:

  > La *affectio societatis* presupone la colaboración efectiva, activa y conjunta dirigida a lograr la finalidad común, en plano de igualdad jurídica, por cuanto los asociados, no obstante la diversidad de sus aportes, derechos y obligaciones, actúan entre sí como iguales. (Sentencia, 11001-3103-012-1999-01957-01, 2011)

- **La permanencia:** la Corte ha resaltado que la *affectio societatis* debe ser duradera. En la sentencia del 22 de octubre de 1993, el magistrado Pedro Lafont Pianetta manifestó que la *affectio societatis*: "(c) permanencia, entendida como la conjunción de acciones y decisiones proyectadas establemente en el tiempo, que permitan inferir la decisión de conformar un hogar y no simplemente de sostener encuentros esporádicos […]" (Corte Suprema de Justicia, 2024).

La *affectio societatis* aparece como un eje central en la conformación y permanencia de toda sociedad. La Corte Suprema de Justicia la ha descrito como la voluntad común de asociarse y cooperar activamente para alcanzar un objetivo compartido, fundada en la libertad de decisión, la igualdad entre quienes participan y la vocación de permanencia. Estos rasgos ponen de relieve tanto el carácter consensual de la relación societaria como la relevancia de la colaboración equitativa entre los socios.

Sin embargo, esta definición judicial incurre en cierto riesgo de circularidad: se explica la *affectio*

societatis a través de los mismos atributos que se supone la conforman. De allí surge la necesidad de someter a examen crítico la doctrina jurisprudencial para determinar si se requiere una noción más clara y diferenciada de este elemento esencial. Una revisión en esa dirección podría enriquecer la comprensión del concepto y su aplicación práctica, en particular en los casos de *sociedades de hecho*, donde la *affectio societatis* se deduce principalmente de los comportamientos y acciones de los asociados.

Es importante destacar que la interpretación de este concepto ha experimentado cambios dentro de la jurisprudencia colombiana. Mientras que en fallos más antiguos prevalecía la exigencia de formalidad en los acuerdos, en decisiones recientes se ha privilegiado la intención real de las partes y las conductas que evidencian el ánimo de asociarse. Esta evolución refleja un tránsito hacia un enfoque más pragmático y adaptado a las realidades sociales.

La correcta identificación de la *affectio societatis* resulta decisiva para reconocer la existencia de una sociedad de hecho, sobre todo cuando no existen pactos formales. En la práctica, la prueba de este ánimo puede surgir de elementos como el uso de una razón social, una denominación compartida o la generación de una apariencia frente a terceros de que existe una sociedad. No obstante, en lo que atañe a las relaciones internas entre los socios, la ausencia de una denominación formal o de esa apariencia frente a terceros no impide que los jueces reconozcan la existencia de una sociedad de hecho a partir de presunciones o deducciones sustentadas en los hechos.

Este análisis cobra especial relevancia en contextos complejos, como las relaciones de *concubinato*, donde la frontera entre la colaboración personal y la intención de emprender un proyecto económico conjunto puede ser difusa. Aquí, la labor de los tribunales es distinguir con cuidado entre una mera ayuda mutua y la voluntad de conformar una sociedad comercial, tarea que exige una lectura fina de las dinámicas personales y patrimoniales presentes.

La jurisprudencia en este campo muestra un esfuerzo constante por *ajustar conceptos tradicionales a escenarios sociales cambiantes*. A medida que las formas de relacionamiento, tanto personales como comerciales, se diversifican, es previsible que la noción de *affectio societatis* y otros elementos propios de las sociedades de hecho continúen transformándose.

El reconocimiento y la regulación de este tipo de sociedades, particularmente cuando surgen en el marco de relaciones personales como el concubinato, constituyen un terreno complejo y aún en construcción dentro del derecho colombiano. La interpretación flexible de categorías como la *affectio societatis* abre la puerta a proteger intereses económicos derivados de vínculos informales, aunque al mismo tiempo plantea *desafíos probatorios y jurídicos* que demandan respuestas innovadoras por parte de la doctrina y la jurisprudencia.

La sociedad comercial de hecho en el contexto del concubinato

Habiendo explorado los fundamentos generales de las sociedades comerciales de hecho y los desafíos que presenta su reconocimiento, es crucial, ahora, examinar cómo estos conceptos se aplican específicamente en el contexto del concubinato. En este apartado, "La sociedad comercial de hecho en el contexto del concubinato", se profundizará en las particularidades de esta situación, analizando cómo la jurisprudencia y la práctica legal han abordado la intersección entre las relaciones personales y comerciales en estas uniones de hecho.

El concubinato y el valor de la familia

La institución familiar es el fundamento más importante de la organización social; su evolución tiene un largo recorrido. El concubinato en el periodo romano se establecía cuando un hombre y una mujer compartían lecho y techo sin que mediara el matrimonio o la voluntad de casarse, o, queriendo, tenían impedimentos legales para hacerlo. Se los llamaba "concubinatos" (Garcés, 2018). La mujer concubina no gozaba de los derechos

de la mujer casada; la misma desigualdad ocurría con los hijos. El concubinato era visto como una unión que no estaba acorde a la moral y las buenas costumbres, y sus derechos eran segregados. En Colombia, la influencia de la Iglesia católica determinó, en buena parte de su historia, las reglas y requisitos de la unión familiar, consolidando su poder por medio de un tratado internacional especial denominado "Concordato", que estaba por encima de la legislación nacional.

Los cambios sociales y culturales, lo mismo que los análisis de los juristas, dan piso a la búsqueda de soluciones a este creciente fenómeno social que amplía la estructura familiar basada solo en el contrato matrimonial, abriendo paso al ejercicio de la voluntad individual y a la regulación del régimen patrimonial entre compañeros permanentes que viven en comunidad sin mediar el matrimonio. La legislación hará cambios importantes a partir de finales del siglo XX.

Con la expedición de la Constitución Política de la República de Colombia en 1991, se profundizaron y consolidaron los cambios legales en la institución familiar, dándole un valor superlativo, reiterando el derecho de toda persona a tener una familia y a disfrutar de ella; y el Estado está obligado a protegerla como derecho inalienable y amparándola como institución básica de la sociedad (Constitución Política de la República de Colombia, 1991, art. 5). Tal protección no se refiere a una clase determinada de familia, la apoyada por solemnidades civiles o religiosas; incluye a los llamados vínculos naturales y se amplía hasta las uniones de personas del mismo sexo.

La libertad y la igualdad ante la ley obligan al Estado y a la sociedad a recibir el mismo trato y protección de las autoridades y a gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación alguna (Constitución Política de la República de Colombia, 1991, art. 13); la Constitución de 1991 obliga a respetar la intimidad personal y familiar (Constitución Política de la República de Colombia, 1991 art. 15), de tal manera que la Carta Constitucional reconoce y establece la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, reiterando que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, y agrega que las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, los deberes y los derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil (Constitución Política de la República de Colombia, 1991, art. 42).

En el plano internacional y con base en el llamado "Bloque de Constitucionalidad", la familia y su protección se constituyen como un principio fundamental. Tal fundamento lo podemos encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1, 2 y 3); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10, numerales 1, 2 y 3); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23, numerales 1, 2, 3 y 4); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 17, numerales 1, 2, 3, 4 y 6) y, por último, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 16, literales a, b, c, d, e, f, g y h) (Defensoría del Pueblo, 2000). De tal manera, la familia tiene una sólida base de protección a nivel nacional e internacional en todos los ámbitos de la vida social, política y económica.

El concubinato y sus implicaciones patrimoniales

El *concubinato*, conocido en Colombia como *unión marital de hecho*, corresponde a una forma de convivencia entre dos personas que, sin celebrar matrimonio, construyen una relación estable, permanente y basada en la afectividad. Esta modalidad de unión obtuvo reconocimiento legal a través de la Ley 54 de 1990, modificada posteriormente por la Ley 979 de 2005. Según la normativa, se entiende por unión marital de hecho la comunidad de vida singular y duradera entre un hombre y una mujer sin vínculo matrimonial. No obstante, la Sentencia C-075 de 2007 de la Corte Constitucional amplió este concepto, reconociendo también a las *parejas del mismo sexo* dentro de esta figura.

En lo patrimonial, el concubinato se articula principalmente mediante la figura de la *sociedad patrimonial*

de hecho. Esta se configura cuando la unión se mantiene por un tiempo mínimo de dos años, siempre que ninguno de los compañeros tenga impedimentos legales para contraer matrimonio o que, existiéndolos, las sociedades conyugales previas hayan sido disueltas y liquidadas con al menos un año de antelación al inicio de la convivencia.

Una vez declarada, la sociedad patrimonial de hecho otorga a los compañeros derechos semejantes a los derivados de la sociedad conyugal en el matrimonio. Esto incluye la participación sobre los bienes adquiridos durante la convivencia, la presunción de copropiedad respecto de esos bienes y la posibilidad de solicitar su liquidación en caso de separación o fallecimiento de uno de los integrantes. Sin embargo, es fundamental precisar que esta sociedad *no surge de manera automática con la cohabitación*, sino que requiere el cumplimiento de los requisitos señalados y, en la mayoría de los casos, la correspondiente declaración judicial o notarial.

Este diseño normativo deja espacios de desprotección en varios escenarios: cuando la unión no ha alcanzado los dos años exigidos por la ley, cuando existe un impedimento matrimonial vigente y no ha transcurrido un año desde la disolución de la sociedad conyugal anterior, o cuando, aun cumpliéndose los requisitos legales, no se ha declarado formalmente la sociedad patrimonial.

Además, esta figura no siempre contempla todas las formas de colaboración económica que pueden presentarse dentro de la unión. Tal es el caso de parejas que desarrollan proyectos empresariales o actividades comerciales conjuntas, situaciones que la regulación de la sociedad patrimonial no abarca de manera explícita.

Ante estas limitaciones, surge la pregunta de si la *sociedad comercial de hecho* podría funcionar como un mecanismo alternativo de protección jurídica para los compañeros permanentes, especialmente en aquellos supuestos donde la sociedad patrimonial de hecho no llega a configurarse o resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los intereses económicos generados en la relación.

Vacíos legales en la protección patrimonial de las uniones de hecho

A pesar de los avances normativos y de la evolución de la jurisprudencia en Colombia, las *uniones de hecho* aún presentan vacíos legales que colocan a los concubinos en escenarios de marcada vulnerabilidad económica. Uno de los puntos más críticos es el requisito de convivencia mínima de *dos años* establecido en la **Ley 54 de 1990**, que deja sin amparo a aquellas parejas que, aunque hayan hecho aportes significativos a la vida común, no alcanzan dicho plazo. A esto se suman los impedimentos legales para contraer matrimonio, como la existencia de vínculos previos no disueltos, que dificultan el reconocimiento de la sociedad patrimonial, generando desprotección en momentos decisivos. Del mismo modo, la exigencia de una declaración formal para constituir la sociedad patrimonial de hecho se convierte en un obstáculo adicional, especialmente para quienes desconocen este requisito.

Otro elemento problemático es la falta de regulación específica en torno a las *actividades comerciales conjuntas* de las parejas, lo cual puede derivar en una distribución desigual de beneficios al momento de la ruptura. Si bien se han dado pasos en el reconocimiento de *derechos sucesorales* para los compañeros permanentes, persisten limitaciones frente a los derechos de los cónyuges formalmente casados, sobre todo cuando la unión no se encuentra registrada. La **Sentencia C-193 de 2016 de la Corte Constitucional** subrayó precisamente la importancia de ampliar la protección de estas uniones, recordando que la familia no se restringe únicamente a vínculos jurídicos o de sangre. En consecuencia, la ausencia de un marco normativo robusto continúa siendo motivo de debate en la doctrina y en la jurisprudencia, lo que pone de relieve la urgencia de reformas que garanticen mayor equidad y cobertura.

Frente a estos vacíos, resulta pertinente explorar *mecanismos alternativos de protección patrimonial*, entre ellos, la *sociedad comercial de hecho*, especialmente en aquellos casos donde la sociedad patrimonial no se conforma o no alcanza a cubrir la complejidad de las relaciones económicas entre los concubinos.

La sociedad comercial de hecho como alternativa de protección

La *sociedad comercial de hecho* se presenta como una vía jurídica que podría contribuir a suplir las falencias en la protección patrimonial de las uniones de hecho. Esta figura, regulada en el Código de Comercio, se perfila como una herramienta para salvaguardar los intereses económicos de las parejas en concubinato.

Su aplicación a las relaciones económicas de los concubinos encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que, en sentencia del 22 de junio de 2016, sostuvo que "nada impide que entre concubinos pueda existir una sociedad de hecho, siempre que se demuestre que la finalidad de la misma no fue la de crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato" (Sentencia SC8225-2016, 2016). Esta postura habilita a que las parejas puedan ser reconocidas como socios de hecho en actividades comerciales conjuntas, más allá de su vínculo afectivo.

Ventajas frente a la sociedad patrimonial de hecho

- No exige un mínimo de tiempo de convivencia (Monroy Cabra, 2017).
- Puede coexistir con impedimentos para contraer matrimonio, siempre que estos no afecten la capacidad contractual (Concepto 220-000105, 2008).
- Reconoce de manera directa los aportes en proyectos comerciales específicos (Narváez García, 2008).
- Ofrece una alternativa de protección cuando la sociedad patrimonial no se constituye o resulta insuficiente (Arrubla Paucar, 2012).

Requisitos para su configuración

- Aportes mutuos de los concubinos.
- Participación en utilidades y pérdidas.
- Existencia del *affectio societatis*.
- Que el objeto de la sociedad no sea fomentar o perpetuar el concubinato.

Pese a sus ventajas, la sociedad comercial de hecho aplicada al concubinato enfrenta importantes retos:

- La dificultad de probar que existe una verdadera actividad comercial diferenciada de la convivencia doméstica.
- La posible colisión con las normas de la sociedad patrimonial de hecho.
- La responsabilidad solidaria e ilimitada que podría recaer sobre los compañeros (Peña Nossa, 2017).

En este sentido, la Corte ha destacado que la existencia de la sociedad debe probarse mediante evidencias claras de aportes, continuidad en las actividades y una separación efectiva de los bienes personales frente a los de la sociedad. La carga probatoria exige que los actos de colaboración excedan la mera convivencia, demostrando una actividad económica concreta y constante.

La *sociedad comercial de hecho* se perfila como un instrumento útil para reconocer y proteger los intereses patrimoniales de los concubinos en contextos donde la sociedad patrimonial no opera. No obstante, su viabilidad depende de un análisis detallado de cada caso y de una interpretación flexible por parte de los jueces que permita distinguir entre la cooperación afectiva y la verdadera voluntad de asociarse económicamente.

La jurisprudencia colombiana ha desempeñado un papel determinante en la definición y aplicación del concepto de sociedad comercial de hecho dentro del marco de las uniones de hecho o concubinato. A lo largo del tiempo, distintas sentencias han trazado los criterios que orientan su reconocimiento y han permitido distinguirla de otras figuras jurídicas.

- **Sentencia del 30 de noviembre de 1935, Corte Suprema de Justicia**. Este fallo es considerado un hito, pues sentó las bases para admitir la existencia

de sociedades de hecho, incluso entre concubinos. La Corte señaló que la sociedad debía inferirse a partir de hechos concretos y reiterados de explotación común, siempre que existiera:

» coordinación de esfuerzos en una misma actividad;

» participación paralela y simultánea de los presuntos socios en la búsqueda de beneficios.

» igualdad entre las partes, sin subordinación de una frente a la otra, como en un contrato laboral o de mandato.

» actividades efectivas orientadas a generar utilidades, y no una mera custodia o tenencia de bienes comunes.

- **Sentencia del 22 de junio de 2016, Corte Suprema de Justicia**. Este pronunciamiento reviste gran importancia porque reafirmó que entre concubinos sí puede existir una sociedad de hecho, siempre que se demuestre que su finalidad es genuinamente económica y no la de sostener o fomentar la relación de pareja en sí misma.

- **Sentencia del 24 de junio de 2008, Corte Suprema de Justicia**. En este caso, la Corte recordó que la sociedad de hecho exige la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de sociedad: pluralidad de asociados, aportes recíprocos, voluntad de asociarse y reparto de ganancias y pérdidas. Asimismo, insistió en la necesidad de diferenciar la colaboración doméstica propia de la vida en pareja de una verdadera relación societaria.

- **Sentencia T-403 de 2011–Corte Constitucional.** Aunque centrada en la unión marital de hecho, esta decisión subrayó que la protección patrimonial debe extenderse a las parejas del mismo o de distinto sexo que, sin estar casadas, comparten una vida en común. Esta reflexión, por analogía, fortalece la posibilidad de reconocer sociedades comerciales de hecho en el concubinato.

- **Sentencia del 22 de octubre de 1993, Corte Suprema de Justicia**. Aquí se precisó la diferencia entre la sociedad patrimonial de hecho y la sociedad comercial de hecho en el concubinato. Mientras la primera surge de manera automática tras la convivencia prolongada, la segunda requiere probar los elementos propios del contrato de sociedad.

- **Sentencia del 30 de agosto de 2011, Corte Suprema de Justicia**. En este fallo se hizo énfasis en la carga de la prueba: quien alegue la existencia de una sociedad de hecho debe demostrar todos los elementos que la configuran, pues no basta con la sola convivencia o con la existencia de una colaboración afectiva.

El análisis de estas decisiones refleja la evolución de la jurisprudencia hacia un mayor reconocimiento de los derechos patrimoniales de las parejas en concubinato. Sin embargo, también evidencia que los jueces mantienen un estándar probatorio exigente para evitar confundir la vida en pareja con la existencia de una empresa común. Esto plantea retos importantes para quienes buscan que se reconozca judicialmente la sociedad comercial de hecho, pero, al mismo tiempo, abre una alternativa de protección patrimonial en escenarios donde otras figuras legales, como la sociedad patrimonial de hecho, no son aplicables.

En la práctica, muchas parejas no alcanzan a cumplir con los requisitos legales para constituir una sociedad patrimonial de hecho, lo que las deja en situación de desventaja económica. Frente a ello, la sociedad comercial de hecho emerge como una herramienta flexible, capaz de reconocer los aportes económicos individuales y colectivos realizados en proyectos o actividades conjuntas, sin depender del tiempo de convivencia.

Esta figura resulta especialmente valiosa en relaciones en las que uno de los compañeros contribuye de forma significativa al desarrollo económico del otro, sin que exista un reconocimiento jurídico formal. A diferencia de la sociedad patrimonial, que exige un

periodo mínimo y condiciones específicas, la sociedad comercial de hecho puede validarse desde el inicio de la actividad económica conjunta.

No obstante, su utilización requiere claridad en la prueba de la intención societaria, lo que implica documentar las actividades comerciales, establecer acuerdos sobre la distribución de utilidades y diferenciar de manera nítida la colaboración personal de la económica.

En definitiva, la jurisprudencia colombiana ha ido delineando un marco que permite a los concubinos proteger sus intereses patrimoniales a través de la sociedad comercial de hecho. Aunque persisten obstáculos probatorios y tensiones normativas, esta figura ofrece un espacio de reconocimiento y equidad en relaciones que, pese a no estar formalizadas mediante el matrimonio, incluyen dinámicas económicas que merecen respaldo jurídico.

Referencias

Arrubla Paucar, J. A. (2012). *Contratos mercantiles: Teoría general del negocio mercantil*. Legis.

Constitución Política de la República de Colombia. (1991). Asamblea Nacional Constituyente. Secretaría del Senado. https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (1935). Sociedades de hecho. *Gaceta Judicial, 42*(1897-1903). https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/mujer/mujer_/Providencias/SC%20%2830%2011%201935%29.pdf

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (1954). Prueba de la existencia de una sociedad de hecho. *Gaceta Judicial, 78*(2144).

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (1962). Sociedad de hecho. *Gaceta Judicial, 99*(2257-2259).

Defensoría del Pueblo. (2000). *Manual de calificación de conductas violatorias de los derechos humanos*. Ministerio Público.

Garcés, G. H. (2018). Perspectiva histórica del concubinato en Colombia. *Revista de Derecho, 9*, 91-111. https://revistaderecho.uchile.cl/index.php/RDEP/article/view/48392

Monroy Cabra, M. G. (2017). *Derecho de familia y de menores*. Librería Ediciones del Profesional.

Narváez García, J. I. (2008). *Teoría general de las sociedades*. Legis.

Peña Nossa, L. (2017). *De las sociedades comerciales: Énfasis en sociedad por acciones simplificadas*. Ecoe.

Sociedades de Hecho. (1935, 30 de noviembre). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (Eduardo Zuleta Ángel, M. P.). (1935). *Gaceta Judicial, 42*(1901-1902), 476-484. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20XLII%20n.%201897-1903%20(1935-1936).pdf?page=476

Sentencia SC3085. (2024, 18 de diciembre). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. (Octavio Augusto Tejeiro Duque, M. P.). Radicación N.º 76109-31-10-002-2021-00107-01. https://archivodigitalapi.cortesuprema.gov.co/share/2024/12/Sentencias/SC3085-2024.pdf

Sentencia 4143. (1993, 22 de octubre). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

Sentencia C-1035 de 2008. (2008). Corte Constitucional de Colombia (Jaime Córdoba Triviño, M. P.).

Sentencia C-193 de 2016. (2016). Corte Constitucional de Colombia (Luis Ernesto Vargas Silva, M. P.).

Sentencia del 22 de octubre de 1993. (1993, 22 de octubre). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (Pedro Lafont Pianetta, M. P.).

Sentencia SC8225. (2016, 22 de junio). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (Ariel Salazar Ramírez, M.P).

Sentencia SC8225-2016. (2016). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (Ariel Salazar Ramírez, M. P.).

Sentencia T-403 de 2011. (2011). Corte Constitucional de Colombia (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, M. P.).

Sentencia 3639. (1993, 6 de mayo). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.

Sentencia 6094. (2001, noviembre 30). Corte Suprema de Justicia (Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, M. P). https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_civil_e._no._s-216-2001_de_2001.aspx#/

Concepto 220-000105. (2008, enero 3). Superintendencia de Sociedades.

Ley 1258. (2008, 5 de diciembre). Congreso de Colombia. Diario Oficial N.º 47194. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34130

Sentencia 11001-3103-012-1999-01957-01. (2011, agosto 30). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (William Namén Vargas, M. P.). https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_civil_e._no._1100131030121999-01957-01_de_2011.aspx#/

Sentencia 11001-3103-012-1999-01957-01. (2011, agosto 30). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (William Namén Vargas, M. P.). https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_civil_e._no._1100131030121999-01957-01_de_2011.aspx#/

Sentencia SC2719. (2022, 1.º de septiembre). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, M. P.). Radicación N.º 11001-31-03-020-2018-00266-01. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2022/09/SC2719-2022-2018-00266-01.pdf

Francisco José de Caldas y la tecnociencia en la colonialidad neogranadina

Jairo Alberto Merlo Pinzón*

* Doctor en Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona; jefe del Centro de Investigaciones Sociojurídicas Jorge Eliécer Gaitán de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA

ci.sociojuridicas@unimeta.edu.co

https://orcid.org/0000-0002-1957-3218

Resumen

El *Semanario del Nuevo Reino de Granada*, surgido en el siglo XVIII, marcó un hito fundamental en la historia de la tecnociencia en la región, al consolidarse como la primera publicación científica del Virreinato. Este periódico no solo funcionó como un vehículo de divulgación, sino también como emblema del pensamiento ilustrado criollo, ofreciendo un espacio en el que se difundieron ideas científicas y culturales que buscaban fortalecer la identidad intelectual de la época. Entre sus contribuciones más relevantes destaca el ensayo "El influjo del clima sobre los seres organizados", escrito por Francisco José de Caldas. En este texto, el sabio neogranadino no solo refutó las teorías europeas que sostenían la supuesta inferioridad de los habitantes americanos, sino que también defendió la legitimidad del conocimiento producido en el territorio, situando la ciencia como herramienta estratégica para el progreso social y político. Gracias a su papel en el *Semanario*, Caldas se consolidó como un actor clave en la validación del saber local, transformando su labor en un gesto de resistencia cultural y política frente a las narrativas coloniales que desestimaban el aporte criollo. No obstante, aunque estas iniciativas contribuyeron a reforzar la identidad y a cimentar los procesos de independencia, también dejaron entrever las tensiones de la colonialidad. En efecto, la búsqueda de legitimación del sujeto criollo a través del discurso tecnocientífico sirvió, en parte, como mecanismo de control sobre el territorio, dando lugar a nuevas expresiones de biopolítica en el ámbito local.

Palabras clave: colonialidad, tecnociencia, neogranadino, conocimiento, poder.

> Caldas usó la ciencia para afirmar la identidad criolla y disputar el poder colonial.

Abstract

The *Semanario del Nuevo Reino de Granada*, founded in the 18th century, marked a fundamental milestone in the history of technoscience in the region, establishing itself as the first scientific publication in the Viceroyalty. This serial publication served as a vehicle for dissemination; even more, it was an emblem of Creole Enlightenment thought, providing a space for the dissemination of scientific and cultural ideas that sought to strengthen the intellectual identity of the era. Among its most relevant contributions is the essay "El influjo del clima sobre los seres organizados" ("The Influence of Climate on Organized Beings"), written by Francisco José de Caldas. In this text, this New Granadan scholar refuted European theories that sustained the supposed inferiority of the inhabitants of the Americas; furthermore, he defended the legitimacy of the knowledge produced in the territory, positioning science as a strategic tool for social and political progress. Thanks to his role in the *Semanario*, Caldas proved himself as a key player in confirming local knowledge, transforming his work into a gesture of cultural and political resistance to colonial narratives that dismissed the Creole contribution. However, while these initiatives contributed to strengthening identity and cementing the independence process, they also revealed the tensions of coloniality. Indeed, the search for legitimization of the Creole subject through techno-scientific discourse served, in part, as a mechanism of territorial control, giving rise to new expressions of biopolitics at the local level.

Keywords: coloniality, technoscience, neogranadino, knowledge, power.

Introducción

El *Semanario del Nuevo Reino de Granada* se consolidó como la primera publicación científica producida en el Virreinato de la Nueva Granada, un espacio editorial del siglo XVIII que abrió camino a la divulgación del saber ilustrado criollo. Esta revista no solo fue un medio para compartir información, sino que también se convirtió en un canal estratégico para la circulación de ideas científicas y culturales en la región, desempeñando un papel decisivo en la configuración del pensamiento ilustrado latinoamericano.

Sus páginas abordaban múltiples campos del conocimiento —geografía, medicina, astronomía, entre otros—, siempre bajo la premisa de la observación directa y el estudio sistemático de la naturaleza. De esta manera, el *Semanario* buscaba no solo educar, sino también fomentar entre los habitantes del Virreinato un sentido de identidad y apropiación del conocimiento producido en su propio territorio. Entre sus contribuciones más influyentes se encuentra el ensayo "El influjo del clima sobre los seres organizados", escrito por Francisco José de Caldas (1768-1816). Con este trabajo, Caldas fue más allá de la simple recopilación de datos útiles para la administración del territorio: planteó un discurso que reivindicaba la dignidad y capacidad intelectual de los criollos frente a las corrientes naturalistas europeas que los catalogaban como inferiores.

Al asumir la dirección del *Semanario*, Caldas buscó construir un discurso científico con un alcance doble: comprender los fenómenos naturales y, a la vez, resaltar sus implicaciones sociales y políticas. Los ilustrados criollos, al expresarse mediante un lenguaje científico, aspiraban a instaurar un orden que les permitiera ejercer control sobre su entorno y fortalecer su papel en los procesos de emancipación. Esta perspectiva, que puede leerse en clave biopolítica[1] (Castro-Gómez, 2014), apuntaba a demostrar que el conocimiento sobre el clima y su influencia en los seres vivos era un pilar para el progreso y la prosperidad de la Nueva Granada, situando la tecnociencia como una herramienta de transformación social.

Asimismo, la publicación de memorias en el *Semanario* se convirtió en una estrategia de resistencia frente a las críticas externas, reivindicando la capacidad de los neogranadinos de aportar al conocimiento universal. Este gesto dotaba al saber local de un carácter político y cultural, desafiando las narrativas coloniales que subestimaban el valor intelectual de los americanos.

El análisis de Caldas sobre el clima y su impacto en los seres organizados trascendió lo puramente científico, transformándose en una afirmación identitaria que posicionaba a los criollos como sujetos legítimos de conocimiento y de poder. Con ello vinculó el quehacer científico con la construcción de una identidad nacional en ciernes, donde el clima se erigía como elemento clave para comprender la riqueza y diversidad del territorio neogranadino.

Colonialidad neogranadina

A finales del siglo XX, comenzó a consolidarse en América Latina un grupo de investigadores que, desde un enfoque interdisciplinario, elaboró una crítica profunda al binomio modernidad/colonialidad. Entre ellos destacan Ramón Grosfoguel, Santiago Castro y Aníbal Quijano, quienes subrayaron la importancia de reconocer que este fenómeno hunde sus raíces en la conquista de América en 1492. Con aquel acontecimiento, Europa se posicionó como centro del sistema-mundo no solo en el plano político y económico, sino también en dimensiones culturales, sociales y simbólicas (Pachón, 2008).

Diversos autores han señalado que el eurocentrismo, herencia directa del dominio colonial, sigue marcando la vida contemporánea. Desde esta perspectiva, el colonialismo puede entenderse como una relación política y económica en la cual la soberanía de un pueblo queda subordinada al poder de otro, instaurando

1 Foucault (1987) entiende la biopolítica como una forma particular de gobierno sustentada en lo que denomina *biopoder*. Este concepto hace referencia al ejercicio del poder político sobre las dimensiones más cotidianas y vitales de la existencia humana, desplazando la visión clásica de la soberanía. Más que centrarse en el mando directo o en la imposición de la ley, se orienta hacia la gestión de la vida misma y hacia los procesos mediante los cuales los individuos y las comunidades configuran su propia subjetividad.

un patrón de control y explotación de los territorios conquistados. A su vez, la categoría de colonialidad alude a un entramado de poder surgido del colonialismo moderno, que articula el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones sociales en torno al mercado capitalista global y a la construcción de la idea de raza (Maldonado-Torres, 2007, p. 131).

Así, aunque las expresiones visibles del colonialismo hayan sido desmontadas, la colonialidad permanece como una lógica de dominación que atraviesa múltiples dimensiones de la existencia (Merlo Pinzón, 2019). Esta distinción resulta clave para comprender cómo dicho patrón se ha enraizado en las formas de ser, conocer, ejercer autoridad y relacionarse. Hoy en día, el control no requiere la intervención directa de una potencia extranjera, pues opera desde las propias dinámicas locales. Como señalan Castro-Gómez y Restrepo (2008), mientras el colonialismo constituye un episodio histórico delimitado, la colonialidad se manifiesta como una estructura más amplia y persistente, sustentada en la naturalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas. Dichas jerarquías sostienen la explotación a escala global y no solo mediante la violencia física, sino también a través de la interiorización del dispositivo colonial como forma legítima de relacionarse con la naturaleza, con la sociedad y con la subjetividad (Castro-Gómez, 2014). Este proceso reconfiguró las estructuras cognitivas, emocionales y volitivas de los sujetos, moldeándolos bajo la lógica de la "civilización" como un "nuevo hombre" diseñado a imagen del europeo blanco.

El colonialismo también puede pensarse como un proceso de circulación, donde el conocimiento se difunde y se recibe, revelando la complejidad de la producción y el movimiento de saberes. En este marco, la circulación de la tecnociencia —ya sea a través de innovaciones, transferencias, plantas, artefactos o procedimientos— debe entenderse como parte de un proceso colonial de larga duración (Cuvi, 2018, 2020).

Hacia finales del siglo XVIII, en el Virreinato de la Nueva Granada, se configuró un proyecto ilustrado de *cosmopolis* articulado en torno al "dispositivo de la blancura". Ser blanco no significaba únicamente el color de piel, sino la posesión de símbolos y prácticas que incluían creencias religiosas, formas de vestir, títulos nobiliarios, comportamientos sociales y modos de producir y transmitir conocimiento. Esta escenificación cultural funcionaba como marca de prestigio y como medio para acumular capital simbólico (Castro-Gómez, 2014). En este entramado, ciencia, política y geografía se fusionaron bajo los ideales de la Ilustración y la modernidad en la Nueva Granada (Cardona Rodas, 2017).

El análisis de la enfermedad en el contexto colonial también formó parte de estas dinámicas. Los cuadros de castas y las representaciones artísticas incorporaron explicaciones basadas en temperamentos y humores, patologizando los cuerpos de los habitantes no europeos y asociándolos con inferioridad, degeneración o debilidad. La medicina ilustrada, centrada en la clasificación de especies, concebía la enfermedad como una entidad autónoma y vinculaba su propagación con factores ambientales, como el clima, el tipo de suelo o los olores fétidos (Foucault, 2004).

En este mismo periodo, las reformas borbónicas reorganizaron la administración colonial y modernizaron la extracción de recursos. Bajo esta lógica, se consolidó una colonialidad del poder que trasladó los principios ilustrados a las dinámicas locales, sosteniéndose en oposiciones binarias como bárbaro/civilizado, blanco/no blanco o culto/inculto. Esta estructura legitimó la esclavitud y mantuvo la supremacía de los europeos y criollos blancos, configurando una sociedad fuertemente jerarquizada.

Las pinturas de castas y los discursos de limpieza de sangre, extendidos en Nueva España, Perú y la Nueva Granada, son expresiones claras de esta biopolítica imperial. Dichos mecanismos sirvieron para clasificar poblaciones, promover estrategias de blanqueamiento y consolidar la hegemonía europea mediante un "pathos de la distancia"[2], que reafirmaba la centralidad de lo

2 El "pathos de la distancia", expresión asociada al pensamiento de Friedrich Nietzsche, alude a una forma particular de relacionarse con la realidad.

europeo sobre lo local. Los criollos, al interiorizar el discurso de la limpieza de sangre, se legitimaron como grupo dominante y continuadores del linaje español, reproduciendo así el control sobre las castas.

La biopolítica neogranadina, entendida como el conjunto de discursos y prácticas orientadas a regular la vida de la población, estuvo estrechamente ligada a la colonialidad del saber. Durante los siglos XVIII y XIX, las élites criollas, al igual que sus pares peninsulares, emplearon discursos científicos y naturalistas para legitimar su autoridad y organizar la sociedad en función de sus intereses. Las teorías europeas sirvieron para despojar a pueblos indígenas y afrodescendientes de sus saberes, reduciendo la riqueza cultural y biológica de la región a lecturas eurocéntricas que justificaban su exclusión.

No obstante, también surgió una intelectualidad criolla que intentó desafiar este orden. Figuras como Francisco José de Caldas buscaron construir un conocimiento propio que reivindicara la identidad criolla y demostrara la capacidad de los neogranadinos para contribuir al saber universal. Aunque estos esfuerzos no escapaban por completo a las lógicas coloniales, constituyeron una forma de resistencia cultural que permitió a los criollos posicionarse como protagonistas en la construcción de una nueva nación.

La biopolítica neogranadina no fue solo un mecanismo de control, sino también un escenario de disputa en el que los discursos científicos podían servir tanto para reproducir jerarquías como para cuestionarlas. La noción de colonialidad del saber permite comprender cómo el conocimiento fue utilizado para estructurar desigualdades, pero también cómo podía resignificarse como herramienta de emancipación y afirmación identitaria.

El orden social a partir del discurso sobre el clima

Francisco José de Caldas analiza la influencia del clima sobre el comportamiento humano como respuesta a una carta enviada por don Diego Martín Tanco (1749-1812), quien le pedía aclarar su postura. En su reflexión, Caldas plantea dos visiones contrapuestas: una que niega cualquier efecto del clima en los seres vivos y otra que le atribuye un poder absoluto. Su argumento se apoya en la "observación", entendida como un ejercicio basado en la razón y la experiencia, con el cual busca ir más allá de lo expuesto por figuras reconocidas como Newton, Saint Pierre, Buffon o Montesquieu. Para él, la observación no solo debe garantizar rigor científico, sino también ayudar a identificar leyes universales de la naturaleza.

De acuerdo con Santiago Castro, Caldas intentaba insertar sus reflexiones dentro de la "historia universal" europea a través del marco de la "historia natural". Este esfuerzo revela el interés de construir un conocimiento local capaz de dialogar con el saber europeo, otorgando valor a la observación minuciosa y al análisis crítico como base de una ciencia que trascendiera las tradiciones heredadas.

Desde este punto de vista, la Expedición Botánica de la Nueva Granada es una *Entdeckungsreise*, una especie de "segunda conquista" organizada y ejecutada, ya no directamente por los europeos, sino por sus descendientes americanos, los botánicos criollos (Castro-Gómez, 2014).

Caldas buscaba proyectar una aparente neutralidad que le permitiera sostener sus ideas sobre la relación entre clima, alimentación y ser humano. En su análisis incluyó factores como la presión atmosférica, la geografía montañosa, los vientos, la vegetación, las lluvias o los alimentos del Nuevo Reino de Granada. Esta aproximación no era inocente: expresaba tanto un deseo de reconocimiento internacional como una estrategia para consolidar un discurso que fortaleciera la autonomía política. En ese sentido, su obra puede leerse dentro de un horizonte biopolítico, en tanto orientaba la organización de la sociedad a partir de información útil para un gobierno ilustrado.

Consiste en tomar cierta distancia crítica frente a los valores y condiciones dominantes en la sociedad, lo que posibilita una mirada más lúcida y profunda. Esta actitud implica situarse en un plano distinto, desde el cual se pueden examinar y juzgar las dinámicas sociales y morales con un sentido de elevación y dignidad que trasciende la aceptación pasiva de lo establecido.

Sin embargo, su pensamiento estaba atravesado por referentes europeos. En lo antropológico, concebía al ser humano como una combinación de "tierra" y "espíritu", una idea que refleja la impronta cristiana de su tiempo, según la cual el hombre procede del "*humus*" y recibe el soplo divino. De ahí que afirmara que el cuerpo, al verse afectado por el clima, influye también en el espíritu y, en consecuencia, en las inclinaciones, virtudes y vicios del individuo (de Caldas, 2018, p. 141). Aunque parecía inclinarse hacia una visión determinista que otorgaba al clima un papel decisivo, matizaba su postura insistiendo en la "voluntad libre" como elemento que preservaba la autonomía moral, lo que refleja el trasfondo religioso que permeaba la época (Castro-Gómez, 2014).

En sus investigaciones, Caldas reconocía que las condiciones climáticas delimitaban la distribución y características de las especies. Herramientas como el termómetro de Réaumur o el barómetro eran, para él, esenciales para medir la vida de la naturaleza y también para orientar el destino político y económico del país. El conocimiento preciso del territorio —sostenía— se transformaba en un recurso de poder y en un medio para la acumulación de capital.

Gracias a este enfoque, sus aportes fueron reconocidos en la comunidad científica internacional, aunque siempre atravesados por un horizonte eurocéntrico. Como señala Castro-Gómez (2014), los científicos de la periferia quedaban relegados a ser "usuarios" del saber producido en Europa, aplicándolo en sus contextos locales para diferenciarse de los sectores subalternos.

La cordillera andina, con su diversidad de climas y contrastes frente a las tierras bajas, ofreció a Caldas un laboratorio natural para observar la variedad física y cultural del continente. En este marco, defendió el barómetro como herramienta indispensable para orientar no solo la agricultura o el comercio, sino incluso la medicina y la moral (Castro-Gómez, 2014). Con estas mediciones buscaba construir un "cuadro" que clasificara los distintos grupos sociales, incluyendo a indígenas, mestizos y mulatos, vinculando sus características físicas y morales a factores ambientales. Como advierte Santiago Castro-Gómez (2014), este enfoque formó parte de un espacio antropológico ilustrado que dio origen a la etnología moderna, estableciendo relaciones causales entre identidad étnica y geografía.

Entre sus estudios más relevantes figura el análisis de las aguas de la Nueva Granada, donde señalaba la relación entre ciertos ríos y enfermedades como el coto o la escrófula. Según su hipótesis, algunos cursos transportaban minerales dañinos, quizá hierro en ácido sulfúrico, que afectaban gravemente la salud. En su lectura, estos males producían individuos limitados físicamente, considerados una carga para el Estado. Por ello, insistía en modificar las prácticas relacionadas con el consumo de agua y en promover hábitos de higiene, como ya ocurría en Cartagena, para evitar una crisis que, calculaba, podría afectar hasta la mitad de la población en un par de décadas.

Este proyecto científico no se limitaba a la observación de la naturaleza, sino que aspiraba a fundar un orden social más racional, capaz de prevenir riesgos y organizar la vida colectiva. En términos actuales, sus planteamientos se acercan a lo que hoy llamaríamos una biopolítica: un intento de regular la vida social a través de la ciencia, con el fin de garantizar la salud, la productividad y el futuro de la sociedad neogranadina.

La competencia de los ilustrados neogranadinos

José Celestino Mutis emprendió la tarea de aplicar la taxonomía de Linneo al estudio de la flora y fauna del Virreinato de la Nueva Granada. Su método respondía a los ideales de la modernidad y, en el marco de las reformas borbónicas, buscaba clasificar los recursos naturales de manera sistemática para facilitar su explotación económica. A lo largo de su trayectoria, Mutis intentó armonizar las nuevas corrientes filosóficas y científicas con el orden político y religioso vigente. Sin embargo, el contacto con la ciencia moderna, la exploración de los recursos locales y la búsqueda de alternativas pedagógicas llevaron a los criollos ilustrados a transitar hacia formas de pensamiento más secularizadas, lo que, con el tiempo, alimentó el deseo de independencia respecto

de España. En este sentido, los ilustrados asumieron las implicaciones políticas de la nueva filosofía solo de manera gradual y secundaria (Houghton y Tovar, 1991).

En este escenario, el estudio de la historia natural en el Virreinato no se limitó a clasificar especies: también contribuyó a la formulación de categorías raciales que reforzaban el orden colonial. Desde la óptica de la colonialidad, lo que se revela es un proyecto epistémico centrado en Europa, que articula saber y poder, enraizados en la historia colonial y en la configuración del continente. Conceptos como espacio, cuerpo y representación se entrelazan aquí en una biopolítica imperial que racializa las diferencias bajo el prisma ilustrado.

Las reformas borbónicas del siglo XVIII acentuaron este proceso. En el campo de la historia natural, disciplinas como la botánica, la medicina, la economía, la zoología o la nosología se combinaron en un esfuerzo taxonómico que, más allá de su interés científico, respondía a una narrativa colonial destinada al control de las corporalidades racializadas y a la organización de una América vista como territorio subordinado. Así, las investigaciones de Mutis reflejan un enfoque eurocéntrico en el que la modernidad y la colonialidad se presentan como dos caras de un mismo proyecto: producir conocimiento al tiempo que se establecen jerarquías raciales.

Este marco supone entender tanto los cuerpos como los espacios desde la noción de "degeneración", donde la blancura y la razón ilustrada europea se constituyen como referentes. La colonialidad del poder se expresa, entonces, en las estructuras de dominación que Europa impone sobre América, proyectando la imagen de un "hombre moderno" modelado a semejanza del sujeto blanco occidental. Una de las formas en que se materializa este dominio es a través de la interpretación del cuerpo bajo categorías de lo *mismo* y lo *otro*, que reproducen la oposición bárbaro/civilizado. Así, la construcción del cuerpo moderno en América estuvo atravesada por la mirada europea, que intentaba apartarse de la tradición hipocrático-galénica y de la somatopolítica eclesiástica. De allí surge lo que Castro-Gómez denomina un "*pathos* de la distancia" (2014, pp. 81-89): es decir, la diferenciación étnica entre el cuerpo blanco y el cuerpo americano. Esta visión se inscribió en el proyecto ilustrado de la historia natural del siglo XVIII (Cardona Rodas, 2017).

Mutis y Humboldt fueron exaltados como "sabios" y recibieron reconocimiento, aunque no siempre en igualdad de condiciones. Mutis, en particular, mostraba admiración hacia los europeos, al punto de admitir en su *Memoria* de 1805 que aún tenía mucho que aprender sobre las quinas, reconociendo esa sabiduría en el "Jefe ilustrado [Mutis] que hoy gobierna esta colonia" (Caldas, 1966, p. 259). Sin embargo, los europeos solían marginarlo de sus publicaciones o no darle el crédito correspondiente (Cuvi, 2022).

Michel Foucault, en *Vigilar y castigar* (2002), utiliza el panóptico como metáfora de un dispositivo de saber-poder: un punto de observación que regula sin ser visto. Esta idea permite pensar que, aunque los textos de la época no nombran directamente a los criollos, implícitamente los ubican en una posición de "observadores" que describen, clasifican y organizan a la población para gobernarla mediante las herramientas del conocimiento occidental. No obstante, ellos mismos eran observados por la "otredad europea", que los reducía a transmisores del saber y de las lógicas de poder coloniales. De este modo, mientras buscaban independencia, reproducían en realidad los mecanismos de una "segunda conquista", donde el esnobismo intelectual convertía a los otros habitantes de la Nueva Granada en objetos de estudio, invisibilizados bajo la retórica del progreso.

La élite criolla se presentaba como capaz de autogobernarse gracias a su conocimiento del territorio, lo cual le permitía generar discursos de autoridad que pretendían justificar una independencia todavía atada a los modelos franceses e ingleses. Este gesto, sin embargo, estaba marcado por una actitud ambivalente: al inicio, los criollos mostraban más admiración y dependencia que crítica, lo que se tradujo en una especie de "autosilencio", reforzado por el silenciamiento que imponían figuras como Humboldt. Solo con el tiempo comenzó a manifestarse cierta inconformidad, incluso hacia Mutis, aunque ya era difícil revertir la narrativa establecida.

En cuanto al conocimiento local, la postura de Caldas resulta contradictoria. En algunos de sus escritos minimizaba los saberes indígenas y de las comunidades locales, mientras que en otros reconocía su ingenio. Señalaba, por ejemplo, que los artesanos lograban, con gran habilidad, mejorar y simplificar instrumentos y técnicas en el trabajo de las fibras, superando a sus "maestros", los españoles (Caldas, 2016j, p. 211). No obstante, pasaba por alto que los pueblos originarios ya contaban con tradiciones consolidadas de tejido e hilado (Cuvi, 2020, p. 75). Esta ambivalencia refleja cómo el propio Caldas estaba atravesado por la lógica colonial, reproduciendo una imagen que él mismo había interiorizado (Cuvi, 2020, p. 74).

Conclusión

Los aportes de Francisco José de Caldas no solo sientan las bases de un conocimiento científico orientado a descifrar los fenómenos de la naturaleza, sino que también se convierten en un medio decisivo de afirmación cultural y de reivindicación de la identidad criolla en la Nueva Granada. En un contexto marcado por la hegemonía europea y por discursos que desvalorizaban a los pueblos americanos —como las teorías de Hegel sobre su presunta inferioridad (Hegel, 2017)—, Caldas se erige en defensor de la capacidad intelectual y cultural de los neogranadinos. Su obra representa, así, un símbolo de resistencia frente a las narrativas coloniales que buscaban deslegitimar el conocimiento local (Vanegas Useche, 2019).

La labor de Caldas al frente del *Semanario* trasciende la simple divulgación de ideas científicas; se convierte en una herramienta política orientada a configurar un orden social respaldado por la ciencia (Nieto Olarte, 2009). El uso de un lenguaje técnico y riguroso permitía a los criollos ilustrados no solo compartir su visión del mundo, sino también reclamar un espacio en la jerarquía social y política de la época. Este proyecto adquiere un carácter biopolítico al sostener que comprender el clima y su incidencia en los seres vivos era esencial para garantizar el desarrollo y la prosperidad del territorio (Villegas Vélez, 2013). De este modo, el clima se transformaba en un recurso discursivo clave para legitimar la capacidad de los criollos en la gestión del entorno y en la construcción del progreso colectivo.

La publicación de memorias en el *Semanario* funcionó también como una estrategia de resistencia frente a las críticas externas. Al otorgar valor al saber local y colocarlo en diálogo con el europeo, Caldas y sus contemporáneos pretendieron disputar el monopolio de la autoridad científica (Gómez-Gutiérrez, 2018). Esta acción buscaba reafirmar que los neogranadinos podían contribuir al conocimiento universal. Sin embargo, esta resistencia tenía un límite: si bien cuestionaba las narrativas coloniales, al mismo tiempo reproducía jerarquías internas que privilegiaban a los criollos sobre otros sectores de la población. En consecuencia, el estudio del clima no fue únicamente un ejercicio científico, sino también un acto de autoafirmación que situaba a los criollos como agentes de saber y de poder. Así, el clima se convertía en un eje central para interpretar la riqueza del territorio y para reforzar la narrativa de los criollos como protagonistas de su destino histórico.

En sus escritos, Caldas llega a insinuar que, aunque el clima afecta a todos los seres organizados, los criollos participan de una dinámica distinta vinculada a un proceso de "evolución social" que les permitiría ejercer un mayor control sobre la naturaleza (Vanegas Useche, 2019). Por contraste, los pueblos indígenas aparecen descritos como sujetos pasivos frente a las "leyes del clima", lo que revela cómo el conocimiento científico estaba imbricado con las tensiones raciales y culturales del momento. Esta dualidad muestra cómo la ciencia no solo servía como herramienta de observación y explicación, sino también como justificación de relaciones de poder y de dominación (Foucault, 2002).

En este sentido, el pensamiento de Caldas sobre el clima y los seres vivos no solo aporta al desarrollo de la ciencia en la Nueva Granada, sino que también constituye un antecedente histórico y genealógico para comprender las formas en que se configuran las identidades y se estructuran las relaciones de poder en la actualidad (Merlo Pinzón *et al*., 2024). La forma en que la ciencia ha sido utilizada tanto para emancipar como para oprimir, según el modo en que se inscriba en las dinámicas

sociales y políticas, prolonga el legado de Caldas más allá de su época (Gómez-Gutiérrez, 2018). Su obra invita, así, a reflexionar sobre cómo el conocimiento puede ser motor de liberación, pero también un instrumento de dominación, dependiendo del marco en el que se produzca y se aplique.

Referencias

Cardona Rodas, H. (2017). Colonialidad del poder y biopolítica etnoracial: Virreinato de Nueva Granada en el contexto de las Reformas Borbónicas. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, *12*(2), 571-594. https://doi.org/10.1590/1981.81222017000200017

Castro-Gómez, S. (2014). *La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Pontificia Universidad Javeriana; Instituto Pensar.

Castro-Gómez, S. y Restrepo, E. (Eds.). (2008). *Genealogías de la colombianidad: Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX* (1ª ed.). Pontificia Universidad Javeriana; Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar.

Cuvi, N. (2018). Tecnociencia y colonialismo en la historia de las Cinchona. *Asclepio*, *70*(1), 215-228. https://doi.org/10.3989/asclepio.2018.08

Cuvi, N. (2020). Expertos, agrobraceros y resistencias durante los inicios de la larga revolución verde en los Andes. *Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC). Revista de la Solcha*, *10*(3), 227-264. https://doi.org/10.32991/2237-2717.2020v10i3.p227-264

Cuvi, N. (2022). Legados de la audacia: Caldas, Humboldt y el conocimiento sobre las quinas, 1801-1821. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, *29*(1), 61-79. https://doi.org/10.1590/s0104-59702022000100004

De Caldas, F. J. (1966). *Obras completas de Francisco José de Caldas: Publicadas por la Universidad Nacional de Colombia como homenaje con motivo del sesquicentenario de su muerte 1816–Octubre 29–1966*. Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2065

De Caldas, F. J. (2018). *Del discurso: "Del influjo del clima sobre los seres organizados"*, 1808. Fotocopioteca. http://www.lugaradudas.org/archivo/publicaciones/fotocopioteca/16_inti_guerrero.pdf

Foucault, M. (1987). *Historia de la sexualidad: la voluntad de saber* (Vol. 1). Siglo XXI Editores.

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.Foucault, M. (2004). *El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica* (F. Perujo, Trad.; 1.ª ed.). Siglo XXI.

Gómez-Gutiérrez, A. (2018). Francisco José de Caldas Tenorio (1768-1816): Antología de artículos sobre su vida y obra en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,* Físicas y Naturales, *42*(Supl.), 10-29. https://doi.org/10.18257/raccefyn.665

Hegel, G. (2017). *La fenomenología del espíritu*. Fondo de Cultura Económica.

Houghton, T. y Tovar, L. (1991). *La ilustración en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.

Maldonado-Torres, N. (2007). On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept. *Cultural Studies*, *21*(2-3), 240-270. https://doi.org/10.1080/09502380601162548

Merlo Pinzón, J. A. (2019). La voluntad de vida como *potentia* en Enrique Dussel. *Revista Filosofía UIS*, *18*(2), 185-205. https://doi.org/10.18273/revfil.v18n2-2019010

Merlo Pinzón, J. A., Orrego Echeverria, I. A., Cepeda H, J. y Cárdenas Arias, J. (2024). Análisis teológico sobre la categoría *signos de los tiempos*. *Perspectiva Teológica*, *56*(3), 555-576. https://doi.org/10.20911/21768757v56n3p555/2024

Nieto Olarte, M. (2009). *Orden natural y orden social: Ciencia y política en el* Semanario del Nuevo Reyno de Granada. Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Pachón, D. (2008). Heidegger y el pensamiento andino. En torno a un libro de Rodolfo Kusch. En *Esbozos filosóficos* (pp. 53-63). Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura del Tolima, Alcaldía del Líbano.

Vanegas Useche, I. (2019). "Un hombre bajado inmediatamente del cielo": La potencia regia en la historia neogranadina. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, *46*(1), 123-148. https://doi.org/10.15446/achsc.v46n1.75555

Villegas Vélez, Á. (2013). El difícil arte de gobernar la Nueva Granada: Biopolítica y proyecto letrado en la comisión corográfica, 1850-1859. *Historia (Santiago)*, *46*(2), 443-467. https://doi.org/10.4067/S0717-71942013000200005

UNIMETA

Del desprecio al reconocimiento: fundamentos normativos en la teoría social de Axel Honneth

Sergio Andrés Alfaro Marenco*

* Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Evaluación y Gestión Educativa de la Universidad Externado de Colombia; editor de la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA

saalfarom@unal.edu.co

https://orcid.org/0009-0009-4011-3839

Resumen

El presente documento tiene como objetivo brindar un panorama general de las intenciones teóricas del filósofo alemán Alex Honneth, usualmente denominado como el mayor representante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Nos centraremos en cuatro de sus obras: *La sociedad del desprecio*, *La lucha por el reconocimiento*, *Reconocimiento y menosprecio: sobre la fundamentación normativa de una teoría social* y *reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento*. La primera parte de este artículo se ocupará de esclarecer la noción de reconocimiento expuesta por Hegel en algunos escritos redactados en el periodo de Jena, antes de la composición de la *Fenomenología* del *Espíritu*. Asimismo, se resaltará la importancia de una lucha por el reconocimiento en las relaciones sociales, políticas y económicas del individuo, a la luz de ciertas teorías de la psicología, donde hallamos en el individuo la capacidad de percibirse a sí mismo como si lo percibiese otra persona; es decir, percibirse como otro. Para Honneth, la filosofía del derecho de Hegel, una vez se despoja de las afirmaciones de la *Lógica* y de la exigencia de mantener el Estado planteado por la teoría hegeliana, puede establecerse "como un proyecto de una teoría normativa de aquellas esferas de reconocimiento recíproco cuyo mantenimiento es constitutivo para la identidad moral de las sociedades modernas" (Honneth, 1997, p. 19; 2016, p. 57). Todas estas nociones son necesarias para la formulación de una ética determinada, además de la comprensión de conflictos en las sociedades modernas a la luz de la noción hegeliana de reconocimiento.

La segunda parte del artículo consistirá en identificar las distintas formas del reconocimiento recíproco, para luego entender la importancia que tiene la noción de reconocimiento en el ámbito político. Seguidamente, se intentará abarcar la relación con el que fue su maestro, Jürgen Habermas, y la ampliación que hace Honneth de la teoría de la acción comunicativa, en contraste con las anteriores generaciones de la Escuela de Frankfurt, dotando la teoría de un carácter realmente crítico que se había perdido en la crítica social negativista de autores como Adorno, permitiendo pensarse una pragmática cuyo interés es la emancipación, la liberación del dominio de los distintos sistemas. Las dos últimas partes del artículo darán cuenta de la noción que Honneth tiene de menosprecio y sus respectivas formas contrarias en el reconocimiento.

> Según Honneth, los conflictos morales y sociales surgen de la lucha por el reconocimiento frente al desprecio, sin necesidad de una justificación racional como plantea Habermas.

Palabras clave: menosprecio, reconocimiento, acción comunicativa, teoría crítica e injusticia moral.

Abstract

This document aims to provide a general overview of the theoretical project of the German philosopher Axel Honneth, widely considered the foremost representative of the third generation of the Frankfurt School. The analysis will focus on four of his seminal works: *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, and *Reification: A Recognition-Theoretical View*. The first part of this article will elucidate the notion of recognition as developed by Hegel in his Jena-period writings, before the *Phenomenology of*

Spirit. It will also highlight the importance of a "struggle for recognition" in the individual's social, political, and economic relations, drawing on psychological theories that posit the individual's capacity for self-objectification, that is, the ability to perceive oneself from an external perspective. For Honneth, Hegel's philosophy of right, once disentangled from the framework of the *Logic* and the specific demands of the Hegelian State, can be established "as a project of a normative theory of those spheres of mutual recognition whose maintenance is constitutive for the moral identity of modern societies" (Honneth, 1999, p. 19; 2016, p. 57). These conceptual foundations are necessary for formulating a specific social ethic and for understanding contemporary conflicts in modern societies through the Hegelian concept of recognition.

The second part will identify the distinct forms of mutual recognition to subsequently understand the concept's significance in the political realm. It will then examine Honneth's intellectual relationship with his teacher, Jürgen Habermas, and his extension of the theory of communicative action, contrasting it with earlier generations of the Frankfurt School. This move imbues Critical Theory with a renewed critical character, which Honneth argues was lost in the negativist social critique of theorists like Adorno, thereby enabling emancipatory pragmatics focused on liberation from systemic domination. The final two parts of the article will analyze Honneth's notion of disrespect and its corresponding antithetical forms within the architecture of recognition.

Keywords: disrespect, recognition, communicative action, Critical Theory, moral injustice

Noción hegeliana del reconocimiento

Característica fundamental del aparataje teórico hegeliano y de la transición del Espíritu al Absoluto, es decir, de la evolución de la verdad declarada por la conciencia sensible en la constante contradicción que supone esa verdad enfrentada a la realidad del mundo, es la capacidad del Espíritu — i.e. de la conciencia sensible —, de autodiferenciarse; de poder ser en sí misma y, al mismo tiempo, lo otro de sí. En este proceso debe percibirse el Espíritu a sí mismo como un otro, para que, luego de tal diferenciación, vuelva a sí. En caso contrario, no hallaría contradicción alguna en su verdad y sería incapaz hacer la síntesis que le permite declarar una nueva verdad; es decir, no existiría el movimiento dialéctico que hace posible su tránsito al Absoluto. A esto se le llama "el doble movimiento de la alienación y la vuelta a sí", que es la transición en la cual el Espíritu es llevado a su presentación, primero en su constitución interna, para luego alienarse en la objetividad de la naturaleza y, finalmente, retornar a la esfera de su propia subjetividad, al saber absoluto sobre ella misma. Hegel titula estas etapas en su obra como el Espíritu "subjetivo", "real" y "absoluto", que representan, correspondientemente, la relación del sujeto individual consigo mismo, las relaciones institucionales de los sujetos entre sí y las relaciones de los sujetos socializados en su reflexión con el mundo.

Sin embargo, para Honneth, la exigencia del sistema hegeliano de preponderar el saber absoluto como punto final de la transición del Espíritu descuida el ámbito de lo ético en lo que respecta a una conciencia de derechos intersubjetivos vinculantes, ya que esta idea solo es posible bajo la premisa de que el individuo se conciba como un sujeto de producciones prácticas. La mera reflexión subjetiva del espíritu sobre sí mismo es incompleta, "porque solo puede informar al sujeto que él es capaz de producir el mundo categorialmente, pero no de manera práctica, en cuanto a su contenido" (Honneth, 1997a, p. 48). Por eso, en la teoría hegeliana se propone como primer escalón de la experiencia instrumental de la voluntad el *trabajo*, en virtud de que este va unido a una disociación de las tendencias del *yo*. En él, el sujeto toma plena conciencia de su *hacer*, algo imposible en una dimensión absolutamente cognitiva de su experiencia. En el hacer práctico, esto es, en la producción de objetos del trabajo, es donde en principio se experimenta el sujeto individual a sí mismo como un ser capaz de acciones; la autodisciplina que requiere el trabajo suscita en él la consideración de que puede hacerse a sí mismo. Estrictamente hablando, solo puede considerarse a sí mismo como "cosa" activa, como un individuo que se adapta a la causalidad

natural, a través de su capacidad de actuar, de hacerse a sí mismo. Pero no podrá tener conciencia de sí en tanto persona jurídica, ya que para ello necesitaría primero concebirse a sí mismo como una conciencia intersubjetiva, lo que lo facultaría para tener conciencia individual de derecho.

Pero, para que Hegel pudiera explicar la relación entre el ámbito moral y el reconocimiento, no solo bastaba la conexión entre la autoconciencia y el reconocimiento; era necesario también comprender la formación de la autoconciencia como una dinámica recíproca entre su adquisición y el desarrollo moral de una sociedad. Este desarrollo es planteado como un progreso moral que depende de los grados específicos de la relación que tiene el sujeto consigo mismo, es decir, como un tránsito que se desarrolla en virtud de la creciente concepción que tiene el individuo sobre sí mismo en las distintas esferas del reconocimiento, que son más apremiantes debido al conflicto intersubjetivo que plantea la necesidad de un reconocimiento cada vez mayor en las distintas esferas de la propia persona.

Formas del reconocimiento recíproco

"Una vez captadas las premisas intersubjetivas de la formación de la autoconciencia, es necesario distinguir tres formas de reconocimiento recíproco". (Honneth, 2009, p. 20). La primera de aquellas formas es el *amor*, que es el reconocimiento por medio del cual los sujetos se reconocen mutuamente en sus necesidades específicas. Un ejemplo que lo explicita es la interacción sexual, donde cada uno de los sujetos se reconoce en el otro, en la medida en que estos desean el deseo del otro, permitiéndoles saberse-en-el-otro, mientras en la esfera del trabajo solo era posible concebirse como cosificado en la mera acción. En la relación sexual, el sujeto individual se experimenta en el deseo a través de la contraposición del deseo del otro, como una subjetividad anhelante y viva, logrando representar una primera forma de sujetos contrapuestos en un conocimiento intersubjetivo compartido, puesto que cada uno es igual al otro en la medida en que se contraponen deseándose entre sí. De ello resulta que parte fundamental de la construcción de identidad de un sujeto, en principio, está sujeta a determinados actos de reconocimiento por parte de otros sujetos; si un individuo no reconoce al otro como un sujeto anhelante y vivo, no podrá concebirse ni experimentarse a sí mismo como un sujeto anhelante y vivo, ya que deberá otorgarle al otro las cualidades y facultades que desea que se le reconozcan.

> Solo el sentimiento de ser reconocido y afirmado en su específica naturaleza de querencia hace que en un sujeto se origine el grado de confianza en sí que le capacita para una legítima participación en la formación de la voluntad política. (Honneth, 1997a, p. 53)

Ya que en el amor llegan a ser validados los afectos y necesidades del individuo cuando son correspondidos por el otro, el reconocimiento propio del amor debe ser capaz de aprobar y exhortar afectivamente al sujeto. Esta actitud positiva que experimenta la persona en el reconocimiento que le posibilita el otro es la *autoconfianza*, y es premisa necesaria para el desarrollo posterior de las distintas formas de autoestima, puesto que provee al individuo de un reconocimiento en el estrato más básico de su seguridad emocional y física.

Con todo ello, el amor, la amistad, las relaciones sexuales y una relación de la misma especie de estas, como lo es la familia, no son suficientes para que el sujeto individual se pueda concebir como persona jurídica, ya que el espíritu subjetivo no se ve interpelado, en principio, por conflictos que le hagan cuestionarse acerca de normas globales y generales de reglamentación en el trato social, sino únicamente restringido al ámbito familiar, amoroso y sexual determinado. Así, el sujeto no se concibe como una persona dotada de derechos intersubjetivamente reconocidos.

Por ello, la segunda forma de reconocimiento es el *derecho*, que es la conciencia positiva que tiene una persona libre sobre sí misma, derivada de un respeto moral fundamental. Es en la medida en que cada familia particular intenta apropiarse de ciertos bienes económicos que, ineludiblemente, derivarán en el reconocimiento de los derechos de las familias adyacentes por el común aprovechamiento del territorio que habitan.

El derecho sería, entonces, la relación existente entre las personas, donde surgirá la limitación de las libertades, producción misma del derecho. Esto se debe a que parte del reconocimiento intersubjetivo de los derechos particulares, proviene de la concepción de sí mismo y sus derechos a través del reconocimiento de los derechos del otro. Surge, entonces, el Contrato, donde ya no se habla de un estado de naturaleza que hace necesario su nacimiento por la lucha entre individuos y la concepción antropológica del egocentrismo —como en la teoría Hobbesiana—, sino como fundado en las relaciones sociales intersubjetivas, que tienen a su base la noción del reconocimiento del otro y sus derechos y, en consecuencia, de sí mismo y los propios. En el aparataje teórico de Hegel, ya no se interpreta este paso al contrato como una lucha por la autoafirmación, sino como una lucha por el reconocimiento.

> En el conflicto entre dos sujetos,
>
> ambos [...] tienen ya al otro positivamente incluido en sus orientaciones de acción, antes de entrar en conflicto hostilmente entre sí; ambos deben haber aceptado de antemano al otro como un compañero de interacción, respecto del que quieren que su acción dependa. (Honneth, 1997a, p. 62)

Al conflicto lo precede un entendimiento entre los individuos, que consiste en la recíproca afirmación de su interacción como sujetos, es decir, el reconocimiento recíproco de sus derechos intersubjetivos. De suerte que la voluntad individual de una persona dotada de derechos logre concebirse en conexión con las reacciones de cualquier individuo, teniendo la capacidad de participar en la esfera de la vida social. A diferencia del amor, el derecho es una forma de reconocimiento recíproco que no tiene limitaciones con respecto a las relaciones sociales y que expresa la capacidad particular de que el sujeto se conciba en conexión con los otros como condición de su propio concebirse a sí mismo como una persona con derechos. De aquí nace el *autorrespeto* como otra etapa en la formación de la autoestima.

> Como el derecho representa una relación de reconocimiento recíproco por la que cualquier persona experimenta el mismo respeto, en tanto que portador de las mismas pretensiones, no puede precisamente servir como un médium de respeto de la historia vital de cada individuo singular; una forma individualizada de reconocimiento tal presupone, por encima de la operación cognitiva, un elemento de participación emocional que hace experimentable la vida del otro como un intento arriesgado de la autorrealización individual. (Honneth, 1997a, p. 74)

Así, la tercera forma será el *Estado* —que podríamos llamar también la esfera estatal moral—, donde el reconocimiento versa sobre la forma en la cual le es permitido al individuo la apreciación de los otros y las cualidades de estos que contribuyen al orden social. Estado sería, entonces, la conglomeración de voluntades singulares que reconocen intersubjetivamente sus derechos y los de los otros, la constitución de una comunidad donde los valores son universales y donde el reconocimiento se fundamenta en la pertenencia y reconocimiento de sí mismo en la especie, que da paso a la solidaridad y una legítima *autoestima*.

Dimensión política de la noción de reconocimiento

Gracias a las discusiones contemporáneas propuestas por movimientos como el multiculturalismo y el feminismo, llegó a ser tema de suma importancia filosófica el reconocimiento de la identidad y diferencia de grupos e individuos y, por ende, surgió la necesidad de una visión normativa que permitiera tal reconocimiento. Es aquí donde la teoría hegeliana tiene un nuevo horizonte, puesto que, aunque en la filosofía práctica siempre ha sido fundamental el concepto de reconocimiento, como lo era en la antigüedad a partir de la noción de un sujeto cuyo único reconocimiento como individuo era dado por su labor en la *polis* —condición necesaria de una vida satisfactoria—, o en Kant a partir de la noción del imperativo categórico y el tratamiento de los hombres como un fin en sí mismo, Hegel fue el único que basó su teoría ética en el reconocimiento como principio moral.

Debido a la creciente toma de importancia de la noción de reconocimiento en el tratamiento de los conflictos intersubjetivos de la sociedad, se entendió que las relaciones sociales no podían medirse en función de una mera distribución correcta y justa de los bienes materiales; la idea de lo justo debía estar ligada, en parte, "a la concepción de cómo y en calidad de qué los individuos se [reconocen] los unos a los otros" (Honneth, 2009, pp. 14-15). Con la hegemonía del marxismo y la repercusión del liberalismo propuesto por Rawls para la formulación de una teoría normativa del orden político, llegó a darse la unanimidad con respecto a la necesidad de eliminar las desigualdades sociales y económicas que no fuesen posibles de justificar racionalmente. Por lo cual, ya el problema no es la distribución equitativa y funcional de bienes materiales; ahora el propósito es la dignidad y el respeto por la diferencia entre grupos e individuos, a la que subyace el reconocimiento como dinámica propia de tales valores. "El objetivo normativo ya no es la eliminación de la desigualdad, sino la prevención de la humillación o del menosprecio" (Honneth, 2009, p. 10).

Para Nancy Fraser (2011), esta es una transición de la idea de redistribución a la de reconocimiento; si la idea de la distribución en su seno guardaba una noción de justicia como igualdad social con respecto a la materialidad que posibilita la vida digna de los individuos, la idea de justicia que nace del reconocimiento está emparentada con las nociones de dignidad e integridad. Este cambio, para Honneth, puede explicarse por medio de dos tesis alternativas:

- a través del desencanto político, que nace del fracaso de la igualdad material propuesta por el proyecto de justicia como distribución;

- el aumento de una sensibilidad moral, que se expresa en los nuevos movimientos sociales que luchan por el reconocimiento de las minorías y sus derechos.

Honneth intenta justificar la segunda de ellas, debido a que comprende los conflictos sociales y de distribución como supeditados a luchas por el reconocimiento. A pesar de ello, se plantean problemas en una moral fundada en el reconocimiento: el primero de ellos es la multiplicidad de significados que se le ven atribuidos a esta noción, ya que varía en el feminismo, comunitarismo, multiculturalismo e, incluso, en la noción de respeto mutuo de Habermas. Seguidamente, el segundo problema será, entonces, el de las distintas aplicaciones morales que tiene cada una de las varias nociones de reconocimiento y, en esa medida, el tercero de ellos será si existe una raíz unitaria de todos los diferentes puntos de vista de la moralidad basada en el reconocimiento.

Honneth, no obstante, dota de una preeminencia al reconocimiento, al establecerlo como fuente previa a todo conflicto intersubjetivo, de tinte moral, social e incluso económico. Para él, el reconocimiento es previo al conocimiento; es condición necesaria de la aprehensión neutral de la realidad, tal como en Hegel lo es del Espíritu Objetivo, el mundo común. Un estrato de implicación existencial subyace a toda relación objetiva con el mundo; tal es la formación de la autoconciencia como precedente de la condición necesaria de la intersubjetividad para la formación de la identidad y, por ello, del reconocimiento en las tres esferas del sistema hegeliano: amor, derecho y Estado. En la base de todo conflicto social y de toda especificidad de la conducta humana está "la actitud comunicativa de adopción de perspectiva" (Honneth, 1997b, p. 61); esa capacidad de ubicarse en la perspectiva del otro para ver como él ve está enraizada en una interacción previa, de tinte existencial, que la posibilita. Podemos decir que esa interacción previa es la formación de la autoconciencia en la primera etapa del reconocimiento, y que este fundamenta con suficiencia la dimensión política del reconocimiento en las esferas más avanzadas, como el Estado.

Ampliación de la teoría de la acción comunicativa: Honneth y Habermas

La crítica social negativista efectuada por los antecesores de Honneth, y más particularmente por Theodor Adorno, pronosticaba una autodesintegración del núcleo social de la sociedad en conjunto, debido al crecimiento descontrolado de los sistemas megatécnicos, la automatización

del gobierno del sistema frente a la vida social y el avance de un tipo de vaciamiento de la personalidad humana, tendencia que para Honneth estaba marcada por la deshumanización. Críticas de este estilo son la de Foucault (1980), donde se concibe el mundo social como una reacción pasiva frente a la estrategia superior de los aparatos de poder; Breuer (1895), con una creencia desmesurada en la omnipotencia de la tecnología y la ciencia; y, por último, Baudrillard (2010), que concibe a los hombres como meros objetos de un poder del sistema que se reproduce constantemente. Pero, bajo esta perspectiva, cualquier intento de una teoría crítica que intente ubicarse dentro de la realidad social e incitar la emancipación será fallido, ya que no puede ser posible ningún cambio a la luz de una perspectiva tan radical del dominio y la alienación de los individuos.

Frente a esta decaída de la teoría crítica clásica de la Escuela de Frankfurt, aparece la teoría de la acción comunicativa —formulada por Habermas (2011)—, que abre nuevamente un acceso a la esfera emancipatoria de la acción, donde la condición para el progreso social no tiene su énfasis en el trabajo social, como en el paradigma marxista, sino a través de la interacción social. Es a partir de una pragmática del lenguaje, llamada acción comunicativa, que, en un estado de igualdad del lenguaje, debido a su carácter enteramente racional e intelectivo, se oponen las críticas sociales negativistas, puesto que es capaz de ofrecer una noción sistemática de lo que actualmente está amenazado por el dominio de los sistemas; en este caso, la capacidad humana del entendimiento comunicativo, acechada por las formas generalizadas del poder burocrático y el dinero (Habermas, 2011).

Para Habermas, "en la acción comunicativa los sujetos se encuentran en el horizonte de expectativas normativas, cuya decepción siempre puede convertirse de nuevo en fuente de exigencias morales que apuntan más allá de las formas establecidas de dominio" (Honneth, 2011, p. 134). La acción comunicativa se fundamenta en aquellas reglas lingüísticas que poseen un carácter normativo, debido a que establecen las condiciones de un entendimiento libre de cualquier dominio sistémico, equiparando un potencial normativo de la interacción social con las condiciones lingüísticas de un entendimiento libre (Habermas, 2011). Esto es posible para Habermas a través de la racionalización comunicativa del mundo de la vida; es decir, la argumentación racional e intelectiva del lenguaje común y ordinario. Para Honneth es imposible, en cualquier caso, puesto que, en el proceso de emancipación, desde esta perspectiva, los sujetos implicados en las experiencias morales perciben un prejuicio de aquello que esperan moralmente, tienen expectativas morales; podría decirse, una pretensión de identidad moral adquirida mediante el proceso de socialización. Las experiencias morales no tienen su origen en las restricciones de las competencias lingüísticas o argumentativas; para Honneth, nacen de las reivindicaciones de identidad adquiridas en la socialización del individuo.

El menosprecio

La principal motivación para la protesta social y un comportamiento emancipatorio por parte del individuo no nace de una deducción positiva de principios morales; surge, más bien, de la experiencia de la violación de ideas de justicia dadas intuitivamente, cuyo núcleo normativo son las expectativas relacionadas con el respeto hacia la propia dignidad, su integridad y honor. En este sentido, se presenta el *reconocimiento social* como normativa anterior a la normativa lingüística y como fundamento primero de toda acción comunicativa: "Los sujetos se encuentran en el horizonte de expectativas mutuas, como personas morales y para encontrar reconocimiento por sus méritos sociales" (Honneth, 2011, p. 25). Podemos entender esto como aquel espacio donde toda injusticia moral en la que un individuo se vea afectado radicaría en un reconocimiento considerado como merecido, pero que no fue otorgado. Honneth designa como sentimientos de desprecio social aquellas experiencias donde los humanos tienen situaciones de ese tipo, donde no se les da el reconocimiento que creen que se merecen. Dado que la experiencia del reconocimiento es una condición del desarrollo de la identidad del ser humano en totalidad, la falta de él generará un sentimiento de amenaza, de que se ha vulnerado su personalidad; es a esto a lo que Honneth llama precisamente *desprecio*.

De esta manera, Honneth arguye que se ha solventado el vacío de la teoría habermasiana en la medida en que, a través de la noción de reconocimiento, se hacen evidentes socialmente los sentimientos de injusticia y las formas de desprecio que estructuralmente acompañan esos sentimientos, mediante la cual se puede hacer una crítica de las relaciones de reconocimiento en las sociedades como un hecho social precientífico. Ya veíamos cómo las estructuras de poder ejercían control en los individuos sin que ellos tuviesen plena consciencia de ello; por eso, aquí el prejuicio o la intuición de una injusticia moral, que tiene como presupuesto el desprecio, o la idea intuitiva de justicia —que se funda en el reconocimiento—, no necesitan argumentación alguna. Bien podría pasar que, solo por esta conciencia de que no se le ha reconocido al sujeto debidamente sus logros y capacidades, llegue a captarlo como una injusticia o un mal moral. Según Honneth, debemos centrarnos en las causas sociales que son responsables de la violación sistemática de las condiciones de reconocimiento.

A través de un enfoque fenomenológico de daños, es posible dar con las circunstancias de injusticia que son vividas por los individuos, y no solo hacer manifiesta la relación entre moral y reconocimiento, sino que, a partir de los criterios con los cuales los afectados por la injusticia diferencian una adversidad o violencia de un delito moral, es posible identificar si existe una negación o privación del reconocimiento. Lo que constituye el daño moral es la propia concepción que tiene el individuo de sí mismo y cómo este reconoce que se le ha privado de un reconocimiento que él consideraba necesario. Y, así como en el desarrollo de la autoconciencia se daba un tránsito entre tres esferas del reconocimiento, en este caso a cada una de ellas le corresponde una forma de menosprecio:

- Con respecto al amor, del que nace la *autoconfianza*, la forma más básica de menosprecio que le corresponde es la *humillación*, que se expresa en casos como la tortura y violación, que destruyen una parte básica de la confianza del individuo en el mundo y en sí mismo.

- Con respecto al derecho, del que nace el *autorrespeto*, es tomada como forma de menosprecio la *exclusión social* y la *privación de derechos*, que surge del desconocimiento de los otros como titulares de los mismos derechos que uno, cuando el individuo es incapaz de verse a sí mismo como persona que comparte con los miembros de su comunidad la imputabilidad moral de una persona jurídica.

- Con respecto al Estado, del que nace la *autoestima*, es tomada como forma de menosprecio la *degradación del valor social de formas de autorrealización*, como lo sería la devaluación de ciertas formas de vida o acciones no reconocidas por el Estado, reconocimiento que es necesario para la aprobación solidaria de las capacidades y formas de vida que desarrolla particularmente cada individuo.

Patologías de la sociedad capitalista

En la tradición de la Escuela de Frankfurt, se ha formado la tendencia a suponer como "trastorno" decisivo de las sociedades modernas el hecho de que la razón instrumental alcance el predominio frente a otras formas de acción y de conocimiento: todas las manifestaciones y fenómenos que puedan parecer como "patológicos" en la realidad social se interpretan aquí como efecto consecuente de una autonomización de actitudes sociales conectadas con la meta del dominio sobre la naturaleza (Honneth, 2011).

Para Habermas, el peligro que nos acecha es la colonización del mundo de la vida por parte de sistemas organizados según la racionalidad de fines, es decir, la razón instrumental, que tendría como consecuencia la desaparición del ámbito libre y sin dominio del lenguaje en su idealidad y racionalidad, por esta orientación al uso instrumental del pensamiento, puesto que ha acrecentado la técnica, la ciencia y los sistemas de control, resultando en un poder que amenaza la vida. Cuando se hacen evidentes los desarrollos deficientes de la vida social, íntimamente relacionados con las condiciones estructurales del reconocimiento mutuo, no podemos recurrir al entendimiento libre y a las condiciones racionales que de él surgen; aquí no

tiene lugar la identificación positiva de las injusticias por medio de la razón.

Honneth concibe la teoría de Habermas ya no en un sentido de la concepción de un entendimiento racional; resulta más fundamental la concepción de las condiciones para el reconocimiento de los individuos, y es de allí de donde puede surgir un auténtico diagnóstico crítico, que ya no puede ser comprimido, silenciado u ocultado en el estrecho esquema de lo racional, puesto que el criterio de identificación de lo deficiente en la vida social es la idea del reconocimiento. Aquí partimos de la configuración de una identidad social a través de la toma de conciencia del individuo como miembro de una sociedad, a partir del reconocimiento de los otros, que le permite concebir el derecho propio, como el de los otros individuos, en la intersubjetividad del reconocimiento recíproco de los sujetos que conforman una sociedad. La patología social sería entendida, entonces, como una deficiencia en las condiciones de reconocimiento de una sociedad, *v. gr.* el trabajo doméstico no remunerado, enunciado por las feministas; o la determinación de un estatus social de un trabajo, como podría ser en la psicología y su desprecio en ciertas esferas sociales.

> Todas las reflexiones que he presentado hasta ahora convergen en la tesis de que son los múltiples esfuerzos de una lucha de reconocimiento aquello en lo que una teoría crítica podrá justificar sus pretensiones normativas: las experiencias morales que los sujetos tienen con el desprecio de sus exigencias de identidad forman, por así decir, la instancia precientífica con referencia a la cual se puede mostrar que una crítica de las relaciones sociales de la comunicación no se encuentra completamente sin respaldo en la realidad social. (Honneth, 2011, p. 144)

Conclusión

Tenemos, entonces, que a los distintos estadios del reconocimiento les corresponden distintas formas de desprecio. Tales estadios en el reconocimiento son *amor*, *derecho* y *solidaridad*; sus formas contrarias en el desprecio son *violación*, *desposesión* y *deshonra*. Según Honneth, son estas formas de desprecio las que permiten que el sujeto se vea motivado a entrar en una lucha práctica o en un conflicto, puesto que la autorrealización y el reconocimiento de sus capacidades y logros, que subyacen a estos, son una necesidad apremiante y más fundamental. Es esta aseveración de la lucha por el reconocimiento la que subyace a los conflictos morales y sociales, contraria a la posición de Habermas, en virtud de la cual no es necesario remitirse a un *telos* del entendimiento, a un *a priori* comunicativo racional, para hablar de la reprobación moral; podemos decir que tales reprobaciones y formas del desprecio no tienen, en principio, por qué ser justificadas a través de una argumentación de corte racional e intelectivo, puesto que la desaprobación, la falta de reconocimiento y la lucha por este explican ya suficientemente el conflicto moral y ético.

Referencias

Baudrillard, J. (2010). *El sistema de los objetos*. Siglo XXI.

Breuer, J. (1895). *Estudios sobre la histeria (1893-1895)*. Amorrortu.

Foucault, M. (1980). *La microfísica del poder*. La Piqueta.

Fraser, N. (2011). *Dilemas de la justicia en el siglo XXI: género y globalización*. Ediciones UIB.

Habermas, J. (2011). *Teoría de la acción comunicativa*. Santillana.

Honneth, A. (1997a). *La lucha por el reconocimiento*. Crítica.

Honneth, A. (1997b). *Reificación: Un estudio en la teoría del reconocimiento*. Katz.

Honneth, A. (2009). *Reconocimiento y menosprecio: Sobre la fundamentación normativa de una teoría social*. Katz.

Honneth, A. (2011). *La sociedad del desprecio*. Trotta.

Honneth, A. (2016). Sufrimiento de indeterminación: Una reactualización de la *Filosofía del derecho* hegeliana. En F. J. Hernández y B. Herzog (trads.), *Patologías de la libertad* (pp. 49-159). Las Cuarenta. (Obra original publicada en 2001).